

DOSSIER “REGÍMENES AUTORITARIOS, NUEVAS GEOGRAFÍAS Y ESPACIOS DE VIDA EN AMÉRICA LATINA”

COORDINADO POR PAMELA COLOMBO Y CARLOS SALAMANCA



Parque de la Ciudad, ex Interama, 2016

Fotografía: Emiliana Míguez

TEXTOS DE LUJÁN MENAZZI / GABRIELA TAVELLA / DEBORAH REGINA LEAL NEVES /
ULRICH OSLENDER/ PAULO TAVARES

ENTREVISTA A ELIZABETH LIRA: INCLUIR LA SALUD MENTAL EN LA AGENDA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

SUMARIO

EDITORIAL

El espacio como vector de violencia, Claudia Fled y
Valentina Salvi

DOSSIER

“Regímenes autoritarios, nuevas geografías y espacios de vida en América Latina”, coordinado por Pamela Colombo y Carlos Salamanca

Introducción. Violencias de Estado, violencias de espacio.

*Políticas de reconfiguración territorial y urbana en
América Latina*, Pamela Colombo y Carlos Salamanca

*“Un nuevo paisaje urbano”. La producción de espacios
verdes públicos durante la última dictadura cívico-militar
en Buenos Aires*, Luján Menazzi

*Interama: el parque de diversiones para la ciudad de Buenos
Aires de la dictadura militar (1976-1983)*, Gabriela Tavella

O Minhocão como expressão autoritária em São Paulo,
Deborah Regina Leal Neves

*Terror y geografía: examinar múltiples espacialidades en
un mundo “aterrorizado”*, Ulrich Oslander

*La naturaleza política de la selva: políticas de
desplazamiento forzado de pueblos indígenas durante el
régimen militar en Brasil*, Paulo Tavares

ENTREVISTAS/ CONFERENCIAS

Incluir la salud mental en la agenda de los derechos humanos,
entrevista a Elizabeth Lira por Carolina Aguilera

RESEÑAS

Crónica de una trayectoria, Nadia Tahir

*La construcción de una ética del “Nunca más”. Un análisis
de las memorias transnacionales de Argentina, España y
Europa del Este*, Wanda Weschler

*Defensa de la historia comparada para la reinterpretación de
los exilios políticos del Cono Sur*, Jorge de Hoyos Puente

*Límites y transgresiones del humor gráfico durante la
dictadura militar*, Mariela Acevedo

Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria
es una publicación del **Núcleo de Estudios sobre Memoria**
(CIS-CONICET / IDES) y cuenta con el auspicio de la Red
Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria Social (RIEMS).

STAFF

Directora: Claudia Feld

Coordinadoras Generales: Adriana D'Ottavio y María
Luisa Diz

Coordinadora Sección Entrevistas: Soledad Catoggio

Coordinadora Sección Reseñas: Florencia Larralde Armas

Comité editorial: Marina Franco, Guillermina Fressoli,
Cora Gamarnik, Santiago Garaño, Florencia Larralde
Armas, Luciana Messina, Laura Mombello, Alejandra
Oberti, Valentina Salvi, Soledad Catoggio, Estefanía
Hecht-Toltl

Comité científico: Jens Andermann (University of
Zurich), Alejandro Baer (University of Minnesota),
Vikki Bell (University of London), Pilar Calveiro

(Benemérita Universidad Autónoma de la Ciudad de
México), Alejandro Cerda (Universidad Autónoma
Metropolitana / Xochimilco, México), Rubén Chababo

(Universidad Nacional de Rosario), Carlos Demasi
(Universidad de la República, Uruguay), Katherine
Hite (Vassar College, Nueva York), Elizabeth Jelin

(CIS-CONICET/ IDES), Daniel Lvovich (UNGS /
CONICET), Joanna Page (University of Cambridge),
Nelly Richard (Universidad de Arte y Ciencias Sociales,

ARCIS, Chile), Régine Robin (Universidad de Paris-X
Nanterre / Universidad de Québec), Héctor Schmucler

(Universidad Nacional de Córdoba), Kathryn Sikkink
(Harvard University), Steve Stern (University of
Wisconsin-Madison), Sofia Tiscornia (UBA / CELS),
Ricard Vinyes (Universidad de Barcelona)

Diagramación: Nicolás Gil

Corrección: Joaquín Vitali, Julián Delgado

Ilustración de tapa: Parque de la Ciudad, ex Interama,
2016. **Fotografía:** Emiliana Miguelez

Esta publicación cuenta con el apoyo editorial del
Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) perteneciente al Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).

Correos electrónicos: revistamemoria@yahoo.com.ar;
nucleomemoria@yahoo.com.ar

Página Web: <http://memoria.ides.org.ar>

Revista online: <http://ppct.caicyt.gov.ar/clepsidra>

Núcleo de Estudios sobre Memoria, CIS-CONICET/
IDES, Aráoz 2838, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina



CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES



EDITORIAL

El espacio como vector de la violencia

El presente número de *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria* se publica cuando están por cumplirse 40 años de la realización del Campeonato Mundial de Fútbol en la Argentina. Celebrado en plena dictadura, en junio de 1978, aquel campeonato de fútbol fue visto –en ese momento y, más enfáticamente, *a posteriori*– como una operación de distracción y ocultamiento en un contexto en el que se levantaban cada vez más voces, en el escenario internacional, para denunciar la sanguinaria represión ejecutada por el gobierno dictatorial. Muchos recuerdan un documental francés filmado en esos años que, en una misma toma aérea, lograba mostrar la ESMA y, a lo lejos, el estadio mundialista de River Plate: el horror y la fiesta conviviendo a algunas cuerdas de distancia. Estas dos dimensiones, la fase “productiva” (y no solo represiva) de la dictadura –es decir, lo que la dictadura logró efectivamente producir en cuanto a comportamientos, valores, prácticas y modos de percepción–, y la dimensión espacial de las acciones dictatoriales, no solo en la Argentina, sino también en América Latina, constituyen los ejes centrales que estructuran el dossier temático de este número.

En efecto, el dossier “Regímenes autoritarios, nuevas geografías y espacios de vida en América Latina”, coordinado por Pamela Colombo y Carlos Salamanca, constituye la primera parte de una convocatoria publicada en 2016 bajo la consigna “Políticas urbanas en contextos de violencia de Estado en América Latina”. El interrogante que orientó el llamado a la presentación de artículos fue, justamente, cuál había sido el vínculo entre los regímenes autoritarios y el control y la reconfiguración espacial. Ante la gran cantidad de artículos recibidos, la decisión editorial fue publicarlos en dos números sucesivos. De este modo, el dossier que aparece en el presente número de *Clepsidra* se dedica a explorar dicha faceta productiva de la violencia

estatal, que buscó transformar las sociedades mediante la creación y la remodelación de territorios y ciudades, reconfigurando asimismo las formas de pensar, habitar y sentir esos “nuevos” lugares. En esta misma línea, este número analiza también el modo en que las sociedades posdictatoriales gestionan, recuerdan y utilizan tales infraestructuras en la actualidad.

El próximo número, a publicarse en octubre de 2018, derivado de la misma convocatoria y también bajo la coordinación de Salamanca y Colombo, hará foco en un aspecto sustantivo de la relación entre regímenes autoritarios y políticas espaciales, como fue la erradicación de villas miseria y de asentamientos informales, y explorará la consecuente estigmatización y marginación de la que fueron objeto sus habitantes.

Con este enfoque novedoso, que consiste en analizar los proyectos autoritarios del pasado reciente bajo la perspectiva específica del uso y la organización del espacio, estos dos dossiers temáticos no solo permiten integrar al campo de investigaciones sobre memoria e historia reciente una problemática hasta ahora poco explorada, sino que también aportan trabajos empíricos que sirven para explicar muchas de las consecuencias sociales y económicas, a largo plazo, de tales regímenes.

Tal como explican Colombo y Salamanca en su introducción al dossier de este número, el estudio del vínculo entre las reconfiguraciones espaciales y los regímenes autoritarios que las han emprendido permite comprender tanto el proyecto de sociedad y de Estado-Nación que estructuraba a estos gobiernos, como los efectos y legados que dichas intervenciones espaciales han tenido y tienen, hasta el tiempo presente, en las vidas, las prácticas y las percepciones de los/as ciudadanos/as latinoamericanos/as. Por cierto, la segmentación, la marginación y la estigmatización de diversas comunidades urbanas y rurales son moneda corriente en sociedades profundamente desiguales como las nuestras. Tales efectos sociales y culturales, como es sabido, se potencian en etapas, como la presente, en la que gobiernos de corte neoliberal predominan en nuestra región, ejecutando nuevas intervenciones sobre el espacio, con proyectos de privatización, segmentación y arrasamiento, que tienen líneas de continuidad con los que se es-

tudian en este dossier. Solo para nombrar un ejemplo extendido en latinoamérica, el avance en todas las ciudades grandes y medianas de barrios cerrados, *countries* o condominios, resultado del predominio de agentes privados en el desarrollo urbano en detrimento de la planificación urbana estatal, con el consecuente impacto socio-ambiental que provocan, la segmentación espacial y social que configuran y la desigualdad económica que fomentan.

En otro orden de cosas, este número se publica a pocos días de que el Tribunal Oral Federal N° 6 ha decidido otorgar la prisión domiciliaria al represor argentino Miguel Etchecolatz, quien fue director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura y tuvo a su cargo el funcionamiento de veintiún centros clandestinos de detención. Más recientemente, Etchecolatz recibió condenas en cinco causas que fueron unificadas en la pena de cadena perpetua y se lo vincula directamente con la desaparición, en 2006, del testigo Jorge Julio López. Una desaparición aún impune. A pesar de su prontuario y de las condenas recibidas, este represor cumple, actualmente, prisión domiciliaria en su casa ubicada en el Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. La fuerte reacción a esta medida por parte de la comunidad marplatense y, especialmente, de los/as vecinos/as del Bosque Peralta Ramos, da cuenta de la percepción de un sector importante de la sociedad acerca de la imposibilidad de convivir y compartir espacios sociales y urbanos con quienes han sido probadamente ejecutores del plan genocida. La proximidad espacial se ha vuelto, en este caso, una continuidad del horror y de la violencia y, por cierto, un signo de impunidad.

La dignidad humana frente a la violencia extrema es uno de los ejes centrales que se desarrolla en la sección **Entrevistas/Conferencias** de este número de *Clepsidra*. En ella, la psicóloga chilena Elizabeth Lira, quien recibió en 2017 el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile por su labor humanitaria y de investigación a lo largo de cuatro décadas, explica de qué manera el desarrollo de un enfoque específico desde la salud mental permitió, en plena dictadura pinochetista, intervenir en respuesta a la emergencia y proporcionar atención a las víctimas de la

represión. La trayectoria de Lira, que incluye también su participación en la Mesa de Diálogo de derechos humanos y en la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante los gobiernos de la transición democrática chilena, es recorrida exhaustivamente en la conversación con la socióloga Carolina Aguilera que publicamos aquí. En este derrotero, Lira articula tres cuestiones en apariencia autónomas como son la intervención terapéutica, la denuncia humanitaria y la reflexión historiográfica.

Una vez más, concluimos esta nota editorial con nuestro agradecimiento a quienes han colaborado con la publicación de este nuevo número. Queremos agradecer nuevamente al equipo editorial de *Clepsidra* por su compromiso con la publicación de cada número, especialmente, en este caso, a Florencia Larralde Armas por su tarea en la sección **Reseñas**, a Soledad Catoggio por el cuidadoso trabajo de edición de la entrevista y a Adriana D'Ottavio por la coordinación de las evaluaciones. La inmensa tarea de organización, edición y coordinación del dossier llevada adelante por Pamela Colombo y Carlos Salamanca merece un especial reconocimiento de nuestra parte. Joaquín Vitali y Julián Delgado, encargados de la corrección de este número, y Nicolás Gil, a cargo de la maquetación, también merecen nuestro agradecimiento. Para terminar, queremos hacer pública nuestra gratitud a Carolina Aguilera por realizar en Santiago de Chile la entrevista publicada en este número y a Emiliana Miguez por ceder los derechos de la fotografía que ilustra esta tapa.

Claudia Feld

Directora de *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria*

Valentina Salvi

Directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria

Dossier: “Regímenes autoritarios, nuevas geografías y espacios de vida en América Latina”

COORDINADO POR PAMELA COLOMBO Y CARLOS SALAMANCA



Fotografía: Emiliana Miguez

Introducción. Violencias de Estado, violencias de espacio. Políticas de reconfiguración territorial y urbana en América Latina

Este dossier temático se propone examinar proyectos de reconfiguración arquitectónica y territorial (tanto urbana como rural) emprendidos en contextos de violencia de Estado en el pasado reciente en América Latina. Las políticas del espacio que exploramos en este número abarcan proyectos como construcción de autopistas, programas de urbanización forzada de la selva, construc-

ción de espacios públicos, creación de espacios verdes y diseño de parques de diversiones.

A partir de un abordaje interdisciplinario, los autores que forman parte de este dossier analizan cómo fueron creados y puestos en marcha estos proyectos en distintos lugares de América Latina, cuáles eran sus objetivos estratégicos y qué impactos socio-espaciales tuvieron. Este dossier explora también el modo en que las sociedades gestionan, recuerdan y utilizan estas infraestructuras. A su vez, algunos de los artículos incorporan una mirada crítica sobre las experiencias de asociación, organización y de resistencia por parte de las poblaciones y de los usuarios en torno a la producción de estos nuevos espacios.

Tres décadas de trabajos académicos, museográficos y artísticos en América Latina han legado una profusa producción acerca de los espacios de violencia estatal. En particular, existe abundante literatura sobre espacios en donde se han producido secuestros, masacres, torturas y/o desapariciones, campos de concentración o lugares de inhumación de cadáveres. No obstante, hasta el momento ha sido poco estudiado el costado “creador” o “productivo” de la violencia estatal, es decir, las políticas que se propusieron producir y transformar las sociedades a través de la creación y la transformación de territorios y ciudades, y de las formas de pensar, habitar o sentir esos “nuevos” lugares.

A partir del trabajo seminal de Henri Lefebvre (1991) y el de otros autores como David Harvey (1990), Michel De Certeau (2007), Doreen Massey (2011), Edward Said (1979) y Edward Soja (1989), se ha promovido una reorientación hacia una mirada crítica de la dimensión del espacio, dando lugar a lo que se conoce como el “giro espacial” en las ciencias sociales y humanas. Una perspectiva en la que no se piensa el espacio como algo inalterable, geométrico y preexistente a lo social, sino más bien, es entendido como producido socialmente y como productor de lo social. La teoría crítica del espacio es crucial para comprender la centralidad de la pregunta que estructura las contribuciones de este dossier: cuál es el vínculo entre los regímenes autoritarios y el control y la reconfiguración espacial. Es importante señalar que no es nuestro objetivo realizar una lista de proyectos arquitectónicos o urbanos realizados durante diferentes dictaduras. Más bien, creemos que el estudio del vínculo entre el espacio y los regímenes autoritarios es una vía de entrada privilegiada para entender por un lado, el proyecto de sociedad y de Estado-Nación que estructuraba estos gobiernos y, por otro lado, analizar cuál fue el impacto social de estas reconfiguraciones territoriales y urbanas en la sociedad.

En otras palabras, consideramos que las políticas espaciales diseñadas e implementadas durante los regímenes autoritarios en el pasado reciente condicionan las relaciones socio-espaciales del presente. El debate que abrimos con este dossier quiere pensar ahí, justo en el cruce de proyectos de reconfiguración radical de espacios de vida que constituyen un legado activo pero silencioso para la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas. ¿Qué parte de las geografías de la segregación y de la desigualdad que caracterizan hoy las ciudades latinoamericanas encuentran su origen en estos contextos de regímenes autoritarios? ¿Cuánto hay en las experiencias individuales y colectivas del presente de resonancias de rutinas espaciales del pasado?

En continuidad con investigaciones previas (Schindel y Colombo, 2014; Colombo, 2017; Salamanca, 2011 y 2015), los autores que aquí publicamos continúan explorando y abriendo nuevas preguntas al investigar el vínculo entre la violencia de Estado y el espacio. Ubicándose en los puntos de articulación de pasado y presente, este dossier explora diversos interrogantes: ¿cómo fueron creados y puestos en marcha estos proyectos urbanos? ¿Cuáles eran sus objetivos estratégicos? ¿Qué impacto tuvieron estos proyectos de reconfiguración rural y urbana sobre las comunidades a la que estuvieron dirigidas? ¿De qué manera sobreviven estas infraestructuras en la actualidad? ¿Cómo se las gestiona, recuerda y habita décadas después?

El análisis de las políticas de creación y remodelación de espacios urbanos en contextos de violencia estatal enriquece el campo de investigaciones sobre violencia y memoria social en el pasado reciente al estar centrado en una dimensión menos explorada: la de un “mundo nuevo” que se intentó edificar a través de la violencia.

Como lo demuestran los trabajos que aquí se presentan, estamos frente a un objeto de análisis interdisciplinario por definición que, sin importar la orientación teórica de quien investigue, exige indagar en campos disciplinarios diversos, en los entrecruzamientos de geografía, arquitectura, historia, urbanismo y sociología. En sí mismos y en su conjunto, estos trabajos ofrecen diversas líneas de indagación que esperamos puedan abrir una línea de trabajo al interior de los estudios sobre memoria social del pasado reciente. A modo de invitación para la lectura, subrayamos a continuación solo algunas de las muchas líneas posibles presentes en los trabajos aquí publicados.

Antes de entrar de lleno en estas posibles líneas de lectura queremos mencionar que uno de los temas privilegiados en las investigaciones sobre políticas espaciales y dictadura son los asentamientos informales. Las políticas de los gobiernos militares hacia los asentamientos informales y sus habitantes han sido uno de los campos más fécondos en los estudios sobre las políticas espaciales de la dictadura y, de hecho, en el momento actual se están llevando a cabo numerosas investigaciones sobre la temática.

Las denominadas “villas miseria” y sus habitantes, los “villeros”, ocuparon en efecto un lugar importante en la agenda de los gobiernos militares a diferentes escalas. Las formas informales y populares de producción del espacio se vieron coartadas cuando no prohibidas a través de políticas de estigmatización, erradicación y de coerción en general. Dada la importancia de este tema y la centralidad que ha adquirido en los trabajos sobre la materia, hemos decidido organizar otro volumen, que será publicado en el número 10 de *Clepsidra* (octubre de 2018).

Versiones autoritarias de la naturaleza y el ecologismo

Nuevos parques nacionales, construcción de represas, habilitaciones o restricciones al acceso y uso de cursos de agua, nuevas políticas en el manejo de líquidos cloacales y basurales. A diferentes escalas, los gobiernos militares contribuyeron a la transformación de los modos en que se concibe la relación entre naturaleza, economía y sociedad. Como afirma Swynghedouw “todo proyecto

medioambiental es un proceso socio-político y cada programa político implica necesariamente un proyecto medioambiental” (2014: 68). En efecto, las preocupaciones ambientales y las sensibilidades ecológicas suelen estar atravesadas por cuestiones de clase social, beneficio económico, racismo y distribución desigual de costos y beneficios en el espacio. El ecologismo, además de movimiento social (Castells, 1998), fue uno de los componentes de un proyecto político que tuvo su expresión en el seno de los gobiernos militares. Producido de manera autoritaria, este ecologismo también era promovido con eslóganes como “mejorar la calidad de vida” o “salvar la Tierra” bajo los cuales yacía la apuesta por el papel de la ciencia y la tecnología en el control y la dominación del espacio, y una idea relativamente clara de naturaleza. Como algunos trabajos anteriores (Ríos, 2014; Menazzi Canese, 2013; Carré y Fernández, 2013) y ciertos artículos de este número lo muestran, Tavares, principalmente, para los gobiernos autoritarios se trata de conquistar, dominar, rediseñar la naturaleza para el crecimiento y la producción económica, exponerla para el esparcimiento, y reorganizarla al servicio del “desarrollo y la seguridad nacional”.

Ciudad, ciudadanos, ciudadanías e infraestructura

El conjunto de los artículos que aquí se presentan abordan no solo las características de los espacios edificados, sino también las prácticas que allí se promovieron y produjeron. Los espacios de vida no se construyen en abstracto; al diseñarlos y construirlos, en algunos casos, se piensa en aquellos que lo habitarán y, en otros, en aquellos que serán excluidos.

Como bien lo ha demostrado Oscar Oszlak (1991), la ciudad de Buenos Aires fue reconfigurada profundamente para “erradicar” todos aquellos “ocupantes” que no tenían ni el dinero ni la “cultura” para “merecer” vivir en esta nueva ciudad reorganizada y rediseñada por las juntas militares. Los espacios verdes de los que habla Menazzi, o los parques de diversiones sobre los que trabaja Tavella, no fueron pensados como lugares inclusivos para todos los habitantes urbanos. En este tipo de proyectos de reconfiguración radical, los sujetos son imaginados y tratados en función de un tipo ideal de ciudadano y de unas formas ideales, moralmente adecuadas de habitar esos espacios.

Territorios, violencias y alteridades

Los trabajos de Oslender y Tavares que aquí presentamos se sitúan en los estudios sobre la construcción de alteridades dando continuidad a la idea de que en los casos del terrorismo de Estado en América Latina, “la transformación de la realidad, la polarización extrema y la deshumanización del otro han sido algunas de las bases de prácticas de violencia a gran escala y de la posterior impunidad de que gozaron sus perpetradores” (Salamanca, 2011: 21).

Estas formas de “relación con el otro” implican una doble dimensión (espacial y social) y procesos de imaginación, producción, control y hegemonía (Said, 1978). Como lo afirma Tavares, imaginarios coloniales y modernos encuentran en los pueblos indígenas de la Amazonia, continuidades como la idea de lo incompleto, de la ausencia o la carencia. Tavares da cuenta de la “campana genocida”,

articulada en aquellas ideas y llevada a cabo por el Estado brasileño durante la dictadura militar de los años setenta y ochenta. Subrayamos su propuesta metodológica, una verdadera arqueología botánica de la violencia registrada en mapas, documentos y en el mismo bosque amazónico de cuya textura histórica los Sistemas de Información Geográfica permiten descifrar al hacer reaparecer formas de vida de pueblos originarios que la dictadura brasilera intentó destruir. Por su parte Oslender, en una arqueología de otro tipo, muestra cómo los discursos sobre el terror fueron incorporados en una larga historia de relación con diversas alteridades amenazantes tanto en su forma espacial como social.

Grandes obras de infraestructura: la dislocación de las escalas

Al igual que otras obras como las represas de Itaipú en la frontera argentino-paraguaya, Chixoy en Guatemala o la de Salto Grande en Entre Ríos, varios de los artículos que aquí se presentan demuestran que una parte importante de los perjuicios causados por obras de infraestructura realizadas por gobiernos autoritarios tienen que ver con problemas de escala. En este número, Leal Neves aborda el “Minhocão”, una intervención urbana en Sao Paulo construida entre 1969 y 1971, un verdadero “símbolo del poder autoritario”. Esta intervención es un caso emblemático de grandes obras urbanas que privilegian el uso del automóvil en detrimento de los peatones o los habitantes que viven en las proximidades de los entornos en donde se ubican esas obras. Los programas urbanos y arquitectónicos de estas obras (su diseño, sus materiales, su vinculación con el entorno, entre otros), al igual que la forma en que son construidos, muestran que, para los gobiernos dictatoriales, la naturaleza y la sociedad son susceptibles de ser reorganizadas para “su mejor funcionamiento” a través de la ciencia y la técnica aplicadas a la producción del espacio.

En esta línea, lejos de interesarse en el impacto de estas obras a escala local, los gobiernos militares se fascinan y desean fascinar con grandes obras de infraestructura presentadas como prueba de eficacia de su proyecto económico-político. Un verdadero instrumento de propaganda que se expone en ferias internacionales, cortos publicitarios y documentales promocionales, y que la gran escala viene a respaldar. Al igual que otros temas característicos del gobierno militar como las fronteras o el honor nacional, la gran escala de las obras de infraestructura es una de las bases de esas expresiones autoritarias del nacionalismo.

Espacios de bienestar y felicidad en los regímenes dictatoriales

Algunos artículos exploran también el modo en que el espacio urbano y su planificación pensada hasta el mínimo detalle aparecen muchas veces como el tapiz de un sueño de modernidad, progreso y civilización. Sueño que se quiso imponer por la fuerza durante los regímenes dictatoriales que se instauraron en América Latina durante las décadas del sesenta, setenta y ochenta. Tanto Luján Menazzi como Gabriela Tavella exploran el costado estético de estos proyectos “distópicos”, analizando en particular el caso argentino.

El trabajo de Menazzi, trae el estudio de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires rediseñados durante el Proceso de Reorganización Nacional. Pro-

yectos que abren preguntas no solo sobre la importancia de estos programas para la dictadura, sino también sobre el ideal de belleza y calidad de vida que pretendían imponer a la sociedad argentina. El análisis de los parques que se crearon permite examinar, entre otras cosas, el costado estético de la “reorganización” que deseaban llevar a cabo. Estos trabajos demuestran que en la morfología de los nuevos espacios es posible leer esta idea de orden nuevo.

En estrecha consonancia, el trabajo de Tavella trae el análisis de mega-proyectos de creación de parques de diversiones como el Parque Interama (hoy conocido como Parque de la Ciudad) y el proyecto del parque zoo-fitogeográfico, ambos en la ciudad de Buenos Aires. Al margen de los peculiares detalles arquitectónicos que cada uno de estos proyectos presenta, a partir del trabajo sobre estos espacios de entretenimiento la autora encuentra un tema hasta hoy poco explorado: el ideal no solo de “ciudad jardín” (Rama, 1998), sino también de una ciudadanía “modelo” y “feliz”. El análisis de este tipo de proyectos abre una nueva discusión sobre el ideal de bienestar y “felicidad” que tenían los regímenes dictatoriales, y que consideramos que puede constituir en el futuro una fecunda línea de investigación.

De los regímenes a las prácticas autoritarias

Para concluir, haremos referencia al trabajo de Oslender aquí publicado que propone no solo analizar cómo desde la disciplina de la geografía nos hemos relacionado con los discursos de la “guerra al terror”, sino también cómo podemos pensar el terror geográficamente y más críticamente para sacarnos de la reducción conceptual e intelectual propuesta en los discursos dominantes de la “guerra al terror”.

Centrándose en el caso del Pacífico colombiano, aunque sin abordar explícitamente un régimen de violencia estatal, Oslender aporta en varias discusiones entre las que destacaremos tres. La primera se relaciona con la definición del terror como un conjunto heterogéneo, dinámico y multiescalar de espacios, emociones, prácticas, movimientos y materialidades. En segundo lugar, en la línea de los aportes de James Scott (2000), Oslender aborda el tema de la “resistencia” y más específicamente algunos aspectos de su espacialidad. La resistencia se muestra aquí como una política multiescalar que se alimenta, entre otros, de experiencia histórica y conocimiento territorial. Finalmente, el autor nos permite cuestionar la idea de gobierno militar como única expresión del régimen autoritario y muestra cómo las prácticas socioespaciales autoritarias y de violencia no son dominio exclusivo de las dictaduras. Aún más, su análisis de las políticas del terror y del terrorismo en contextos democráticos actuales invita a pensar en sus similitudes y vínculos con algunas prácticas y discursos de los gobiernos militares de la década del setenta.

Preguntarnos por los vínculos entre los procesos de violencia ocurridos en el pasado y el espacio implica por definición una pregunta sobre el presente. La persistencia actual de prácticas autoritarias en el espacio y a través del espacio en numerosos rincones de América Latina invita a seguir indagando en las maneras en las que, al proponer nuevas geografías y espacios de vida, las violencias crean.

El estudio de estas violencias creadoras tal vez sea una de las condiciones de posibilidad para desmontar un sinnúmero de situaciones de injusticia socio-espacial que siguen condicionando nuestra relación con las ciudades y las regiones para quienes habitamos en ellas.

Pamela Colombo (Investigadora Marie Sk-Curie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París)

Carlos Salamanca (Investigador adjunto Conicet, Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales, Universidad Nacional de Rosario)

Bibliografía

Carré, Marie-Noëlle y Fernández, Leonardo (2013). “¿El cinturón ecológico? Análisis de una marca urbana que nunca existió”. En: *Eure*, vol. 39, nro. 117: pp. 49-68.

Colombo, Pamela (2017). *Espacios de desaparición. Vivir e imaginar los lugares de la violencia estatal (Tucumán, 1975-1983)*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Harvey, David (1990). *The Condition of Postmodernity. An Enquire into the Origins of Cultural Change*. USA: Blackwell.

Lefebvre, Henri (1974). *La production de l'espace*. Mayenne: Éditions Anthropos.

Massey, Doreen (2011). *For Space*. Los Angeles: SAGE.

Menazzi Canese, Luján (2013). “Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983)”. En: *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XVII, nro. 429. Disponible en: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-429.htm> Fecha de última consulta: marzo de 2017.

Oszlak, Oscar (1991). *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano*. Buenos Aires: Estudios Cedes - Editorial Humanitas.

Rama, Angel (1998). *Ciudad letrada*. Montevideo: Arca.

Ríos, Diego (2014). “Riesgo de desastres y urbanismo neoliberal: los cimientos de las transformaciones urbano-ambientales contemporáneas en Tigre/ Buenos Aires”. En: *HALAC. Belo Horizonte*, vol. IV, nro. 1, setiembre de 2014-febrero 2015: pp. 57-86.

Said, Edward (1979). *Orientalism*. New York: Random House.

Said, Edward (2003) [1978]. *Orientalism*. Nueva York: Pinguin.

Salamanca, Carlos (2011). *Performances políticos del heroísmo y la impunidad*. Bogotá: Universidad Nacional.

Salamanca, Carlos (2015). “Políticas de la dictadura militar en una región de frontera. Espacios, tiempos e identidades en el Chaco argentino”. En: *Revista de Estudios sobre genocidio*, vol. 7, nro. 10: pp. 157-176. Disponible en: <http://revis-tagenocidio.com.ar> Fecha de última consulta marzo de 2017.

Scott, James (2000). *Los dominados y el arte de la Resistencia*. México: Era.

Schindel, Estela y Colombo, Pamela (eds.) (2014). *Space and the Memories of Violence. Landscapes of Erasure, Disappearance and Exception*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Soja, Edward (1994). “The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Rethorisation”. En: Gregory, Derek y Urry, John (eds.); *Social Relations and Spatial Structures*. Londres: Macmillan.

Swyngedouw, Erik (2014). “Not A Drop of Water...?: State, Modernity and the Production of Nature in Spain, 1898–2010”. En: *Environment and History*, vol. 20, nro. 1: pp. 67-92. Disponible en: doi 10.3197/096734014X13851121443445 Fecha de última consulta: marzo de 2017.

“Un nuevo paisaje urbano” . La producción de espacios verdes públicos durante la última dictadura cívico-militar en Buenos Aires*

LUJÁN MENAZZI**

Resumen

El artículo analiza la construcción de espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), considerando las diversas lógicas que se articularon para producirlos. Como se desarrolla en el texto, estos espacios yuxtaponen concepciones técnicas que trascienden la escala nacional, los objetivos políticos del gobierno, las respuestas que se producen desde una disciplina –con su tradición y debates– y los sentidos que posteriormente se le otorgan. Este análisis, a partir de las concepciones y tradiciones de diversos actores, permite también comprender la compleja articulación entre continuidades y rupturas que supusieron las intervenciones urbanas del período y ciertos efectos contradictorios en el espacio urbano. A su vez, el análisis de la construcción de espacios públicos durante la última dictadura cobra interés en tanto contribuye al estudio de la producción de ciudad en contextos autoritarios.

Palabras clave: dictadura cívico-militar; espacios públicos; Buenos Aires; urbanismo.

Fecha de recepción: 23-01-2017

Fecha de aceptación: 15-09-2017

“A new Urban Landscape”. The Production of Public Green Spaces during the last Military Dictatorship in Buenos Aires

Abstract

The article analyzes the construction of public green spaces in the city of Buenos Aires during the last military dictatorship, considering the different logics that produced them. In this text we argue that these spaces juxtapose technical conceptions that transcend the national scale, the government’s political objectives, the answers produced by a discipline -with its tradition and debates-, and the senses that are subsequently granted to these productions. This article, based on the conceptions and traditions of different actors, also allows us to understand the complex articulation between continuities and ruptures that the urban interventions of the period supposed and certain contradictory effects they had in the urban space. Furthermore, the analysis of the construction of public spaces during the last dictatorship allows us to understand the production of the city in authoritarian contexts.

Keywords: Military Dictatorship; Public Spaces; Buenos Aires; Urbanism.

.....
*Una versión inicial de este trabajo fue presentada en el seminario “Ciudad y Dictadura: Proyectos urbanos de la última dictadura en Argentina (1976-1983)” realizado en 2016 en el IDES, organizado por Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS/IDES-CONICET) y el Proyecto europeo Marie Sk-Curie “Violent settlements: strategic villages and clandestine burial sites in Latin America” (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris). Agradezco la sugerente convocatoria de Pamela Colombo y Valentina Salvi, que me permitieron desarrollar este escrito y los estimulantes comentarios de Guillermo Jajamovich, Marina Franco y Ana Sánchez Trolliet.

** Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora Asistente-CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: lmnazzi@yahoo.com.ar

Introducción: la “Dictadura” en la ciudad, entre continuidades y rupturas

Las obras públicas, las reglamentaciones, los usos permitidos y prohibidos del suelo, las formas avaladas de habitar y aquellas erradicadas buscan producir cierto tipo de espacio urbano, cierta clase de ciudad, que, por extensión, interpela, habilita o expulsa a diversos grupos sociales. Se trata de una propuesta material –muchas veces de largo plazo y difícil de modificar– respecto del modo de vida considerado adecuado y al tipo de sociedad que se busca desarrollar, señalando quiénes tienen derecho a habitar, de qué modo deben hacerlo, qué tipo de construcciones se pueden levantar y qué usos están permitidos. En este sentido, el análisis de las intervenciones urbanas de la última dictadura cobra relevancia como modo de abordar un período aún no cicatrizado, en el cual, explícitamente, las transformaciones en la ciudad formaron parte activa del proyecto político dictatorial de reorganización nacional.¹

La ciudad de Buenos Aires, en tanto capital del país, se volvió una suerte de vidriera en la cual ensayar, de modo eficaz, veloz y drástico, ciertas transformaciones que lograran de modo vistoso el establecimiento de un nuevo orden o un retorno al orden. La gestión de la ciudad, bajo el mando del Brigadier Cacciatore, se caracterizó por la realización de muchísimas intervenciones de fuerte impacto físico, social y económico; y la modificación de normas que reglamentaban los usos permitidos, los modos de construir y las características de las construcciones.² En términos de obra pública, tanto desde el nivel nacional como municipal, se construyeron muchos equipamientos urbanos: autopistas, parques, plazas, escuelas municipales, estacionamientos subterráneos, terminal de ómnibus, ensanches de calles y avenidas, se finalizaron grandes conjuntos habitacionales y se construyeron edificios emblemáticos de la ciudad, como el complejo de transmisión Argentina Televisora Color y el Centro Cultural Recoleta.³ A estas obras se suma la demolición y erradicación de equipamiento considerado obsoleto o contaminante y el traslado o descentralización de servicios. Todas estas intervenciones modificaron profunda y permanentemente el perfil de la ciudad.

Esto habilita una serie de interrogantes respecto a la especificidad de las intervenciones del período, en términos de estética, función o perfil de ciudad al que apuntaban, y en qué medida resultaban un quiebre total con los modos previos y posteriores de intervenir.⁴

.....
1 La última dictadura militar argentina se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983. Fue un régimen que cercenó fuertemente los derechos políticos y civiles y dejó un saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos. El gobierno autoritario se proclamó como una ruptura absoluta con lo inmediato anterior y una restauración del orden y valores perdidos, autodenominándose “Proceso de Reorganización Nacional”. Nos referiremos al gobierno dictatorial indistintamente como “Dictadura” o “Proceso”.

2 Osvaldo Cacciatore fue el Intendente de facto de la Municipalidad de Buenos Aires entre el 2 de Abril de 1976 y 31 de Marzo 1982. Perteneciente a la aviación militar, había participado de fallidos intentos de golpes de estado previamente.

3 Al hablar de equipamiento urbano nos referimos a bienes, edificios e infraestructuras que sustentan el funcionamiento de una ciudad.

4 Una excelente reflexión sobre estas cuestiones desde el punto de vista de la disciplina arquitectónica se encuentra en Silvestri (2002).

Retomando varias investigaciones sobre el período para el caso de la ciudad de Buenos Aires, los procesos urbanos iniciados en la “Dictadura” son interpretados tanto en términos de continuidad como en términos de ruptura con períodos previos. El análisis de Oszlak (1991) enfatiza que a partir de la “Dictadura” se pone en vigencia una nueva jerarquía del espacio urbano sustentada por diversas políticas de expulsión de la ciudad de los sectores más vulnerables. Liernur (2001) reconoce transformaciones claves en las temáticas, los modos de gestión, las características de la organización industrial y las condiciones de los encargos durante el período dictatorial, sin dejar de señalar que la “Dictadura” funcionó como una culminación del período previo. Esto se debe a que el Estado seguía funcionando como promotor de grandes obras y planes, aunque en un sentido inverso al que hasta entonces sustentaba. Silvestri y Gorelik (2000) coinciden en este rol del Estado y también observan tanto continuidades como cambios en las políticas urbanas de la “Dictadura”. En la misma línea, Domínguez Roca (2005) observa que las políticas urbanas articularon elementos que podrían considerarse contradictorios, ya que algunos presentaban líneas de continuidad con planes y propuestas precedentes y otros marcaban fuertes diferencias con las ideas previas. Estos autores acuerdan en señalar la capacidad del “Proceso” de materializar numerosos proyectos debido a una fuerte voluntad de acción transformadora respecto al espacio urbano, que privilegiaba la intervención por sobre la proyección o planificación, y al contexto político autoritario que limitaba las resistencias (Jajamovich y Menazzi, 2012). Vinculada a esta perspectiva que privilegiaba el hacer, estaba la búsqueda de introducir cambios drásticos e irreversibles en el espacio urbano, que solucionarían problemas de vieja data (Oszlak, 1991). A pesar del contexto autoritario habilitante y de la voluntad transformadora, la gestión dictatorial no logró materializar todos los proyectos, quedando varios truncos. Esto da cuenta de las limitaciones del poder dictatorial, cuestión abordada en trabajos previos (Menazzi, 2013a; 2013b).

Ciertos análisis empíricos abogan por la misma línea de señalar continuidades de algunas tradiciones, problemáticas y proyectos y rupturas en los modos de materializar muchas de esas iniciativas, como el caso de las autopistas porteñas (Tavella, 2014), el Cinturón Ecológico (Fernández, 2016) y los intentos de traslado del Mercado Nacional de Hacienda (Menazzi, 2013a).

En este marco, el análisis de la construcción de espacios verdes públicos cobra particular interés por varios motivos. Por un lado, permite establecer un diálogo con aquellos trabajos que se enfocaron en la producción de espacios de desaparición y de muerte, para pensar la construcción de espacios de ocio y de vida. Así, varios autores se focalizaron en los centros clandestinos de detención (Calveiro, 1998; Colombo, 2011) o en las marcas de las políticas urbanas autoritarias en espacios segregados (Bettanin, 2014). Los espacios de ocio y los espacios de muerte interpelaban evidentemente a diversos grupos sociales, pero en ambos casos se estaba produciendo ciudad, instando ciertos usos, modos de habitar y suprimiendo otros. Así, tal como señala Bodenschatz en su análisis sobre las dictaduras europeas de entreguerras “las dictaduras (...) no sólo se basaban en la represión y el terror, sino que además pugnaron activamente para conseguir el consentimiento popular para su proyecto político (...) El urbanismo era parte del proyecto políti-

co, produciendo consenso” (Bodenschatz, 2016:1044). En este sentido, vale la pena indagar las promesas de ocio, de verde y aire libre cifradas en la producción de espacios públicos en el contexto autoritario.

En segundo término, el análisis de la producción de estos espacios permite repensar la noción de “espacio público” como producto material, pero también como ámbito público, que interpela a cierta clase de ciudadanos y favorece ciertos usos. La enorme cantidad de parques y plazas producidas en el período resulta muy llamativa, en un marco de clausura de la esfera pública de debate. El corrimiento entre la dimensión material y las virtudes políticas y sociales que tradicionalmente se le atribuyen a estos espacios resulta por demás interesante y vuelve necesaria la reflexión sobre los sentidos que la gestión del “Proceso” le otorgaba a estos ámbitos, alejados de las concepciones que los veían como esfera pública.⁵

En tercer lugar, llama poderosamente la atención tanto la cantidad de espacios verdes construidos como ciertas características estéticas de los mismos. Respecto a la cantidad, resultaba sugerente para reflexionar sobre el tipo de ciudad que contribuían a construir y al tipo de ciudad que desplazaban. Respecto a la estética, se asociaron ciertas características de las plazas y parques (la gran cantidad de cemento utilizado, sus divisiones funcionales, sus desniveles, etc.) con el espíritu represivo de la última dictadura. Sin embargo, varios autores matizan y complejizan las alineaciones automáticas entre lenguajes arquitectónicos y poder político. Silvestri (2000) afirma que las relaciones entre poder y forma arquitectónica existen, pero son ambiguas y tangenciales mientras que Ballent (2005), señala que se trata de dos historias con relativa autonomía que se entrecruzan en determinados puntos. Así, se busca evitar la subordinación de una lógica a otra, o la idea de reflejo entre una dinámica técnica o arquitectónica y una dinámica política. A su vez la heterogeneidad propia del Estado implica complejizar también los vínculos que sostiene con diversas tendencias disciplinares, técnicas y estéticas (Ballent, 2005). Respecto al período analizado en este trabajo, en términos de Silvestri y Gorelik “las obras urbanas de la dictadura no supusieron un lenguaje específico. Resultaría así vano leer directamente significados políticos en el lenguaje de las formas específicas adoptadas en estas intervenciones” (2001: 469).

En este sentido, vale la pena indagar por la producción de estos espacios de ocio desde estas múltiples dimensiones: ¿por qué se produjeron tantos espacios recreativos? ¿Qué características tenían? ¿Qué venían a reemplazar? ¿Qué tipo de ciudad perfilaban y qué tipo de ciudad desplazaban? Se intentará avanzar en estas líneas de indagación, con la idea de contribuir a las investigaciones sobre la producción de ciudad en contextos políticos autoritarios.⁶

.....
5 La categoría de espacio público condensa un ambiguo y contradictorio conjunto de expectativas y definiciones que fueron variando a lo largo del tiempo, tal como demuestran diversos estudios históricos (Gorelik, 2004; Aliata y Silvestri, 2001). Este artículo busca dar cuenta de la producción material de los espacios verdes públicos en un período autoritario, indagando el modo en que los distintos actores intervinientes plasmaban diversos sentidos al respecto. En este sentido, dada la perspectiva histórica-interpretativa en la que se basa, se privilegian las perspectivas de los propios actores intervinientes, sin partir de una definición normativa de espacio público.

6 Por cuestiones de extensión, en este artículo nos focalizaremos en las plazas más que en los parques.

Siguiendo un enfoque metodológico histórico interpretativo, se analizó y puso en diálogo una importante diversidad de fuentes. Se utilizaron artículos y noticias aparecidas en periódicos nacionales (*La Nación*, *Clarín*, *La Prensa*) y revistas especializadas (*Summa*, *Revista Construcciones*, *Sociedad Central de Arquitectos*, *Trama*, *Nuestra Arquitectura*). Asimismo, se analizaron fuentes oficiales, como decretos, leyes, planes y proyectos, así como declaraciones y discursos de los protagonistas publicados en diversos formatos. Se tomaron también materiales producidos en el marco de trabajos previos acerca del período, como entrevistas a vecinos y a funcionarios del gobierno porteño (Menazzi, 2013a). Parte del desafío del trabajo se vincula con la dificultad de reconstruir procesos ligados a definición e implementación de políticas públicas en un contexto político autoritario con las restricciones a la información que esto supone. La diversidad y amplitud de las fuentes y su puesta en diálogo permitió reconstruir artesanalmente los procesos analizados, sin embargo, la información no es uniforme respecto a todas las intervenciones y protagonistas, en tanto las fuentes no lo permiten y las iniciativas analizadas no se englobaron en un plan sistemático y organizado. Tal como se desarrolla en el trabajo, el origen de las tierras, su ubicación en la ciudad, la modalidad de encargo y contratación, los estudios y empresas constructoras contratadas y el diseño de las plazas, no respondieron a un criterio unificado, sino a decisiones coyunturales y no lineales de gestión.

Siguiendo esta perspectiva, en la siguiente sección se desarrollan ciertas concepciones acerca de la producción de ciudad y los actores intervinientes. A continuación se describen las concepciones técnicas a partir de las cuales se decidió desde el Municipio construir los espacios verdes. En la cuarta sección se realiza una breve enumeración de los espacios verdes construidos, los equipamientos que reemplazaban y ciertas características de la modalidad de intervención. El quinto segmento se focaliza en el diseño de estos espacios, dando cuenta de la perspectiva de la Municipalidad como comitente y de los arquitectos que diseñaron los espacios. El sexto apartado da cuenta brevemente de las inauguraciones, como momento de escenificación y puesta de sentido que los distintos niveles gubernamentales le otorgaban a estas intervenciones. A continuación, se analizan las críticas realizadas a estas intervenciones y ciertas reapropiaciones y resignificaciones. Por último, se desarrollan algunas reflexiones para concluir, considerando a estos espacios verdes públicos como el resultado de la articulación de diversas lógicas, no siempre coherentes entre sí.

La ciudad como producción colectiva

Retomando la perspectiva de diversos autores (Pírez, 1995; Rodríguez y Di Virgilio *et al.*, 2007), la ciudad se conforma a partir de un complejo entramado de actores que con lógicas, tiempos y recursos diversos, inciden en la configuración del espacio urbano, aún en contextos políticos fuertemente autoritarios. En este sentido, se analiza la construcción de espacios verdes considerando las diversas lógicas que se articularon para producirlos.

El artículo se propone dar cuenta de estos entrecruzamientos: por un lado una Municipalidad que retoma perspectivas técnicas internacionales, en que la preocupación sobre lo ambiental y la cantidad de verde por habitante en las ciudades cobraba relevancia. La Municipalidad, también, intentaba avanzar en el cumpli-

miento de metas políticas, ligadas a materializar transformaciones drásticas en la ciudad, en búsqueda de lograr una ciudad ordenada, con un perfil residencial para clases medias y de servicios. Estas metas se vinculaban también con dar cuenta de la eficacia de la gestión comunal frente a sus responsables políticos directos: el gobierno nacional.⁷ Este, por su parte, buscaba que Buenos Aires funcionara como prueba de su capacidad para mostrar transformaciones e intentaba transmitir la imagen de una ciudad modernizada, limpia y ordenada que desmintiera las acusaciones internacionales sobre violaciones a derechos humanos y campos de concentración. Por otra parte, los arquitectos intervinientes en el diseño y construcción de esos espacios tuvieron oportunidad de experimentar diseños novedosos, en sintonía con tendencias internacionales, inmersos en sus propios debates disciplinares. Posteriormente, el diseño y características de estos espacios fueron resignificados desde el sentido común, asociando las plazas y su diseño a las características represivas del régimen.

Así, como se desarrolla en el texto, estos espacios yuxtaponen concepciones técnicas que trascienden la escala nacional, objetivos políticos del comitente, las respuestas que desde una disciplina –con su tradición y debates– se producen y los sentidos que posteriormente se le otorgan. Este análisis, a partir de las concepciones y tradiciones de diversos actores, permite también comprender la compleja articulación entre continuidades y rupturas que supusieron las intervenciones urbanas del período y ciertos efectos contradictorios en el espacio urbano.

Verde, ocio y esparcimiento: las perspectivas a partir de las cuales se construyeron los espacios públicos

La construcción de parques y plazas en la ciudad fue enmarcada en la cuestión ambiental por la Municipalidad. El tema ambiental fue una preocupación temprana de la gestión Cacciatore,⁸ en consonancia con lo que sucedía a nivel nacional e internacional en que se desarrollaba un cambio de paradigma respecto a muchas cuestiones ligadas a las formas de hacer ciudad.⁹ La preocupación por el verde de

.....
7 Tal como señalan Oszlak y O’Donnell (1981), las diversas reparticiones, sus atribuciones, el perfil de los funcionarios y el modo de abordar y resolver los problemas resultan de procesos históricos complejos, que están lejos de ser lineales. En este sentido, observamos la convivencia de diversos objetivos al interior de la Municipalidad, en tanto conexistían lógicas técnicas y objetivos políticos.

8 Al respecto, Cacciatore (1993) menciona la batería de medidas con miras a mejorar la calidad ambiental de la ciudad “La eliminación del basural, la supresión de las usinas de quema de basura de la propia Municipalidad, la eliminación de los incineradores domiciliarios, la limpieza del Riachuelo, el control de las emanaciones de gases y ruidos de los automotores y de las industrias remanentes...” (Cacciatore, 1993: 229).

9 Hacemos referencia a un desplazamiento del predominio de la planificación tradicional como forma de intervención privilegiada, que se caracterizaba por la idea de intervenir de modo global sobre la ciudad y su región regulando el crecimiento urbano a través de grandes planes regionales, de largo plazo, con un rol preponderante del Estado. A partir de la década del sesenta, y con más fuerza posteriormente, cobran impulso otras formas de intervenir en la ciudad, más acotadas en el tiempo y en el espacio, con actores múltiples y con instrumentos más flexibles. A su vez, emergieron temas que condensaban las nuevas preocupaciones: espacio público, ambiente, patrimonio, descentralización y participación en lugar de las antiguas preocupaciones y modalidades de intervención (vivienda, zonificaciones, contención del crecimiento, etc.) (Novick, 2003).

la “Dictadura” articulaba diversas preocupaciones ligadas a lo estético, lo higiénico, lo recreativo y la seguridad (Fernández, 2016).¹⁰

En la ciudad de Buenos Aires, las intervenciones más importantes en esta línea fueron el cierre de los basurales y la “exportación” de la basura y su gestión a la Provincia. A su vez, se dio gran importancia a la generación de espacios verdes con el fin de remediar el déficit de este tipo de equipamiento a escala barrial, referenciando ciertos parámetros internacionales que indicaban una mínima cantidad de metros cuadrados verdes por habitante.

El interés de construir parques y plazas, se vinculaba, asimismo con la voluntad de desarrollo del deporte y la recreación en la ciudad de Buenos Aires, pensando al deporte como “medio formativo y educativo” (funcionarios de la Dirección General de Deportes y Recreación en *Summa*, 1977a). En esta línea, muchos de los parques y plazas tenían infraestructura para realizar actividades deportivas y en algunos casos, fueron construidos o reformados sumando un Polideportivo.¹¹

Dónde, cuándo y cómo: la construcción de plazas

En la búsqueda de lograr una ciudad limpia y ordenada, una de las políticas llevadas adelante por la Municipalidad fue el desplazamiento de actividades y equipamientos considerados obsoletos o inadecuados. Así, se clausuraron basurales y la infraestructura vinculada a la gestión de la basura, trasladándose a la Provincia de Buenos Aires, se demolieron antiguos hospitales y fábricas, y se desplazaron y erradicaron ferias municipales y habitantes de villas miseria. Muchos de los terrenos ganados a partir de estas clausuras y desplazamientos fueron utilizados para la construcción de plazas: en donde era el Frigorífico Lisandro de la Torre se construyó el Parque Alberdi, en estacionamientos de camiones de basura se ubicó la Plaza San Miguel de Garicoits, en la manzana en que se ubicaba al antiguo Hospital de Clínicas se construyó la Plaza Housse, mientras que la Plaza Campaña del Desierto reemplazó a un antiguo depósito de gas. La “quema”, enorme depósito de basura municipal fue reemplazado por varios Parques, algunas ferias municipales por la Plazoleta Alfonso Castela, las Plazas Monseñor D’Andrea, Matienzo y de los Colegiales ocuparon terrenos “ganados” por la erradicación de villas miseria. En otros casos, se trataba de terrenos semiabandonados (Plaza Aramburu), usados informalmente como espacios públicos (Plaza Ciudad de Udine) o remanentes de la construcción de la Autopista 25 de Mayo (Plazoletas Cecilia Grierson, Lola Mora y Rosario Vera Peñalosa). En algunos casos, los terrenos no pertenecían a la Municipalidad y se pagó a los dueños de los mismos o en caso de que pertenecieran a otra agencia estatal, se logró su transferencia.

La creación de estos espacios verdes no necesariamente fue siempre la primera opción de la Municipalidad. En ocasiones, se buscaba lotear y vender esos terrenos. Debido al desinterés inmobiliario por las tierras (como el caso del Frigorífico Lisandro de la Torre) y/o la oposición de algunos actores (como el caso del Parque Las Heras),

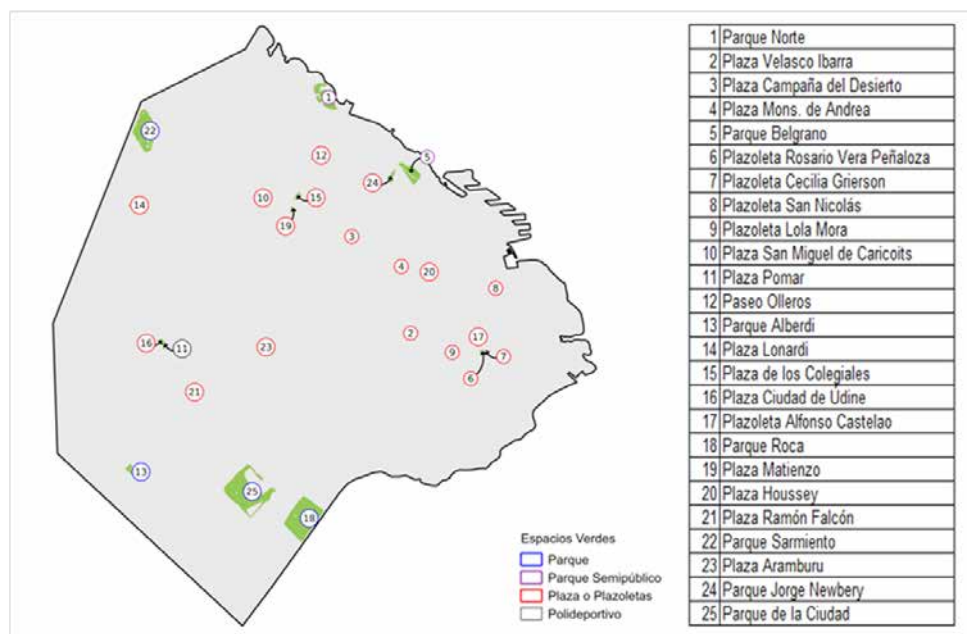
.....
10 La conformación del “Cinturón Ecológico del Área Metropolitana Sociedad del Estado” (CEAMSE) fue la cristalización más importante de la aspiración de sumar verde al área metropolitana por medio de un sistema de parques, al tiempo que venía a solucionar la problemática de gestión de residuos.

11 Es el caso del Parque Jorge Newbery, Parque Sarmiento, Parque Alberdi, Plaza Matienzo (hoy, Plaza Mafalda), Plaza Pomar, Parque Manuela Pedraza.

se derivó en la construcción de espacios públicos. En este sentido, cabe matizar la voluntad verde de la gestión dictatorial. Si bien la construcción de estos espacios partió efectivamente de las concepciones antes mencionadas, también fueron producto en ocasiones del fracaso de otros intentos de intervención.¹² Así, más que un plan sistemático y organizado de creación de espacios verdes públicos en la ciudad, estos se fueron construyendo a medida que surgieron oportunidades para hacerlos, ante la disponibilidad de tierras, el fracaso de otras iniciativas o la insistencia de vecinos.

Como se advierte, los equipamientos, actividades y población desplazada tenía que ver con aquello considerado indeseable para la ciudad: basura, habitantes de villas e industrias. La idea era desplazar estos elementos al conurbano bonaerense y que la ciudad se consolidara como una ciudad de clase media, con un perfil residencial y de servicios.

Así, se construyeron una gran cantidad de parques y plazas en la ciudad de Buenos Aires: Parque Alberdi, Parque de la Ciudad, Parque Roca, Parque Sarmiento, Parque Belgrano, Parque Jorge Newbery (hoy, conocido como Club de Amigos), Parque Norte, Plaza Pomar (Polideportivo Chivilcoy), Plaza Ciudad de Údine, Plaza San Miguel de Garicoits, Plaza Ramón Falcón (conocida informalmente como Plaza Che Guevara), Plaza Aramburu (hoy, Plaza del Angel Gris), Plaza Lonardi (hoy Plaza Nunca Más), Plaza Houssay, Plaza Monseñor de Andrea, Plaza San Nicolás, Plaza Sargento Juan Bautista Cabral (hoy Velasco Ibarra), Plaza Campaña del Desierto, Plaza de los Colegiales, Plaza Matienzo (hoy Mafalda), Paseo Olleros, Plazoletas Lola Mora, Cecilia Grierson, Rosario Vera Peñaloza, Alfonso Castela. Como se advierte, la nominación de los parques y plazas rememoran en la mayor parte de los casos a jefes militares o de la tradición católica.



Fuente: Luján Menazzi con asistencia técnica de Pablo Schweitzer

Figura 1. Mapa de espacios verdes construidos en el periodo

.....
 12 Esto resulta interesante en tanto da cuenta de que la ciudad no resultó del todo maleable a la voluntad dictatorial por su carácter de construcción inevitablemente colectiva.

Como se advierte en el mapa, si bien muchos de los parques se ubicaron en los bordes de la ciudad, las Plazas se ubicaron en tejido urbano consolidado y denso, en ocasiones siguiendo el eje norte.

Tal como sucedió con el resto de las intervenciones de la Municipalidad, no hubo concurso de proyectos para decidir el estudio encargado de diseñar estos espacios, cuestión muy criticada por las asociaciones de arquitectos. La modalidad fue contratación directa, recayendo en los mismos estudios varias intervenciones.¹³ Tampoco se consultó a los vecinos ni actores involucrados acerca de las necesidades barriales y posibles destinos alternativos y, desde ya, no se dudó en ignorar o aplastar cualquier tipo de oposición.

Los estudios en ocasiones se seleccionaban según registro de antecedentes profesionales o, en otros casos, se establecía un orden de mérito como resultado de una licitación. En algunos casos, como el de Plaza Houssey, fue la propia empresa constructora la que contrató al estudio. Como se advierte, no existió una única modalidad de contratación y el tema resulta particularmente opaco en el contexto autoritario. El período se caracterizó por la concentración de muchas obras en pocas manos, pero por lo general se trataba de estudios con amplios antecedentes, en particular en la realización de obras públicas.

La contratación directa permitía acelerar los tiempos, cuestión prioritaria para la Municipalidad. Así, una característica común de las plazas fue la velocidad con que fueron proyectadas y construidas por solicitud de la comuna. Según Serra y Valera (1983),¹⁴ en el caso de muchas plazas, el período desde las ideas preliminares hasta los pliegos de licitación abarcó entre sesenta y setenta días solamente. Los tiempos de construcción fueron en algunos casos asombrosos.¹⁵

El apuro de la Municipalidad era una cuestión señalada por varios de los estudios involucrados: “La premura con que debió encararse el proyecto estructural fue fundamental para resolver situaciones y tomar decisiones, ya que frente a dos alternativas para solucionar un problema se eligió la que demandara menor tiempo de ejecución” (Raña Veloso; Álvarez y Forster, 1980). En otras obras de la Municipalidad, como las escuelas municipales, se repitió esta urgencia, que, sumada a la falta de topes en las obras, tuvo como consecuencia un considerable aumento de los costos (Ferreira y Rezzoagli, 1986).

Un nuevo paisaje urbano: los diseños de las “placitas de cemento”

Muchos de estos espacios verdes, particularmente las plazas, se caracterizaban por tener grandes superficies de cemento, fuentes ornamentales, anfiteatros, desniveles y pérgolas de hormigón, conformando un patrón estético muy distinto al de las plazas tradicionales de la ciudad, con mayor superficie verde y con otro diseño paisajístico.

.....
13 El tema de la gran cantidad de obras con adjudicación directa durante ese período fue señalado por Liernur (2001) y Silvestri y Gorelik (2001) en tanto esto implicó el socavamiento del concurso como principal mecanismo de asignación de obras por parte del Estado. Si bien muchas grandes obras se licitaban, la Municipalidad no convocó a ningún concurso de proyectos arquitectónicos en toda la gestión de la dictadura.

14 Serra y Valera era un estudio de arquitectos al que se le encargó gran cantidad de plazas.

15 Plaza Aramburu (iniciación de obra 24/3/1980, finalización de obra 24/6/1980); Plaza Ramón Falcón (iniciación de obra 25/9/1980, finalización de obra 24/11/1980) (Summa, 1983).

Si bien, muchas veces se asoció el diseño y materiales característicos de estos espacios públicos con la voluntad disciplinadora de la “Dictadura”, o con una postura contraria a lo verde por parte del régimen militar, lo cierto es que la estética uniforme de estas plazas se vincula con ciertas premisas manifestadas por la Municipalidad y con que muchas de estas fueron diseñadas por el mismo estudio de arquitectura, Serra: Valera, que se caracterizó por experimentar estos diseños innovadores en los espacios verdes porteños.¹⁶ Las premisas manifestadas por la Municipalidad se vinculaban con la voluntad de construir plazas pensadas para su uso y no espacios monumentales (*Summa*, 1977b). La Municipalidad solicitó por lo tanto a los arquitectos la realización de plazas con zonas diferenciadas: zonas sombreadas para la recreación o el descanso, sendas peatonales con diseño flexible, zonas con juegos para chicos, zonas con entretenimientos para mayores, separación de áreas a través de muretes (*Summa*, 1977b; Loza, 1980). También, se solicitó el uso de materiales resistentes, de fácil mantenimiento y reposición (*Summa*, 1977b; Serra y Valera, 1983). Esto resulta particularmente interesante en tanto contradice ciertas miradas de sentido común que asocian la construcción de ámbitos monumentales con gobiernos dictatoriales.



Fuente: Fèvre (1986)

Foto 1. Plaza San Miguel de Garicoits, ubicada entre Álvarez Thomas, Virrey Arredondo, Virrey Loreto y Delgado

.....
 16 El estudio Serra: Valera obtuvo gran cantidad de contrataciones directas en ese período, particularmente para proyecto y dirección de parques y plazas, como ser la Plaza Aramburu, la Plaza San Miguel de Garicoits, la Plaza Lonardi, la Plaza Ramón Falcón, el paseo Olleros, Plaza Ciudad de Udine, el Parque Alberdi, Plaza Pomar (estos últimos dos, incorporaban además polideportivos, el polideportivo Alberdi y el polideportivo Chivilcoy). También Profesionales Integrados S.A. (Raña Veloso, Álvarez y Forster) tuvo bajo su proyecto y dirección algunas plazas del período como ser la Plaza Houssey, la Plaza San Nicolás y Plaza Juan Bautista Cabral. La Plaza Houssey, sin embargo, tuvo proyecto de superficie y parquización a cargo de Gutiérrez, Peñalba y Libertori arqs. Las constructoras Construcciones Viales y Civiles SACIFIA y Consorcio Fazio –Noroeste– Spinazzola se encargaron de llevar adelante varias de estas plazas.

Siguiendo estas directivas, el estudio Serra: Valera, enfatizó la idea de hacer de la plaza un lugar de uso y no de contemplación. Se pretendía que el usuario ya no fuera un observador pasivo, sino un participante activo de las nuevas plazas (Fèvre, 1986). Los arquitectos apuntaban a producir espacios bien diferenciados al interior de las plazas, dando lugares específicos a la variedad de usos característicos.

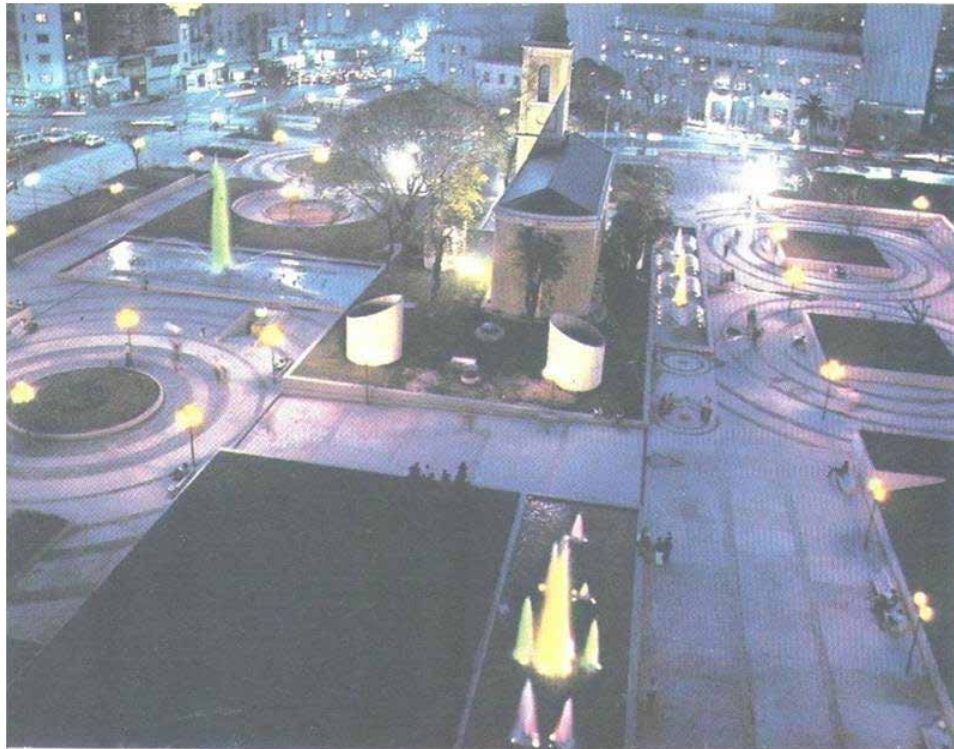
La plaza actual no se concibe como un lugar para el aislamiento, la soledad, la actitud pasiva. Hoy se hace necesario adecuar su diseño a los distintos comportamientos del público, a los usos y experiencias del hombre actual, a las distintas edades del habitante de esos espacios. Las plazas buscan responder, así, a esa intención; brindan una disposición que concreta lugares para diferentes categorías de encuentros, distintos tipos de actividades y pretenden que el usuario sienta satisfechas sus expectativas y se identifique con los ámbitos propuestos. (Serra y Valera, 1983: 26)

Resulta muy interesante esta retórica preocupada por los usos y la idea de ciudadanos activos, ligada a miradas progresistas sobre la ciudad que ganarían peso en la década siguiente, insertada en un marco autoritario, no solo por el tipo de gobierno, sino también por el modo de llevar adelante estas obras. En este sentido, queda en evidencia que algunas de las preocupaciones y tendencias del campo arquitectónico materializadas en estas intervenciones tenían más vínculo con debates disciplinares internacionales que con el contexto político local. Esto no quita que, como se menciona más adelante, se valieran del marco autoritario como facilitador de la materialización de obras que en otros contextos políticos no lograban concretarse. Existe una afinidad electiva entre la voluntad de transformar el espacio urbano que manifestó en reiteradas oportunidades la gestión local de la “Dictadura” y la búsqueda de efectivizar las obras por parte de algunos estudios de arquitectura.

Por otra parte, este énfasis en lograr espacios diferenciados que fueran correlato de la variedad de usos sumada a la idea de fácil mantenimiento conspiraron contra el predominio del verde. El resultado fueron plazas en las que predominaba la parte seca, una de las características que más se criticó con posterioridad.¹⁷ Esto colisionaba con el objetivo de la Municipalidad explicitado en las pautas para el desarrollo de las plazas “prever en el proyecto un máximo desarrollo de áreas verdes minimizando en lo posible las áreas rígidas de circulación o de borde...” (Loza, 1980: 4).

En esta última cuestión queda en evidencia que las intervenciones urbanas son el resultado de la articulación de una serie de voluntades no siempre confluyentes. Desde la demanda de los comitentes (en que suelen articularse lógicas políticas y técnicas al interior de las agencias estatales), las respuestas disciplinares y la oposición o aquiescencia de diversos actores involucrados, el resultado es un producto complejo, que se aleja de ser un mero reflejo de la voluntad dictatorial. En este caso, la escasez de verde que luego fue asociada a la voluntad represiva del “Proceso”, tuvo más que ver con decisiones de diseño de los propios arquitectos y paisajistas que con la búsqueda de la gestión local del período, que iba en un sentido contrario.

.....
¹⁷ El caso de Plaza Houssay es el más llamativo. De los 22.000 m² que ocupaba la plaza, sólo 6.500 eran espacio verde.



Fuente: Cacciatore (1993)

Foto 2. Plaza Houssey, ubicada entre Av. Córdoba, Uruburu, Paraguay y Junín; Estudio Profesionales Integrados SA.

Los desniveles que caracterizaron a las plazas tenían varios objetivos. Desde la perspectiva de la Municipalidad, buscaban contrastar “con la llana topografía de la ciudad y el rígido patrón axial de su cuadrícula” y preservar las áreas verdes, “desalentando las prácticas de deportes mayores (fútbol, rugby, etc.)” (Loza, 1980: 8). Según los arquitectos, los desniveles buscaban aislar a los espacios verdes de los ruidos y contaminaciones de las calles próximas y también buscaban diferenciar espacios al interior de las plazas (Serra y Valera, 1983).¹⁸ Los materiales elegidos resultaron también novedosos para la estética de los espacios públicos previos, sin embargo, en términos de los arquitectos, pretendían ser aquellos materiales tradicionales de la ciudad (ladrillos, baldosones de cemento y hormigón para las pérgolas).

Las plazas también se caracterizaron por la instalación de fuentes ornamentales de aguas danzantes, en ocasiones con sistema de luces y sonido. Esto da cuenta de la voluntad de la Municipalidad de construir espacios vistosos y de avanzada, utilizando la última tecnología en la materia, cierta promesa de futuro que se volvía accesible y visible para los ciudadanos. También da cuenta de la importante inversión realizada en estas obras.

El diseño de los espacios, los materiales utilizados, la distribución de espacios verdes y secos y los equipamientos instalados lograron conformar, en el caso de las

.....

¹⁸ En ocasiones, los desniveles eran parte de la topografía previa, pero en otras oportunidades, fueron contruidos exprofeso.

plazas, un tipo de espacio público que rompía con la imagen de los espacios públicos tradicionales y por extensión, contribuían a modificar la imagen de la ciudad. Esto fue algo explícitamente buscado por los arquitectos participantes: “el resultado que obtuvimos con estas obras fue contribuir a formar una imagen distinta de la ciudad” (Serra y Valera, 1983: 27), “un nuevo paisaje urbano” (Fèvre, 1986: 1).

Serra y Valera consideraban que durante la última dictadura militar se produjo esta oportunidad para los arquitectos, la de conformar una nueva imagen de ciudad a partir de distintas obras:

(...) han constituido uno de los hechos que permitieron la intervención de los arquitectos en la configuración y renovación de la ciudad, que estos pudieron así decir lo que querían o lo que consideraban que correspondía. Tras años de amordazamientos y silencios, distintos *discursos* se hicieron visibles: Miguel Ángel Roca en Córdoba; los estudios integrantes del equipo de proyecto para las escuelas municipales: Kocourek; Antonini, Schon, Zemborain y Asociados; Raña Veloso, Alvarez, Forster; Sánchez Elía, Peralta Ramos en su labor conjunta o individual; Rubén Pesci, Rodolfo Morcillo y el grupo de calificados colegas de la Secretaría de Obras Públicas en el tema de los recursos ambientales. (Serra y Valera, 1983: 27)

Esta llamativa afirmación de pensar a la “Dictadura” como un momento en que se pudieron realmente expresar diversos discursos en contraste con un período previo de “amordazamiento y silencios”, propone a la “Dictadura” como un momento de oportunidad para ciertos estudios, por la cantidad de obras, en muchas oportunidades sin tope de costos, por la posibilidad de “realmente” llevarlas adelante (y que no queden en el proyecto) y por la voluntad de transformar de modo permanente la imagen de la ciudad que tenía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Se vincula también, con una perspectiva de la propia disciplina arquitectónica “esta sensibilidad apoyaba (...) la voluntad faústica del arquitecto que, tanto en sus vertientes técnicas como profesionalistas, estimaba que una obra bien hecha mejoraba la vida de la sociedad sin importar quién y cómo la encargaba o la llevaba adelante” (Silvestri, 2001: 38). Evidentemente, esta posibilidad de “expresarse” se limitaba a los estudios que recibieron encargos directos. En contrapunto, un reclamo frecuente por parte de distintos profesionales y entidades se vinculaba justamente a la falta de concursos en el proceso de adjudicación de obras, que permitieran la participación de muchos otros arquitectos en la proyección y realización de estas obras (Elguezabal, 1980).

Las inauguraciones

¿Qué sentido tenían estas obras para los comitentes? La velocidad con que se realizaron las plazas, el contraste logrado con lo que las preexistía y la estética llamativa y novedosa que las caracterizaba se constituyeron en logros vistosos que la Municipalidad aprovechaba para mostrar su eficacia y su voluntad de transformar y jerarquizar la ciudad.

Las inauguraciones eran los momentos de escenificar la importancia y el sentido de la producción de estos espacios. Así, solían participar altos dirigentes nacionales y de la Iglesia. Estos eventos se convirtieron en una instancia más para

mostrar los logros de la comuna frente al Gobierno Nacional y, a su vez, los logros del “Proceso” frente a la opinión pública. La ciudad, y en particular, sus espacios públicos se volvían una vidriera.

En muchas oportunidades no se difundía el destino del predio mientras se realizaba la obra, de modo que los vecinos no tenían certeza respecto a qué era lo que se estaba construyendo. Esto da cuenta del estilo en que se implementaban las intervenciones. Las decisiones se tomaban velozmente, entre pocos y aplastando oposiciones. Además, el impacto resultaba mayor una vez que se inauguraba la nueva plaza o parque. El énfasis en la velocidad de la realización de la obra, el desplazamiento de población o equipamientos indeseables y el contraste con su reemplazo por una nueva plaza, llamativa en términos estéticos, con fuentes y luces, se acompañaba por un momento ritual de inauguración que lograba condensar el éxito de la realización frente a los vecinos. En términos de un historiador barrial:

(...) el espacio de este inmenso parque de varias hectáreas estuvo ocupado por las instalaciones del Mercado Nacional de Hacienda, es decir, que donde antes estuvieron los corrales de las vacas, aparecieron los perfumes, la belleza, las flores, la luz, el sol (...) Un vuelco de mil por ciento; los mataderenses que veíamos aquellas excavaciones no imaginábamos qué ocurriría allí. Cuando se anunció la inauguración de las instalaciones, con la presencia del Intendente Cacciatore y altas autoridades municipales, todo Mataderos se hizo presente y admiró y se maravilló ante las fuentes, la de Tellier y Directorio, de un diseño totalmente nuevo, la del interior del parque, de aguas danzantes, iluminadas con focos de luces de distintos colores, llamó poderosamente la atención, y el lago artificial nos pareció un cuento de hadas, la cascada, algo inimaginable (...) (Vecchio, 1995: 23)



Fuente: La Nación (“Inauguró Videla la Plaza Monseñor De Andrea”, 8 de noviembre de 1977), p. 6.

Foto 3. Inauguración de la Plaza Monseñor De Andrea con la presencia de representantes de los distintos poderes: Videla y Harguindeguy por el Poder Ejecutivo Nacional, Cacciatore por la Municipalidad, Horacio Heredia, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Monseñor Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires.

Oszlak (1991) sostiene que los primeros éxitos de la gestión municipal implicaron que el gobierno nacional le otorgara un cheque en blanco a la Municipalidad durante un tiempo. Esto supuso el apoyo político y financiero a las obras faraónicas que se iniciarían en los primeros años de la gestión. La sintonía de Cacciatore con Harguindeguy, de quien dependía funcionalmente, lo colocaba en una posición de privilegio, en tanto se asoció al núcleo estable del “Proceso” conformado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz (Presidente, Ministro de Interior y Ministro de Economía del “Proceso” entre 1976 y 1981) (Canelo, 2008). La continuidad de Cacciatore en el cargo hasta marzo 1982, es decir, por seis años completos, y su supervivencia a los cambios de gobierno que se dieron en la Junta Militar, da cuenta de la confianza y complacencia para con su gestión. El apoyo y financiamiento que obtuvo también evidencia la importancia que tenía la ciudad capital para la gestión del “Proceso” y su voluntad de jerarquizarla y utilizarla como vidriera preferencial de sus logros, tanto hacia la opinión pública local como hacia el exterior, dando cuenta de su capacidad de ordenar, transformar y modernizar.¹⁹ El beneplácito con las obras desarrolladas durante la gestión de Cacciatore, articulado con la importancia estratégica otorgada a la ciudad capital confluyeron para posicionar a la gestión municipal como uno de los escasos éxitos del “Proceso” (Oszlak, 1991).

Críticas, reapropiaciones y resignificaciones

En los primeros momentos luego de su inauguración, las plazas fueron criticadas por sectores de la disciplina arquitectónica, tanto por sus altos costos como por su diseño y los materiales utilizados. Así, se las consideraba “demasiado arquitecturizadas”.²⁰

Las características más novedosas de estas nuevas plazas, como el predominio del cemento por sobre el verde y la creación de espacios diferenciados, fueron asociadas al carácter represivo de la “Dictadura”. Esta asociación se extendió de modo difuso en el sentido común de los habitantes, en ámbitos académicos, en medios de comunicación y en discursos políticos.²¹

Con el tiempo, las plazas fueron perdiendo los equipamientos más ostentosos y difíciles de mantener, como las fuentes ornamentales, lagos artificiales, juegos de luces, etc. En las sucesivas reformas que sufrieron, se intentó apaciguar un poco el estilo geometrizable que las caracterizaba, quitando superficies de cemento, fuentes y baldosones y dando un poco más de espacio al verde u otros equipamientos.

.....
19 Esta voluntad de ciudad-vidriera hacia el exterior alcanzó su punto álgido durante el Mundial 1978.

20 Una crítica de la época afirmaba “la parte seca, inerte, se ha llevado al límite, en detrimento de la parte verde, presentando a veces un trazado tan complejo que se ha obligado al usuario a superponer sus propios senderos para la circulación” (Bianchi, 1983: 15). Unos años después, Berjman (2001) señalaba “Un rápido conteo al momento de la inauguración de la plaza nos asombró, se habían *plantedo* 70 árboles y arbustos y también 70 columnas de hormigón armado” (Berjman, 2001: 28).

21 Romagnoli (2006) por ejemplo, afirma “El Ethos social del Estado autoritario se ve expresado en la disposición espacial y las características estructurales de la Plaza Houssay, las que responden a la lógica represiva de la época” (Romagnoli, 2006: 3) y Berjman (2001) sostiene que en la dictadura militar “se trató de instaurar un modelo devenido de esa ideología sustentadora: las plazas de cemento” (Berjman, 2001: 27). Estas mismas ideas que asocian determinado diseño arquitectónico de parques y plazas con el gobierno autoritario se puede rastrear también en ámbitos periodísticos: “la plaza Bernardo Houssay es un típico ejemplo de arquitectura represiva” (Jurado, 2011: s/p).

Modificar el diseño y la estética de estas plazas se convirtió, por momentos, casi en una reivindicación contra la “Dictadura”. Ejemplo de ello es la reinauguración de la Plaza San Miguel de Garicoits, en la cual Telerman, en ese entonces Jefe de Gobierno, afirmaba “esta era una plaza típica de la ‘Dictadura’, porque el totalitarismo genera espacios públicos acorde a su sistema de pensamiento: se había sacado el verde y se había puesto cemento. Ahora logramos recuperarla y ponerla accesible y linda para los vecinos” (Telerman, 2007, en la reinauguración de la Plaza San Miguel de Garicoits).

Asimismo, como parte de un proceso de resignificación y reapropiación de estos espacios, se modificaron los nombres que más ostentosamente reivindicaban a jefes militares ligados a gobiernos militares (Aramburu, Lonardi y, en otra tónica, Falcón).

Las características criticadas en la construcción de los espacios verdes se replican en varias de las intervenciones urbanas del período: la adjudicación directa de las obras a unos pocos estudios que solían repetirse, sin realizar concursos de proyectos; la exigencia de tiempos muy breves para la proyección y ejecución, lo cual solía implicar errores, o la subsunción del diseño y los materiales a los apurados tiempos de la comuna; la reorientación del perfil de la ciudad, construyendo espacios verdes en ámbitos donde previamente se instalaban grandes equipamientos, ahora considerados obsoletos, inadecuados o contaminantes y población o actividades económicas indeseables; la falta de control en los gastos e inversiones de la comuna, lo cual en algunos casos supuso grandes negociados y desvío de fondos, además de fuertes endeudamientos para la Municipalidad. A su vez, si bien se buscaba saldar a través de la construcción de parques y plazas el déficit de espacio verde, los nuevos diseños de estos ámbitos fueron justamente criticados por la carencia de verde. Por último, la construcción de parques y plazas venía a reforzar la jerarquización de la ciudad, tantas veces enunciada por la comuna.

Algunas reflexiones para concluir

El trabajo buscó reflexionar acerca de la producción de ciudad en un contexto autoritario a partir de la construcción de espacios públicos, más específicamente, las plazas construidas en la ciudad de Buenos Aires. Para ello, se intentó dar cuenta de las concepciones a partir de las cuales fueron construidos, las características de estos espacios, el equipamiento que venían a reemplazar, los sentidos que tuvieron para los distintos actores involucrados en la producción de ciudad y las críticas que recibieron posteriormente.

Las concepciones a partir de las cuales se llevaron adelante estos espacios (la preocupación por lo ambiental y la necesidad de sumar metros de verde y lugares de deporte y recreación) eran concepciones que venían ganando terreno a nivel internacional en los ámbitos profesionales vinculados con estas cuestiones. En el marco del “Proceso”, se sumaba la aspiración de jerarquizar la ciudad y acentuar su perfil social excluyente y su perfil urbano residencial, que apuntaba a sectores medios y altos, en detrimento de industrias y actividades que hacían a la supervivencia de los sectores populares. Desde la Municipalidad, se aspiraba a que estos espacios contribuyeran a consolidar una nueva imagen de ciudad, limpia, ordenada y

de avanzada. Además, permitían mostrar la eficacia de la comuna, y su capacidad de materializar transformaciones. Desde las miradas técnicas de los arquitectos, se buscaban conformar espacios que, en diálogo con estilos internacionales del período, resultaran novedosos, contribuyendo a configurar un nuevo paisaje urbano, pensado para usuarios activos. Así, la producción de ciudad, supone siempre la participación de múltiples lógicas. Cada intervención articula expectativas de distintos actores y condensa una serie de sentidos diversos, y en ocasiones, contradictorios. En consecuencia, las plazas son el resultado de una conjunción entre ambiciones políticas, de gestión, técnicas y disciplinares.

El análisis de las diversas perspectivas que se articulan en la conformación de estos espacios permite comprender algunas aparentes paradojas: la producción material de espacio público en un momento de clausura de la esfera pública; las preocupaciones acerca de usuarios activos y diversidad de encuentros en un diseño que luego fue considerado sinónimo de arquitectura represiva; las preocupaciones por el verde que luego se materializaron en plazas secas.

Retomando las reflexiones acerca de continuidades y rupturas en las políticas urbanas, se podría pensar que la construcción de estos espacios enfatizaba la ruptura, la ambición de conformar espacios novedosos para, por extensión, configurar una nueva imagen de ciudad que respondiera a ciertas expectativas del régimen dictatorial. La preocupación por lo ambiental, también resultaba relativamente novedosa en el ámbito local. Sin embargo, al mismo tiempo, la producción de espacios verdes, no deja de responder a la lógica de la planificación urbana, perspectiva de intervención muy previa a la “Dictadura” pero que seguía predominando en el período. La matriz de intervención, seguía siendo la de un Estado fuerte, que orientara la producción de ciudad.

Al mismo tiempo, esta intervención se da en un marco de muchas otras intervenciones de la comuna, que tenían un sentido contrario. Por un lado, se favoreció el uso del auto, en colisión directa con las preocupaciones ambientales. Esto se materializó en las autopistas, así como en los estacionamientos subterráneos que se construyeron debajo de algunas de estas plazas. Además, en paralelo a la búsqueda de novedad y la conformación de una nueva imagen de ciudad, se sostenían los primeros intentos de protección patrimonial. La incidencia de diversos actores técnicos y políticos, con múltiples finalidades, tradiciones y lógicas de intervención vuelve inteligible la convivencia de obras, reglamentaciones e intervenciones que en ocasiones pueden resultar contradictorias.

Con el paso del tiempo, estas plazas adquirieron nuevos sentidos y en ocasiones se fueron convirtiendo en sinónimo de la “Dictadura”. Su diseño y los materiales que las caracterizan fueron asociados a los rasgos más oscuros del régimen dictatorial. En este sentido, las modificaciones que fueron sufriendo, el cambio de nombre en algunos casos y el abandono de los equipamientos más ostentosos y de difícil mantenimiento se convirtieron en reivindicaciones contra el “Proceso”.

Es posible afirmar que si bien no hay una arquitectura que caracterice a este período, la modalidad de ejecución de estas intervenciones, en tanto arbitraria, discrecional, y aplastando oposiciones, sí respondía a los rasgos autoritarios del régimen. Retomando reflexiones de Bodenschatz acerca de casos europeos “Lo dic-

tatorial del urbanismo se demuestra sobre todo en las condiciones de producción” (Bodenschatz, 2016: 1044). A su vez, el perfilamiento de ciudad al que apuntaban las diversas intervenciones sí se vinculaba estrechamente con los objetivos del “Proceso”. Los espacios interpelan a determinado tipo de ciudadanos, favorecen ciertos usos y consolidan un determinado perfil de ciudad, excluyendo y reemplazando ciertas dimensiones de su perfil histórico. En este sentido, la efectividad en la ejecución de las transformaciones y la jerarquización de la ciudad formaban parte del proyecto político del régimen dictatorial.

Bibliografía y Fuentes Primarias

- Aliata, Fernando y Silvestri, Graciela (2001). *El paisaje como cifra de armonía. Relaciones entre cultura y naturaleza a través de la mirada paisajística*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Ballent, Anahí (2005). *Las huellas de la política. Vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires, 1943-1955*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes - Prometeo 3010.
- Berjman, Sonia (2001). “El espacio verde público. Modelos materializados en Buenos Aires – parte 1”. En: *Arquitectos*, nro. 10, año 1.
- Bettanin, Cristina (2014). *Dictadura y Vivienda Social: Vecinos relocalizados en Conjunto Habitacional Soldati*. Tesis para optar al título de Doctora en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Bianchi, Luis (1983). “Las plazas de Buenos Aires”. En: *Summa*, Colección Temática 3/83.
- Bodenschatz, Harald (2016). “Urbanismo, propaganda y dictadura. Tres exposiciones en Lisboa: 1940, 1941 y 1952”. En: *Actas del Primer Congreso Iberoamericano de Historia Urbana*, AHIU, Santiago de Chile. Disponible en: http://media.wix.com/ugd/ea4362_3fe99cb8c2cf45929fa4da421b621b80.pdf Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.
- Cacciatore, Osvaldo (1993). *Sólo los hechos*. Editorial Metáfora: Buenos Aires.
- Calveiro, Pilar (1998). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- Canelo, Paula (2008). *El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.
- Colombo, Pamela (2011). “Espacio y desaparición: los campos de concentración en Argentina”. En: *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, nro. 45, julio-diciembre.
- Domínguez Roca, Luis (2005). “Planes urbanos y transporte en la Ciudad de Buenos Aires”. En: *Scripta Nova Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. IX, nro. 194. Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en: <http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/1024> Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.
- Elguezabal, Eduardo (1980). “Plazas y Escuelas en la ciudad”. En: *Summa*, nro. 152, agosto.
- Fernández, Leonardo (2016). “La muralla verde [Urbanismo y dictadura, Buenos Aires y su región metropolitana (1976-1983)]”. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires.

- Ferreira, Alicia y Rezzoagli, Alfredo (1986). "Plan de Escuelas Municipales (2ª parte)". En: *Revista Trama*, nro. 13.
- Fèvre, Fermín (1986). *Serra: Valera: un nuevo paisaje urbano*. Buenos Aires: Ediciones Unión Carbidep.
- Gorelik, Adrián (2004). *La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Jajamovich, Guillermo y Menazzi, Luján (2012). "Políticas urbanas en un contexto de dictadura militar. Algunos interrogantes a partir de la Ciudad de Buenos Aires (1976-1983)". En: *Revista Bitácora Urbano – Territorial*, nro. 20, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Jurado, Miguel (2011). "Arquitectura y represión". En: *Diario Clarín* 23/02/2011. Disponible en: https://www.clarin.com/ciudades/Arquitectura-represion_0_ry-VPa-8Twmng.html Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.
- La Nación* (Buenos Aires, 1977).
- Liernur, Francisco (2001). *Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
- Loza, Juan Bautista (1980). "El diseño de los espacios verdes". En: *Nuestra Arquitectura*, nro. 511/512, abril-mayo.
- Menazzi, Luján (2013a). *Políticas y proyectos para Buenos Aires. Reconfiguraciones en los modos de hacer ciudad a partir de la cuestión del Mercado Nacional de Hacienda (1976 – 2003)*. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Mimeo.
- Menazzi, Luján (2013b). "Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983)". En: *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, vol. XVII, nro. 429, Barcelona: Universidad de Barcelona. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-429.htm> Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.
- Novick, Alicia (2004). "Plan". En: Liernur, Jorge Francisco y Aliata, Fernando (comps.), *Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades*. Buenos Aires: AGEA.
- Oszlak, Oscar (1991). *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano*. Buenos Aires: Cedes-Humanitas.
- Oszlak, Oscar y O'Donnell, Guillermo (1981). "Estado y Políticas Estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación". En: *Documento CLACSO*, vol. 4. Buenos Aires: CEDES.
- Pírez, Pedro (1995). "Actores sociales y gestión de la ciudad". En: *Ciudades*, nro. 25, Octubre-Diciembre. México: RNIU. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/274313532_Actores_sociales_y_gestion_de_la_ciudad Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.
- Raña Veloso, Raúl; Álvarez, Roberto y Forster, Samuel (1980). "Playa de estacionamientos subterráneo ex Hospital de Clínicas y Plaza Bernardo H. Houssey". En: *Construcciones*, nro. 283, may-jun.
- Rodríguez, Carla et al. (2007). *Políticas del Hábitat, desigualdad y segregación socioespacial en el AMBA*. Buenos Aires: IIGG - Edición Grupo Argentina de Producción Social del Hábitat y Área de Estudios Urbanos.
- Romagnoli, Venettia (2006). "Espacios verdes públicos: entre el paradigma del es-

tado y su resignificación a través del uso. Estudio de casos: Plaza 25 de mayo de 1810 (Resistencia) y Plaza Houssay (Buenos Aires)”. En: *IV Jornadas de Investigación*, Secretaria de Investigación y Posgrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste.

Serra, Fernando y Valera, Jorge (1983). “Plazas Urbanas. Diseño del Estudio Serra: Valera”. En: *Summa*, Colección Temática 3/83.

Silvestri, Graciela y Gorelik, Adrián (2000). “Ciudad y cultura urbana, 1976-1999: el fin de la expansión”. En: Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto (dir.); *Buenos Aires, historia de cuatro siglos*. Buenos Aires: Altamira.

Silvestri, Graciela (2002), “Apariencia y verdad. Reflexiones sobre obras, testimonios y documentos de arquitectura producidos durante la última dictadura”. En *Block*, nro. 5, Buenos Aires.

Summa (1977a). “Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Deportes y Recreación”, nro. 119, diciembre de 1977.

Summa (1977b). “Plazas”, nro. 119, diciembre de 1977.

Summa (1983). “Plazas Urbanas. Diseño del Estudio Serra Valera”, Colección Temática 3/83.

Tavella, Gabriela (2014). “*Las autopistas no tienen ideología*”. *Análisis del proyecto de Red de Autopistas Urbanas para la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)*. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de San Martín.

Telerman, Jorge (2007). Discurso de inauguración de la Plaza San Miguel de Garicoits, disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/?modulo=ver&item_id=11&contenido_id=19243&idioma=es Fecha de la última consulta: noviembre de 2016.

Vecchio, Ofelio (1995). *Plazas, Plazoletas y Monumentos de Mataderos*. Buenos Aires: Edición del Autor.

Interama: el parque de diversiones para la ciudad de Buenos Aires de la dictadura militar (1976-1983)*

GABRIELA TAVELLA**

Resumen

El artículo se propone abordar una de las obras más importantes llevadas a cabo por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983): el Parque de Diversiones emplazado en Villa Soldati, al sur de la ciudad. El trabajo realiza una aproximación inicial al proceso de realización del parque, resaltando algunos aspectos de esta iniciativa que dan cuenta del accionar del Estado local y de las ideas sobre la ciudad y sus habitantes que presentaba la municipalidad en ese marco histórico.

Palabras claves: dictadura; municipalidad; Interama.

Fecha de recepción: 17-04-2017

Fecha de aceptación: 13-09-2017

Interama: an Amusement Park for the City of Buenos Aires during the Military Dictatorship (1976-1983)

Abstract

The paper proposes to address one of the most important works carried out by the Municipality of the City of Buenos Aires during the last military dictatorship (1976-1983): the Amusement Park at Villa Soldati, in the south of the city. The article makes an initial approximation to the construction process of the park, highlighting some aspects of this initiative that account for both the actions of the local State and the ideas about the city and its inhabitants displayed by the municipality in this historical context.

Keywords: Dictatorship; Municipality; Interama.

* Este artículo forma parte de la tesis doctoral en curso que estudia la gestión de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura a partir de algunos casos concretos. Agradezco a los y las integrantes del Núcleo de Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente del IDAES por los valiosos comentarios realizados a una versión preliminar de este texto y a Hernán Rodríguez de la Organización por la Conservación del Parque de la Ciudad por su disposición y amabilidad.

** Doctoranda en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), Licenciada en Sociología (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), Magister en Estudios Latinoamericanos (Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín). Correo electrónico: gabrielatavella@gmail.com

El Parque de Diversiones inaugurado en 1982, pensado a imagen y semejanza de los grandes parques de entretenimiento como *Disney World*, fue una de las grandes intervenciones urbanas impulsadas por la gestión municipal de la última dictadura militar en la ciudad. La intendencia del Brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la ciudad entre 1976 y 1982, comenzó la construcción y la continuó su sucesor, Guillermo del Cioppo,¹ que ocupó el cargo hasta la finalización de la dictadura en diciembre de 1983.

El proyecto original consistía en la realización de un parque zoofitogeográfico en el área del Parque Almirante Brown,² al sur de la ciudad. La propuesta residía en trasladar el Jardín Zoológico de Palermo y construir uno nuevo pero bajo otro concepto. Los animales ya no estarían encerrados en jaulas –se los dejaría libres pero limitados por fosos o zanjas o agua para separarlos del público– y se recrearía su hábitat natural. Además, el nuevo zoológico no sería más un paseo municipal debido a que la realización y explotación se otorgaría a empresas privadas. Como proyecto subsidiario se planteó la construcción de un parque de diversiones. Si bien el norte de la ciudad ya contaba con un parque de este tipo (el Itaipark, ubicado en la Avenida del Libertador y Callao), esta propuesta era diferente: se ubicaría en una de sus zonas más desfavorecidas, sería más grande y contaría con atracciones novedosas para un parque de este tipo en América Latina.

Luego de su inauguración, durante la última dictadura, el parque siguió un derrotero signado por la apertura y la clausura en diversos contextos, y por las numerosas causas judiciales que se iniciaron en torno a su realización. Actualmente, el predio –que constituye uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad– es utilizado como parque y en él se observan huellas de su construcción original. Por ejemplo, el anfiteatro construido inspirado en el arquitecto Antonio Gaudí, algunos de los viejos juegos que delatan en su estructura el paso del tiempo y la torre espacial, insignia del parque. En los últimos años el predio fue utilizado para la realización de diferentes actividades como los recitales realizados en el marco de Ciudad del Rock y, recientemente, volvió a ser noticia porque en 2015 se comenzó a construir allí la villa para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en la ciudad en 2018.

Al igual que sucede con la mayoría de las intervenciones y políticas urbanas de la última dictadura en la ciudad de Buenos Aires, aún existe escasa investigación académica sobre la realización del parque de diversiones. Considerando la poca producción y algunas limitaciones propias del objeto (como la escasez de fuentes), este trabajo se plantea algunos interrogantes respecto a su realización durante la

.....
 1 Durante la intendencia de Cacciatore, Guillermo del Cioppo estuvo al frente de la Comisión Municipal de Vivienda y fue uno de los responsables máximos del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia llevado a cabo por la municipalidad porteña en ese período.

2 El Parque Almirante Brown fue creado por el Plan Regulador. Se le asignó una extensión de 1.400 hectáreas que alcanzaba a los barrios de Flores, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo y, sobre la base de este plan, se concretaron el saneamiento y la urbanización del área (con la construcción de los conjuntos habitacionales de Lugano y Soldati) (Suárez, 1986).

dictadura. ¿Por qué la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires decidió construir un parque de esas características en el sur de la ciudad? ¿Qué aspectos de su puesta en marcha nos permiten conocer el desempeño de la intendencia de la ciudad en el contexto histórico de la dictadura? ¿Qué ideas en torno a la ciudad y sus habitantes pueden hallarse en la propuesta del parque?

Para avanzar sobre estas preguntas, el artículo se estructurará de la siguiente manera. En primer lugar, se realizará un breve estado de la cuestión sobre ciudad y dictadura. En segundo lugar, se destacarán los antecedentes al proyecto del parque zoofitogeográfico y, especialmente, nos detendremos en los proyectos de traslado del Jardín Zoológico y en los concernientes a la urbanización o saneamiento del Parque Almirante Brown (lugar en el que se emplazaría el parque zoofitogeográfico). En tercer lugar, se trabajarán las iniciativas que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires emprendió en la zona sur de la ciudad para contextualizar el proyecto de Interama en el marco de otras intervenciones realizadas o proyectadas por la Municipalidad. En cuarto lugar, se realizará una descripción del proyecto planteado por la empresa concesionaria, por las características de su puesta en marcha y por la reacción de algunos sectores profesionales respecto del traslado del Jardín Zoológico y el destino de sus tierras.

Estado de la cuestión sobre ciudad y dictadura

La producción académica sobre el proyecto político, económico y social de la última dictadura militar fue muy fecunda (Schvarzer, 1983; Novaro y Palermo, 2003; Pucciarelli, 2004; Basualdo, 2006a; 2006b; Canelo, 2008; Castellani, 2008, entre otros). Sin embargo, sobre el nivel municipal y las políticas urbanas en este contexto, la producción aún es escasa. Para el caso de la ciudad de Buenos Aires, Oszlak fue pionero en estudiar algunas de las políticas para la ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El libro *Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano* (1991), constituye el primer aporte acerca de las políticas urbanas de la dictadura en el cual los planes y políticas han sido trabajados desde el punto de vista de la gestión municipal y de la redistribución poblacional. El autor consideró diferentes iniciativas como la construcción de autopistas,³ la relocalización industrial, el Cinturón Ecológico del Área Metropolitana-Sociedad del Estado y la Erradicación de Villas de Emergencia. En la obra citada, Oszlak señala que las iniciativas estuvieron basadas en una concepción novedosa acerca del derecho al uso del espacio urbano en tanto “capacidad de fijar el lugar de residencia o localización de la actividad económica dentro de un espacio determinado” (Oszlak, 1991: 23).

Domínguez Roca (2005), por su parte, analiza en un artículo la problemática del transporte y la circulación durante el siglo XX en los diferentes planes urbanos

.....

3 La Red de Autopistas Urbanas se proponía la construcción de nueve autopistas en la ciudad que requeriría de una gran cantidad de expropiaciones y demoliciones. La puesta en marcha de este proyecto inició en 1977 pero nunca se realizó en su totalidad: solo se construyeron las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo y se realizaron expropiaciones para algunas otras pero que no fueron realizadas. Para un análisis de la Red de Autopistas Urbanas propuesta por la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires puede consultarse Tavella (2014).

ideados para la ciudad de Buenos Aires. El autor marca que las políticas urbanas de la dictadura combinaron elementos que pueden ser considerados contradictorios: planteos de una planificación funcionalista y determinados aspectos como la prioridad dada a la realización de obras concretas por sobre la elaboración de planes a largo plazo, un cambio en la idea de “plan” –pasando de multisectoriales de alcance metropolitano a sectoriales a escala de la ciudad de Buenos Aires– y un sesgo antiindustrialista y socialmente excluyente. Además, afirma que las políticas urbanas implementadas por el brigadier Cacciatore pueden considerarse expresión de la planificación funcionalista aunque también contienen aspectos de los movimientos críticos a ella.

Por otro lado, Gorelik y Silvestri (1983) señalan que pueden encontrarse continuidades y rupturas con la historia de Buenos Aires en las obras que se realizaron a partir de 1976 y que muchas de ellas fueron identificadas como pertenecientes a la última ráfaga de la tradición modernizadora-planificadora. Por su parte, Gorelik (2004) indica que durante la dictadura puede comenzar a percibirse un proceso de “norteamericanización” de la ciudad, en el cual la referencia para su construcción comienza a ser Miami –en detrimento de París–: la proliferación de las autopistas, los *shoppings* y los *countries* demostrarían esta tendencia.

En cuanto al funcionamiento del Estado local, en un breve artículo Pajoni (1983) resalta los mecanismos arbitrarios y despóticos del Estado en el contexto dictatorial. Además, señala que luego de algunas operaciones “espectaculares” la municipalidad debió detener algunas iniciativas por las presiones sociales y los riesgos que conllevaban. Sin embargo, en el texto no se analizan esos procesos sociales lo suficiente como para demostrar que efectivamente esto fue así.

En cuanto al accionar municipal, el trabajo de Menazzi y Jajamovich (2012) sobre los intentos de traslado del Mercado Nacional de Hacienda y la Red de Autopistas Urbanas señala que este no fue unívoco y que hasta pudo ser contradictorio. Además, el trabajo de Menazzi (2013) destaca la diversidad de las políticas urbanas del período, la variedad de estas intervenciones de la dictadura en la ciudad de Buenos Aires y la complejidad de los actores estatales intervinientes. Por último, Fernández (2016) indica que las intervenciones de la dictadura en la ciudad privilegiaron a los sectores medios, mejorando el espacio urbano o la accesibilidad, con el objetivo de crear un área urbana exclusiva.

Respecto a las iniciativas específicas en la ciudad, es sobre el Plan de Erradicación de Villas sobre el que hay más bibliografía (Cuenya, Pastrana y Yujnovsky, 1984; Bellardi y De Paula, 1986; Blaustein, 2006; Snitcofsky, 2012; entre otros).

En relación con la realización del parque de diversiones, no conocemos trabajos académicos que lo aborden de manera sistemática. Aunque sí encontramos un trabajo que lo estudia en el marco de las acciones llevadas a cabo en áreas verdes y en relación al proyecto del Cinturón Ecológico y las obras en el Parque Almirante Brown (Fernández y Carré, 2011).

En este sentido, el presente artículo se orienta a indagar en una de las intervenciones urbanas más grandes realizadas por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) durante la última dictadura con el objetivo de ahondar en aspectos que aún hoy se encuentran poco estudiados.

El Parque de Diversiones: antecedentes y renovación del sur de la ciudad

A mediados de 1977 se publicó en el Boletín Municipal (BM) el llamado a licitación para el Parque Zoofitogeográfico (PZ) y de Diversiones de la Ciudad de Buenos Aires. Se indicaba que el Consejo de Planificación Urbana de la municipalidad había realizado una propuesta para trasladar el Jardín Zoológico (JZ) ubicado en el barrio de Palermo hacia la zona sur de la ciudad, dentro del área del Parque Almirante Brown (PAB). En el Boletín se señalaba que desde 1924 se estaban realizando estudios para el traslado del JZ y se citaba, por ejemplo, el proyecto de 1937 que proponía trasladarlo a los terrenos de la exchacra Saavedra, ubicada en el barrio homónimo. Además, en el llamado a licitación, se marcaba la continuidad con los proyectos de la década del sesenta que proponían el saneamiento del área (BM, 6/7/77). Este recurso fue muy utilizado por la MCBA para otorgar legitimidad a sus proyectos y para destacar una capacidad de gestión que –según señalaban sus funcionarios– los diferenciaba de administraciones anteriores (Tavella, 2014).

En cuanto a los impactos que tendría la obra en el área del PAB, se señalaba que la nueva ubicación del zoológico constituiría un “factor de progreso para la zona por la parquización de una extensa fracción de baldíos”, además de los beneficios que conllevaría el resto de las obras que convertiría a la zona en un polo de atracción turística (BM, 6/7/77: 35.355). Por lo tanto, subyacía a este proyecto la idea de una renovación estética y funcional del sur de la ciudad. Esta renovación se lograría dotando al PAB de nuevos equipamientos para cambiar su perfil (centros recreativos y deportivos, hoteles, barrios formales, escuelas, supermercados, entre otros) y expulsando del área a sectores sociales de bajos recursos mediante diferentes mecanismos que se desarrollarán más adelante.

Ahora bien, la gestión municipal de la última dictadura no fue la primera que se propuso intervenir la zona sur de la ciudad. Desde los años veinte se realizaron diferentes planes para la ciudad que plantearon la necesidad de un desarrollo más equilibrado entre las zonas norte y sur. El “Plan Noel” (1925)⁴ y el Plan Director para Buenos Aires (1938) –elaborado por el estudio de Le Corbusier– reconocían un desarrollo desigual de la ciudad hacia el Norte y Sur de las Avenida de Mayo y Rivadavia, y proponían una distribución equitativa de la densidad residencial y las actividades urbanas (Suarez, 1986). Algunas décadas más tarde, el Plan Director para la Capital Federal aprobado en 1962, también hizo énfasis en equilibrar el desarrollo de las zonas norte y sur de la ciudad, pero incluía también a la zona sur más lejana del centro porteño. Este plan proponía recuperar y sanear el basural del Bañado de Flores, transformándolo “en un sector urbano organizado” (Suárez, 1986:16). Además, planteaba modificar la oferta de espacios recreativos y deportivos distribuyéndolos de manera más equitativa dentro de la ciudad: en el norte el área de Palermo, al sur el PAB (exbañado de Flores), en el Noroeste los terrenos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y de la ex Chacra Saavedra (actual Parque Sarmiento) y la zona del centro se cubriría con un relleno de 400 hectáreas sobre el río.

.....
⁴ Carlos Noel fue intendente de la ciudad entre 1922 y 1927.

Además de los proyectos de urbanización y de realización espacios de esparcimiento para la zona PAB, el planteo de trasladar el JZ también había sido realizado anteriormente.⁵ Los primeros proyectos de traslado del JZ tuvieron la intención de reubicarlo en la zona norte de la ciudad. Durante la dirección de Mario Perón (1946-1955) se proyectó e inició su traslado al predio del actual Parque Sarmiento⁶ pero, finalmente, no se concretó. Luego, en la década del sesenta se propuso su traslado al sur de la ciudad –específicamente al PAB– aunque esta propuesta tampoco se llevó a cabo (Vasta, 2014).

A diferencia de los antecedentes mencionados respecto del traslado del zoológico, no tenemos evidencia de que la realización de un parque de diversiones (PD) contara con antecedentes previos. Por lo tanto, se presupone que la idea de realizar un parque de este tipo fue propia de la MCBA en el período que nos ocupa.

Antes ‘cirujas’, hoy golfistas:⁷ *renovación de la zona sur de la ciudad*

Como se mostró en el apartado anterior, desde los años sesenta la zona del Bañado del Flores era considerada un área sobre la que había que intervenir y, en ese sentido, se realizaron algunas obras antes del inicio de la última dictadura. Durante la gestión del Brigadier Osvaldo Cacciatore (1976-1982), la MCBA continuó con la intención de renovar esa área y la incluyó en un plan de cuidado del medio ambiente. Este planteo coincidía con los proyectos que se habían realizado anteriormente respecto de ampliar los espacios de esparcimiento en la ciudad, construyendo este tipo de equipamiento en el PAB.

Así durante la gestión de Cacciatore, la realización de PZ y PD se propusieron como parte de un conjunto de políticas de saneamiento ambiental para la zona del PAB. Estas medidas incluyeron la prohibición de la incineración de los residuos domiciliarios, la eliminación de basurales a cielo abierto y la implementación de una nueva modalidad de disposición de residuos con la creación del CEAMSE. El proyecto del cinturón ecológico también se proponía la realización de un Sistema Regional de Parques Recreativos que actuarían como una “fábrica de oxígeno” (MCBA, 1980:88). La municipalidad manifestaba que su intención era llegar a las 30.000 hectáreas de espacios verdes que cumplirían con la doble función de purificar el aire y ofrecer posibilidades de recreación. El área del PAB se encontraba incluida dentro de este sistema de parques recreativos. Además, se planificaron para el área otros proyectos. Por ejemplo, en el Parque Julio Argentino Roca,⁸ se

.....
5 El Jardín Zoológico de Buenos Aires fue concebido como una sección Zoológica-Botánica dentro del Parque Tres de Febrero, fue creado por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento y se inauguró en 1875. En 1888 el Gobierno Nacional cedió el Parque Tres de Febrero a la Municipalidad de Buenos Aires y se creó el Jardín Zoológico de Buenos Aires (Vasta, 2014).

6 Ubicado entre las avenidas Ricardo Balbín y General Paz, y las calles Crisólogo Larralde y Andonaegui, ciudad de Buenos Aires.

7 MCBA, 1980, pág.144.

8 El Parque Julio Argentino Roca se encuentra emplazado entre las calles: Avenida Coronel Roca, Avenida Escalada, Avenida 27 de febrero, Autopista Presidente Héctor Cámpora en el barrio de Villa Soldati.

planeó la construcción de infraestructura para recreación⁹ y la edificación de un hotel internacional que iba a estar intencionalmente ubicado en las cercanías del autódromo y del futuro PZ. El proyecto también incluyó la realización de una cancha de golf y de edificios nucleados en el denominado “Barrio Parque Golf” y la construcción de dos escuelas y un supermercado.

Además de los proyectos específicos, esta zona también se vio afectada por el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia que se desarrolló sobre toda la ciudad.¹⁰ En la intersección las Avenidas Escalada y Coronel Roca se encontraba el Barrio Policial Coronel García en cuyos alrededores se instalaron casillas precarias. A principios de 1971 se erradicó a los pobladores y se les otorgó viviendas del General Savio (Barrio Lugano I y II). Luego, los terrenos se ocuparon nuevamente en 1973 y se denominó al nuevo barrio “15 de mayo”. Con el plan de erradicación iniciado en 1977, estos terrenos se desocuparon y se destinaron al PZ.

Al plan de erradicación, se sumó la eliminación del basural que había en la zona del PAB. El destino del área como relleno sanitario integrado al nuevo sistema de tratamiento de residuos, tuvo como consecuencia la eliminación del “cirujeo” al mismo tiempo que despejaba terrenos para la realización de otros proyectos. La eliminación del basural también tenía como objetivo expulsar a las personas que iban allí a buscar en la basura alimentos o bienes para satisfacer sus necesidades. De esta manera, como afirmaba la MCBA, en el Parque Almirante Brown los “gol-fistas” reemplazaron a los “cirujas” (MCBA: 1980).

La erradicación de villas y la eliminación del basural tenían en común la búsqueda de una renovación estética para la zona que necesitaba de la expulsión de los sectores de menos recursos. El proceso de expulsión, signado por la violencia y la exclusión, desplazaba a esta población pero no otorgaba opción de vivienda o de empleo como alternativa a la villa o al cirujeo. Así, vemos cómo la violencia ejercida sobre quienes vivían o circulaban en los terrenos del PAB, colaboró con la liberación de terrenos que luego se utilizaron para otros fines y sirvieron para demostrar la capacidad de acción del Estado local.

El Parque Zoofitogeográfico y el Parque de Diversiones según Interama

En septiembre de 1978 se preseleccionaron tres proyectos de los que se presentaron al llamado a licitación. El consorcio N° 1, Interama, estaba integrado por Babic S.A. Constructora e Industrial; Tomás Carvallo Quintana, Ingeniero Luis Juan Bautista Piatti, Daniel Carlos Peilinsoh, Dr. Alberto Gourdy Allende, Brigadier Hugo Martínez Zuviría, Gral. Mario Horacio Laprida. Mientras que los consorcios N° 2 y 3 estaban conformados por las empresas Plurinver S.A., Comysa Empresa Constructora S.A., y Desarrollo de Obras S.A., y por Parque Recreativo S.A, respectivamente (BM, 28/9/78).

.....

⁹ El proyecto incluía la realización de canchas de vóley, fútbol, tenis y básquet y piletas de natación.

¹⁰ En 1977 la MCBA inició un Plan de Erradicación de Villas de Emergencia en la ciudad. El plan se puso en marcha en 1977 y, mediante el uso de la violencia, logró la erradicación de 17 villas entre 1976 y 1983 y la reducción de la población que habitaba en ellas en un 94% (Cravino, 2006).

Finalmente, el consorcio Interama fue seleccionado para realizar las obras. En este punto es necesario señalar dos cuestiones. La primera es que el consorcio se conformó para este llamado a licitación. Cuando se presentó como oferente, Interama no poseía personería jurídica ni estaba constituido como empresa o consorcio. Es decir, el grupo se conformó especialmente para presentarse como oferente para la realización del PZ y del PD. En segundo lugar, el consorcio estaba integrado por miembros de la fuerza aérea y el ejército. Si bien el grado de avance de la investigación aún no permitió realizar hallazgos en este sentido, resulta llamativo que el consorcio ganador estuviese conformado por miembros de la misma fuerza de la que provenía el intendente de la ciudad.

En los pliegos de la licitación figuraba que primero debía realizarse el PZ y, en segunda instancia, el PD porque este último era considerado un proyecto subsidiario. Sin embargo, una vez licitado el proyecto y a pedido del grupo empresario seleccionado, se comenzó a construir primero el PD, mientras que el traslado del zoológico y el PZ quedaron en segundo lugar. La idea era financiar las obras del PZ con los ingresos que generara el PD. Finalmente, nunca se inició el traslado del zoológico ni la construcción del PZ.

Cabe destacar que la modalidad elegida para la realización del proyecto fue la concesión de obra pública, sistema que también se utilizó para la realización de la Red de Autopistas Urbanas (Tavella, 2014). En este punto, es preciso señalar que el gobierno central estaba atravesado por la tensión entre una política económica liberal –que buscaba un ajuste basado en la liberalización de los mercados y en la reducción del gasto público– y una política económica que alentaba la intervención estatal –como actor económico directo a través de obras o como factor favorecedor de intereses privados–. Así, coexistieron dos programas económicos diferentes: la propuesta de apertura económica, planteada por el equipo de Alfredo Martínez de Hoz, y un proyecto neodesarrollista, vinculado al Ministerio de Planeamiento comandado por el general Ramón Díaz Bessone, que otorgaba al Estado un rol central en la decisión sobre los asuntos económicos y la planificación (Pucciarelli, 2004; Canelo, 2008). Esta tensión entre diferentes perspectivas produjo que la política económica de la última dictadura presentara un alto grado de ambigüedad en tanto que convivieron decisiones que intentaban disminuir el peso del Estado en la economía con otras que provocaban un importante nivel de intervención. Estas diferencias provocaron que el Estado no eliminara su intervención en determinadas áreas –como la promoción industrial, el impulso a la obra pública y la realización de proyectos mixtos de inversión–, y la etapa se caracterizó por presentar condiciones propicias para la expansión de diversos ámbitos privilegiados de acumulación en la que se favoreció a “un reducido grupo de espectro de grandes firmas” (Castellani, 2008: 133). En el caso de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, encontramos que, por un lado, sus funcionarios se declaraban a favor de la reducción de las actividades del Estado, mientras que por el otro destacaban la presencia del Estado en la realización de obras y garantizaban con recursos de la comuna la realización de grandes infraestructuras –aunque favorecían los intereses de las empresas contratistas y asumían los riesgos en caso de que las obras no fueran rentables–. Así, la gestión de la municipalidad de la ciudad expresó la

misma ambigüedad que se observó en la gestión económica del gobierno nacional (Tavella, 2014).

Volviendo al PZ y al PD, el proyecto presentado por el consorcio ganador fue confeccionado por un “Grupo Organizador” contratado por el directorio del parque. El grupo organizador del PZ estaba compuesto por cuatro norteamericanos, un alemán y un francés. El coordinador del grupo y del proyecto era Frank de Vanharasz, de origen francés. El ante proyecto del nuevo zoológico fue confeccionado por la empresa Design Matrix Inc. Florida (Estados Unidos). La compañía contaba con el antecedente de haber elaborado también el diseño de los zoológicos de Dade Country, Florida, Estados Unidos. Por su parte, el Grupo Organizador del parque de diversiones también estaba encabezado por de Vanharasz quien fue el autor del proyecto. Además, participaban tres expertos norteamericanos, un alemán y un suizo. El anteproyecto del PD fue realizado por Ronald M. McMahon y Associates (California, Estados Unidos). La mencionada compañía ya había proyectado parques similares en Estados Unidos, Francia, Kuwait y Canadá. A ambos equipos se sumarían entre dos y tres profesionales argentinos (*La Prensa*, 8/9/78).

La propuesta para el PZ consistía en la realización de un parque más grande y moderno que el zoológico existente. La idea era instalar también un jardín botánico, un parque geológico y un acuario en la zona delimitada por las Avenidas Lacarra, Castañares, Escalada y Fernández de la Cruz (*Clarín*, 16/7/78). El parque ocuparía alrededor de 130 hectáreas, lo que significaba otorgarle una extensión mucho mayor debido a que el zoológico y el botánico existentes, juntos, abarcaban 50 hectáreas. El nuevo proyecto convertía al PZ en el zoológico más grande América y en el tercero del mundo luego del de Toronto y Dajkarta (*El cronista comercial*, 28/11/78 y *La Prensa*, 8/9/78).

El proyecto contenía la idea de que el PZ no estuviera destinado solo al entretenimiento, sino que ejerciera también un rol educativo. Por ese motivo, se planteaba la distribución de los animales (alrededor de 1200 especies diferentes) de acuerdo a su origen geográfico que se dividirían en ocho áreas principales: Ártica, Néartica (América del Norte), Neotropical (América del Sur), Paleártica (Europa y África del Norte), Etiópica (africana), Oriental (asiática), Australiana y Ártica. Además, con la exposición de los animales se planeaba instalar la flora perteneciente a cada área geográfica para mostrar a los animales en un ambiente parecido a su hábitat natural (*La Prensa*, 8/9/78). El plan contemplaba, también, la construcción de un acuario y de un hospital. El nuevo zoológico estaría integrado al jardín botánico, para el que se planificaba contar con 2.000 especies diferentes de plantas y árboles y se planeaba plantar 200.000 ejemplares (*El cronista comercial*, 28/11/78). La idea era realizar un nuevo concepto de zoológico sin jaulas, en el que los animales circularan libremente y en el que los visitantes transitaran en senderos peatonales pero también en tranvías sin rieles (*El cronista comercial*, 28/11/78: 20).

Un punto a destacar era que para acceder al nuevo zoológico los concurrentes iban a tener que abonar una entrada que superaba ampliamente al valor simbólico que se pagaba hasta el momento para ingresar al zoológico de Palermo (*Clarín*, 16/7/78). De esa manera, quedaba en evidencia que la intención del traslado no constituía solamente un proyecto urbanístico, sino que también se orientaba a pri-

vatizar el entretenimiento y a brindar beneficios a las empresas privadas que lo gestionaran.

La reacción de los sectores profesionales frente al traslado del Jardín Zoológico

Aunque el traslado del JZ y de construcción del PZ nunca se inició, su anuncio causó cierto revuelo por el destino que se daría a las tierras liberadas en Palermo luego del traslado. Tempranamente, algunos profesionales como Odilia Suárez y Francisco García Vázquez criticaron al intendente Cacciatore.¹¹ Según un artículo periodístico, el intendente había declarado que las tierras del JZ serían vendidas y en ellas se construirían edificios (al igual que sucedería con las tierras destinadas para construir un Auditorio de la Ciudad de Buenos Aires en los terrenos de la ex Penitenciaría Nacional).¹² Luego de esta noticia, diversos sectores se pronunciaron en contra de la reparcelación de las tierras, la pérdida de espacios verdes y la privatización del zoológico (*Somos*, 17/11/78). Entre ellos se encontraban arquitectos, planificadores, paisajistas y algunas organizaciones especializadas como la Fundación Vida Silvestre Argentina (*Somos*, 15/9/78). Así, diversos artículos expresaban la oposición de los profesionales y sus nucleamientos –como el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas– a la venta de terrenos municipales y a la edificación en los espacios verdes existentes –como el predio del JZ o el de la expenitenciaría– (*La Nación*, 8/9/76 y 22/9/76).

Odilia Suárez, en un artículo de la revista *SUMMA*, expresó su desacuerdo a la venta de tierras y enmarcó el accionar municipal en continuidad con gestiones anteriores:

Estas medidas, no compartidas por el equipo técnico del Consejo de Planificación Urbana del Municipio, se suman a otra serie de decisiones inconsultas que, en los últimos años, han adoptado las sucesivas autoridades municipales con respecto a otras áreas libres dentro de la ciudad en contraposición con el uso fijado para las mismas por las oficinas técnicas pertinentes. Así, por ejemplo, los terrenos que ocupara la ex Chacra Saavedra habían sido destinados, por el Plan Regulador, en parte para la localización del Hospital de Pediatría (...) y, el resto, para desarrollar un campo deportivo municipal. (...) Las actuales autoridades proyectan, en cambio, destinarlos terrenos de la ex Chacra Saavedra para el desarrollo de un country golf privado y anuncian la futura enajenación de los terrenos que ocupa el actual Parque Zoológico y los previstos para el futuro Auditorio (...). (Suárez, 1976: 89)

.....

11 Es preciso destacar que Suárez en su doble rol de exintegrante del Consejo de Planificación Urbana de la MCBA y de profesional del campo de la planificación urbana, fue una de las profesionales del campo que más se opusieron públicamente a las acciones de la MCBA, especialmente a la construcción de autopistas urbanas (Tavella, 2014). Por su parte, el arquitecto García Vázquez fue presidente de la SCA durante la dictadura y participaba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta participación, sumada a las críticas que realizó a la municipalidad, lo convirtieron en blanco de atentados y amenazas (Lienur., 2004).

12 En el predio que ocupó la ex Penitenciaría Nacional hoy se encuentra el Parque Las Heras. El terreno está delimitado por las Avenidas General Las Heras, Coronel Díaz y las calles Jerónimo Salguero y Juncal.

En el mismo número de la revista, Francisco García Vázquez también se pronunció en contra de esta iniciativa. El arquitecto hacía mención a una “ola de protestas” que se había desatado a partir de la intención de la MCBA de vender terrenos tan valiosos y destacaba que solo podrían acompañar el proyecto quienes pensarán a la ciudad como una “mera mercadería especulativa” (García Vázquez, 1976: 93). Al igual que Suárez reclamaba la implementación de los planes elaborados anteriormente y consideraba a estas medidas como un retroceso en el proceso de planeamiento de la ciudad. Por último, el arquitecto hacía énfasis en el déficit de espacios verdes que tenía la ciudad y señalaba que la MCBA tenía que comprar tierras y no venderlas.

De las declaraciones de Suárez y Vázquez se desprenden algunos puntos importantes. En primer lugar, consideraban que la intención de la MCBA respecto a los terrenos liberados de la ciudad, marcaba una continuidad con gestiones anteriores que también habían avanzado en la venta y privatización de las tierras perdiendo espacios públicos y recreativos para la ciudad. En segundo lugar, destacaban que la MCBA no respetaba planes anteriores –elaborados por expertos– que pensaron y planificaron la ciudad. En este sentido, Suárez se preguntaba si era admisible que este tipo de decisiones fueran tomadas por “funcionarios cuyo currículum no los acredita como urbanistas” (Suárez, 1976: 89). Por lo tanto, al igual que sucedió con otros proyectos como la construcción de autopistas urbanas, los sectores profesionales reclamaban tener incidencia en las decisiones que tomaba la MCBA al mismo tiempo que consideraban que las políticas urbanas llevadas a cabo no eran decididas por profesionales idóneos en la materia (Tavella, 2014).

Frente a esta situación, la MCBA expresó su acuerdo con que los espacios verdes en la ciudad eran escasos y que, por lo tanto, serían aumentados y redistribuidos. Por ejemplo, se transformarían basurales, baldíos y descampados en espacios verdes. Además, la MCBA también anunció que se pondría en marcha un plan de renovación urbana para mejorar plazas y áreas de recreación. Sin embargo, la comuna mantenía la idea de convertir el predio de la expenitenciaría en “un sector urbanístico moderno y adecuado” en el que se construirían grupos habitacionales pero conservando gran parte del espacio verde. Respecto a las tierras del JZ, la MCBA declaró que no se realizaría ningún “loteo irracional” (*La Nación*, 22/9/76: 7).

En 1978, con la licitación del proyecto en marcha, la MCBA creó una comisión para definir qué uso se daría a los terrenos liberados por el zoológico. La MCBA aclaraba que la mayoría de la superficie sería utilizada para espacios verdes, pero no se descartaba la realización de construcciones con fines culturales (BM, 20/7/78). La comisión estaba presidida por el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Laura, mientras que el coordinador era el Presidente del Consejo de Planificación Urbana, José Manuel Pastor. La comisión se expidió en 1979 reiterando la voluntad de que el espacio liberado fuera utilizado en mayor medida como espacio verde, pero, además, señaló que era necesario anexar tierras utilizadas por la Sociedad Rural y se solicitaba al Ministerio del Interior considerar la posibilidad de realizar un nuevo edificio para el Museo Nacional de Bellas Artes en esos terrenos (BM, 11/6/79). Por lo tanto, la MCBA dio marcha atrás con su intención de vender los terrenos para construir edificios en torre y, al menos en términos formales, tomó la idea que

planteaban los sectores profesionales de que esos terrenos fueran utilizados como espacios de esparcimiento para la ciudad.

Los actores mencionados en este apartado también se expresaron fuertemente respecto de la construcción de la Red de Autopistas Urbanas. En ese caso, que adquirió una fuerte visibilidad mediática, pudo observarse que si bien en un primer momento los profesionales mencionados se expresaron esgrimiendo argumentos técnicos, con el paso de los años y el desgaste del régimen y su estrategia represiva, se mostraron más críticos de las características autoritarias del gobierno de facto. En todo caso, las críticas realizadas respecto del traslado del JZ y la opinión acerca del destino de las tierras, se enmarcó en las críticas realizadas por diversos sectores a las políticas urbanas de la municipalidad en la Ciudad de Buenos Aires (Tavella, 2014).¹³

Puesta en marcha del Parque de Diversiones

En 1979, a menos de un año de que se otorgara la concesión para la realización del PZ y del PD, la empresa Interama comenzó a tener problemas económicos. En ese contexto, el consorcio cedió sus acciones al Banco SIDESA S.A. (a través de SIDESA Inversora S.A.) como parte de pago por las obligaciones financieras que había adquirido con esta entidad pero que no podía afrontar. A su vez, el banco SIDESA entregó las acciones a uno de sus clientes, Pablo Mariani, que a partir de ese momento se convirtió en el presidente de la nueva sociedad al frente del parque de diversiones. Mariani y su grupo, que desarrollaban actividades comerciales en una concesionaria de automóviles, se hicieron cargo de las obras y continuaron la construcción del parque de diversiones (Entrevista de la autora a Norberto Josovich, 24/8/15).¹⁴ Así, SIDESA se quedó con el 60% de las acciones, mientras que los socios fundadores conservaron el 40% (Cacciatore, 1993). En este contexto, el estudio Omar N. Vázquez y Asociados S.A., Ingenieros Consultores fue seleccionado para desarrollar el proyecto.

Cuando el ingeniero Vázquez y su equipo se pusieron al frente del proyecto, la obra se encontraba en una etapa inicial. Como director de obra el ingeniero viajó a Estados Unidos y se reunió con una de las personas que ideó el parque, Richard Battaglia. Juntos recorrieron *Disney World* para conocer cómo era un parque de diversiones por dentro y cómo se operaba técnicamente. Luego, Vázquez y su equipo realizaron algunas modificaciones de índole técnica al proyecto inicial (Entrevista de la autora a Omar Vázquez, 15/5/16). Las modificaciones fueron realizadas porque, según el ingeniero, el proyecto poseía características que no eran compatibles con la realización de una obra en Argentina y en el terreno escogido. Por ejemplo, las conexiones eléctricas estaban

.....
13 Entre las críticas realizadas públicamente a las políticas urbanas de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, podemos mencionar también a los vecinos que se opusieron a la construcción de autopistas, a otros sectores profesionales que se expresaron en relación al mismo proyecto como el Centro Argentino de Ingenieros y a los diversos sectores que se opusieron al Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, como, por ejemplo, el Equipo Pastoral de Villas de Emergencia (Tavella, 2014).

14 Norberto Josovich es abogado y llevó adelante la defensa de la MCBA en los juicios que inició Parques Interama luego de que se anulara la concesión en 1984.

diseñadas con 110 voltios y todas las construcciones estaban proyectadas en madera, material que Vázquez consideró poco adecuado. Según afirma Vázquez, en Argentina no había profesionales que pudieran realizar esas construcciones en madera y, en caso de avanzar, iba a ser necesario importarlas. Si bien luego se realizaron algunas edificaciones en este material dentro del parque, Vázquez señala que el suelo era muy húmedo (por abajo circula el Arroyo Cildáñez y era, además, un relleno sanitario) y se deterioraron rápidamente (Entrevista de la autora a Omar Vázquez, 15/5/16). Además, se diseñaron también nuevamente los restaurantes que figuraban en el plan original. El ingeniero realizó solamente modificaciones técnicas, mientras que conservó el diseño urbanístico original de los parques. Por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto que llevó adelante Vázquez fue, en términos generales, el que había planteado el Grupo Organizador contratado por el primer directorio. Si bien al momento no hemos encontrado fuentes que den cuenta del proyecto realizado por el Grupo Organizador, conocemos, en cambio, parte de la carpeta del proyecto que presentó Vázquez en 1979 en la que puede observarse el diseño del PZ y del PD.

El diseño del parque contaba con diversos sectores extendidos a lo largo de 170 hectáreas: Latino, Carnaval, Futuro, Fantasía e Internacional. Se planificaba implantar alrededor de 60 juegos, un salón de baile y entretenimientos, y restaurantes. El proyecto contenía, además, algunas características peculiares para el contexto y el lugar en el que se planeaba construir. En cuanto a los entretenimientos, se planificaba montar la montaña rusa más grande del mundo y un cine IMAX de pantalla gigante (de 34 por 24 metros) que sería el primero de Sudamérica. Además, se proponía construir una torre espacial de 200 metros que funcionaría como mirador (a 180 metros de altura) y en la que se instalaría un bar (a 120 metros) y un restaurante (a 160 metros) a los que se accedería por cuatro ascensores de alta velocidad.

Finalmente, el parque de diversiones abrió sus puertas en septiembre de 1982 con 44 juegos y con un grado de avance –aproximado– del 85%. La torre espacial, emblema del parque, se terminó en 1980 pero recién fue abierta al público en 1985 y solamente como mirador.

La torre de Interama como emblema de la grandilocuencia

Cuando se avanzó con las obras, la torre espacial fue una de las primeras construcciones que se realizaron. Según el Ingeniero Vázquez, él fue quien decidió construirla en primer lugar para asegurarse de que con la visibilidad que otorgaba la torre, el proyecto iba a tener continuidad en el tiempo (Entrevista de la autora a Omar Vázquez, 27/2/16). La torre de 200 metros puede verse desde muchos puntos de la ciudad y dio lugar a variadas interpretaciones. Lo cierto es que el formato de la torre fue comprado a una empresa estatal austríaca llamada Wagner-Biró y la que se construyó en Interama fue solo una réplica de otras que ya se habían construido en diversos lugares del mundo.¹⁵ Sin embargo, la torre de Interama se distinguió del resto por ser la más alta de todas.

.....
15 La construcción fue realizada por la empresa Intamin, quién también se encargó de la importación de todos los juegos del parque.

La torre, junto con otras atracciones que presentaba el parque como la montaña rusa más grande del mundo y el primer cine con pantalla gigante de la región, se convertirían en aspectos distintivos no solo del parque, sino también del estilo de gestión y construcción de la MCBA en la ciudad: la realización de grandes obras, inspiradas en experiencias “modernas” que, además de su impronta de progreso, buscaban dejar una huella persistente del paso de la última dictadura por la ciudad. La realización de grandes obras, con mucha visibilidad y que demandaban con un gran esfuerzo técnico, inscribe a la última dictadura en el espíritu ingenieril con el que se ha caracterizado a los gobiernos militares (Gorelik y Silvestri, 2005). Las mencionadas atracciones se instalaban como símbolo de modernidad en una zona, que, justamente, era caracterizada por su escaso desarrollo.

Consideraciones finales

Como se mencionó anteriormente, este artículo constituye una primera aproximación a la realización del Parque de Diversiones para la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, a continuación se esbozaran algunos señalamientos respecto de la realización del parque que seguramente serán objeto de revisiones posteriores a la luz del análisis de nuevos materiales empíricos y analíticos.

En primer lugar, puede destacarse que en el caso del PZ, al igual que sucedió con otras políticas urbanas del período, se hallan tanto continuidades como rupturas con gestiones anteriores. Por ejemplo, la idea de trasladar el zoológico ya había sido planteada varias décadas atrás pero la MCBA retomó esta iniciativa redoblando la apuesta al plantear un proyecto mucho más ambicioso: la realización de uno de los zoológicos más grandes del mundo bajo un concepto moderno que planteaba eliminar las jaulas y mantener a los animales en un contexto parecido a su hábitat natural. A este proyecto se agregó la realización de un Parque de Diversiones que hasta ese momento nunca había sido planteado como posibilidad en esa zona de la ciudad. Como se señaló, la insistencia en que el traslado del zoológico ya había sido esbozado con anterioridad, corresponde a una operación discursiva que la MCBA realizaba constantemente para legitimar sus proyectos y para demostrar su capacidad de gestión en comparación con administraciones anteriores. En cambio, al Parque de Diversiones se lo promocionaba con el acento puesto en el progreso que representaba, destacando, por ejemplo, que este tipo de parques existían en países mucho más desarrollados que Argentina (como Estados Unidos). Esta iniciativa podría sumarse a la tendencia de norteamericanización de la ciudad que pudo observarse también con otras iniciativas urbanas de la última dictadura para la ciudad –como las autopistas–. La modernidad del proyecto contrastaba con el lugar donde iba a ser emplazado. La zona del PAB era una de las más postergadas de la ciudad y la municipalidad se proponía renovarla estéticamente y funcionalmente. En este punto, algunas atracciones presentes en el parque como la montaña rusa más grande del mundo, el cine IMAX y la torre espacial más alta de su tipo, reforzaban el ideal de modernidad y grandilocuencia de las obras que la MCBA durante la última dictadura en la ciudad.

Otro aspecto a resaltar es el carácter excluyente de estos proyectos en cuanto a la manera en que se liberaron los terrenos para poder realizar las obras y al público

que se esperaba en ellos. Como vimos, los terrenos necesarios para la realización del PZ y del PD fueron despejados mediante la erradicación de una villa que había en la zona y con la eliminación del basural al que concurrían personas de bajos recursos para “cirujear”. Ambas iniciativas se realizaron de manera violenta y expulsaron a las personas que habitaban o circulaban por esos terrenos. Por otro lado, la entrada de acceso al PZ iba a ser mucho más cara que la que se abonaba para ingresar al zoológico existente. Por lo tanto, podría pensarse que era un entretenimiento ideado para sectores medios o altos de la ciudad. Sin embargo, el Parque de Diversiones estaba instalado en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad y cabe preguntarse si estaba destinado a la población que vivía allí. En este caso, nos preguntamos si el parque significaba un confinamiento territorial para la población del sur que accedía al mismo, sin alejarse de su territorio y sin acceder a otras partes de la ciudad destinadas a otros sectores sociales.

Por último, el parque Interama, junto con la Red de Autopistas Urbanas emprendidas por la municipalidad en 1977, constituye un emblema de las obras públicas realizadas en la ciudad durante la última dictadura militar. Las dos iniciativas poseen características que condensan gran parte del accionar militar en la ciudad en ese período. En primer lugar su dimensión: las autopistas y el parque (en especial la torre de 200 metros) son construcciones ambiciosas, que en un caso irrumpen en la trama urbana imponiéndose en el paisaje urbano y, en el otro, se erige sobre la ciudad existente y puede observarse desde muchos puntos de la ciudad. En segundo lugar, ambos proyectos se realizaron por concesión de obra pública, es decir, la MCBA confió a consorcios privados la realización y explotación de las obras actuando como facilitador de los negocios del sector privado. En el caso de Interama, las investigaciones judiciales desarrolladas posteriormente dejaron al descubierto que el grupo empresario realizó manejos irregulares de los fondos que el mismo Estado le había otorgado también de manera irregular. Por lo tanto, el caso del parque muestra que las tensiones entre una importante intervención del Estado en la realización de obras y el favorecimiento a la actividad e intereses privados que se observan para el gobierno nacional, también estuvieron presentes en la gestión de la municipalidad porteña.

Para finalizar, podemos afirmar que la realización del Parque de Diversiones condensó también otras dos características de la gestión porteña durante la última dictadura: la presencia de un Estado local fuerte, que ponía disposición todos sus recursos para poder concretar los proyectos que se había propuesto, y la intención de dejar una huella perdurable en la ciudad, por medio de obras e intervenciones de gran envergadura que, como sucede con la torre de Interama, aún hoy constituyen importantes marcas urbanas.

Bibliografía y Fuentes Primarias

- Basualdo, Eduardo (2006). “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera”. En: Basualdo, Eduardo y Arceo, Eduardo (comps.); *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires: CLACSOB. Pp. 123-177.
- Basualdo, Eduardo (2006). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bellardi, Marta y De Paula, Aldo (1986). *Villas miseria: origen, erradicación y respuestas populares*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Blaunstein, Eduardo (2006). *Prohibido vivir aquí. La erradicación de villas durante la dictadura*. Buenos Aires: Cuadernos de causa popular.
- Cacciatore, Osvaldo (1993). *Sólo los hechos*. Buenos Aires: Metáfora.
- Canelo, Paula (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Big-none*. Buenos Aires: Prometeo.
- Castellani, Ana (2008). “Intervención económica estatal y transformaciones en la cúpula empresaria durante la última dictadura militar (1976-1983)”. En: Lida, Clara; Crespo, Horacio y Yankelevich, Pablo (comps.); *Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Pp: 131-164.
- Cravino, M. Cristina (2006). *Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Cuenya, Beatriz; Pastrana, Ernesto y Yujnovsky, Oscar (1984). *De la villa miseria al barrio autoconstruido. Cuatro experiencias organizadas de producción del hábitat popular*. Buenos Aires: CEUR.
- Diario *Clarín* (1978). “Un parque de la naturaleza viva”, 16 de julio, p. 18.
- Diario *El cronista comercial* (1978). “Se dio difusión a la obra del nuevo zoológico. La empresa Parques Interama comunicó el plan para el complejo del Parque Almirante Brown”, 28 de noviembre, p. 20.
- Diario *La Nación* (1976). “¿Hay una ciudad que pueda vender sus espacios verdes?”, 8 de septiembre, p. 4.
- Diario *La Nación* (1976). “Planes urbanísticos de la municipalidad”, 22 de septiembre, p. 7.
- Diario *La Prensa* (1978). “Presentaron ofertas tres empresas para el parque zoofitogeográfico”, 8 de septiembre, p. 14.
- Domínguez Roca, Luis Javier (2005). “Planes urbanos y transporte en la ciudad de Buenos Aires.” En: *Scripta Nova* IX, N°194. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-112.htm> Fecha de la última consulta: marzo de 2017.
- Fernández, Leonardo (2016). “Disciplinar la sociedad a través de la ciudad. Urbanismo y Ecología en Buenos Aires y su región durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)”. En: Merlinsky, Gabriela (comp.); *Cartografías del conflicto ambiental 2*. Buenos Aires: Ciccus/CLACSO. Pp: 227-255.
- Fernández, Leonardo y Carré, Marie-Nöelle (2011). “La muralla verde. Áreas verdes como dispositivo para disciplinar la población- Gran Buenos Aires (1976-1983)”. En: *Provincia - Revista Venezolana de Estudios Territoriales*, nro. 25: pp.115-

142. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/33960/1/articulo6.pdf> Fecha de la última consulta: marzo de 2017.
- García Vázquez, Francisco (1976). "Compra tierra, no venderla". En: *SUMMA*, nro. 106, septiembre 1976, pp. 91-106.
- Gorelik, Adrián (1998). "1957-1997: algunos itinerarios en las ideas urbanas". En: *Punto de Vista*, nro. 60: pp. 50-55.
- Gorelik, Adrián (2004). *Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Gorelik, Adrián y Silvestri, Graciela (1983). "Ciudad y cultura urbana, 1976-1999: El fin de la expansión". En: Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto (comps.); *Buenos Aires, Historia de cuatro siglos*, tomo II. Buenos Aires: Abril. Pp. 461-500.
- Liernur, Jorge F. et al (2004). *Diccionario de Arquitectura en la Argentina*. Buenos Aires: Clarín.
- Menazzi, Luján (2013). "Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar (1976-1983)". En: *Scripta Nova* XVII, N°429. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-429.htm> Fecha de la última consulta: marzo de 2017.
- Menazzi, Luján y Jajamovich, Guillermo (2012). "Políticas urbanas en un contexto de dictadura militar Algunos interrogantes a partir de Buenos Aires." En: *Bitacora*, vol. 1, nro. 20: pp. 11-20. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/22643> Fecha de la última consulta: marzo de 2017.
- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1980). *Buenos Aires hacia una ciudad mejor*. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. *Boletín Municipal* años 1976-1983. Buenos Aires: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente (2003). *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.
- Oszlak, Oscar (1991). *Merecer la ciudad. Los pobres y el Derecho al Espacio Urbano*. Buenos Aires: Hymantitas-CEDES.
- Pajoni, Raúl (1983). "Buenos Aires, 1976-1982-La ségrégation compulsive". En: *Herodote*, nro. 31: pp. 38-60.
- Pucciarelli, Alfredo (2004a). "Introducción". En: Pucciarelli, Alfredo (coord); *Empresarios, tecnócratas y militares*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pucciarelli, Alfredo (2004b). "La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura encubre una vieja práctica corporativa". En: Pucciarelli, Alfredo (coord); *Empresarios, tecnócratas y militares*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Schvarzer, Jorge (1983). *Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica*. Buenos Aires: CISEA.
- Revista Somos* (1978). "Zoo: ahora faltan los animales", 17 de noviembre, p. 40.
- Revista Somos* (1978). "Zoo: el elefante y los monos primero...", 15 de septiembre, p. 38.
- Silvestri, Graciela (2005). "Fin de siglo urbano. Ciudades, arquitecturas y cultura urbana en las transformaciones de la Argentina reciente". En: Suriano, Juan (dir. tomo); *Nueva Historia Argentina. Dictadura y democracia: 1976-2001*. Buenos Aires: Sudamericana. Pp. 443 - 506.

- Snitcofsky, Valeria (2012). "Clase, territorio e historia en las villas de Buenos Aires (1976-1983)". En: *QUID*, vol. 16, nro. 2: pp. 46-62.
- Suárez, Odilia (1976). "Loteo de espacios libres y públicos en la ciudad de Buenos Aires". En: *Summa. Revista de arquitectura, tecnología y diseño*, nro. 104: pp. 89-90.
- Suárez, Odilia (1986). *Planes y códigos para Buenos Aires 1925-1985*. Buenos Aires: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.
- Tavella, Gabriela (2014). "Las autopistas no tienen ideología." *Análisis del proyecto de Red de Autopistas Urbanas para la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)*. Tesis de maestría, Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional de San Martín, mimeo.
- Tavella, Gabriela (2016). "Las autopistas no tienen ideología' . Análisis del proyecto de Red de Autopistas Urbanas para la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar argentina (1976-1983)". En: *Papeles de trabajo*, vol. 10, nro. 17: pp. 104-125.
- Vasta, Marina (2014). *El zoológico y la ciudad*. Tesis de maestría, Carrera de Especialización en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo, Universidad de Buenos Aires, mimeo.
- Vázquez, Omar, y asociados S.A, Ingenieros Consultores (1979). Buenos Aires: Mimeo.

O Minhocão como expressão autoritária em São Paulo

DEBORAH REGINA LEAL NEVES*

Resumen

El “Minhocão” (así se conoce la antigua vía Elevada Presidente Costa e Silva, Sao Paulo), construido entre 1969 y 1971, representa el período más autoritario de la reciente dictadura civil-militar brasileira (1964-1985). Su construcción ocurrió durante el llamado “Milagre Económico” (1968-1973), cuando la economía brasileña tuvo un rápido crecimiento, y la vía se convirtió en un símbolo del poder autoritario. El presente artículo tiene por objetivo demostrar cómo se concibió esta obra y los impactos sobre el paisaje de la zona central de Sao Paulo.

Palabras clave: Minhocão; autopista elevada; São Paulo; dictadura.

Fecha de recepción: 31-03-2017

Fecha de aceptación: 15-09-2017

The “Minhocão” as an Authoritarian Expression in São Paulo

Abstract

The “Minhocão” (nickname of the most famous elevated road in São Paulo, previously known as Via Elevada Presidente Costa e Silva) was constructed between 1969 and 1971 and is a symbol of the most authoritarian period of Brazil’s recent civil-military dictatorship (1964-1985). Its construction took place during the years known as “Milagre Económico” (Economic Miracle), when the country experienced a period of fast economic growth, making this elevated road a symbol of power and autocracy. This article intends to explain how this construction was planned and its impact in São Paulo’s downtown urban landscape.

Keywords: Minhocão; Elevated Road; São Paulo; Dictatorship.

.....
* Doctorado (en curso) en História en la Universidade Estadual de Campinas; Maestria en História en la Universidade de São Paulo, con la tesis “A persistência do passado: memoriais e patrimônio da ditadura em São Paulo e Buenos Aires”. Licenciatura en historia en la Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico. Postgrado en “La investigación en Historia Reciente: desafíos conceptuales y disciplinares para su abordaje” (Caicyt - 2012) Especialista em Gestão do Patrimônio e Cultura por el Centro Universitário Assunção (Unifai - 2011). Correo electrónico: deca.neves@gmail.com

Introdução: um problema do presente, que exige a compreensão do passado

O ano de 1969 foi decisivo para aspectos políticos e econômicos no Brasil. Foi neste ano que a face mais autoritária da Ditadura Civil Militar brasileira revelou-se, com o fechamento de assembleias legislativas de vários estados, com a institucionalização da tortura como método de interrogatório por meio de aparelhos de segurança das Forças Armadas e as intervenções urbanas de grande impacto nas cidades, propiciadas especialmente pela conjugação entre a Reforma Tributária de 1966, o fim das eleições diretas para Prefeitos em cidades consideradas estratégicas –como as capitais dos estados– e a nova política econômica que trouxe benefícios fiscais para grandes empresas privadas e setores pontuais da economia, como o agronegócio, indústria e construção civil.

Neste ano chegou à Prefeitura de São Paulo –a cidade mais importante do país em termos econômicos– uma figura até então desconhecida no meio político: Paulo Salim Maluf, empresário do setor da construção civil, indicado pelo Ditador Presidente Costa e Silva.

Durante sua gestão foi idealizada a obra que ainda suscita os maiores debates e polêmicas acerca da intervenção urbana na área central da cidade: o Elevado Costa e Silva, popularmente conhecido como Minhocão –e daqui em diante assim será tratado neste texto–. A via percorre 3,4 km sobre uma das avenidas mais simbólicas da cidade de São Paulo: a Avenida São João, que tem início na área central mais histórica, ocupada por hotéis e edifícios ecléticos e prolongada a noroeste na década de 1940, segmentando a região entre a área central e sua zona de expansão da classe média alta no vetor sudoeste –como o bairro de Higienópolis– com profundo impacto visual e ambiental na região.

Além da discussão sobre o impacto urbano do Minhocão, outro aspecto relevante é o simbólico. A construção da via está associada à Ditadura e à figura de Paulo Maluf, que vislumbrou e viabilizou a obra. Batizado como Elevado Costa e Silva, rende homenagem ao segundo ditador que exerceu a presidência. O Decreto 8.574 de 19/12/1969, que dá nome ao elevado, justifica que “(...) ao poder público compete (...) a iniciativa de homenagear brasileiros que tenham se distinguido em seus relevantes serviços à Pátria, constituindo, assim, exemplo às gerações futuras” e que “(...) o eminente Marechal Arthur da Costa e Silva, especialmente no exercício da Suprema magistratura do País, dignificou o Brasil como cidadão, como militar e homem público”.¹ Costa e Silva, que nomeou Paulo Maluf ao cargo de Prefeito, conspirou contra o Presidente eleito João Goulart, editou o AI-5² e sob

.....
1 São Paulo (Prefeitura). Decreto nº 8.574 de 19 de dezembro de 1969. Dispõe sobre a denominação de Via Elevada, em construção, nos 7º, 11º, 19º e 35º subdistritos – Consolação, Santa Cecília, Perdizes e Barra Funda, respectivamente e dá outras providências.

2 O Ato Institucional Nº5, conhecido como AI-5, foi um dos muitos atos discricionários do Poder Executivo durante a Ditadura. Este, especificamente, “(...) autorizava o presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a: decretar o recesso do Congresso Nacional; intervir nos estados e municípios; cassar mandatos parlamentares; suspender, por dez anos, os direitos políticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens considerados ilícitos; e suspender a garantia do habeas-corpus.” Ver: D’Araujo, Maria Celina. O AI-5. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5> Data da última consulta: jul. 2017.

sua Presidência foi instituído o mais duro aparato de repressão da ditadura, faleceu em 17/12/1969, oito meses após nomear Maluf para a Prefeitura.

O convite de inauguração do elevador, publicado pela Prefeitura em jornais de grande circulação anunciava “A obra, que é a maior do gênero em toda a América do Sul, eternizará em sua denominação, uma das grandes figuras da Revolução de 1964” ([Foto 1](#) - Convite para a inauguração, publicado na edição de 23 de janeiro de 1971 da *Folha de São Paulo*, p. 7 - Data da última consulta: dez. de 2016).³

A idéia central do texto é demonstrar como esta obra rompe com uma questão importante no planejamento da cidade até então –o uso de vias para automóveis como aspecto embelezador da cidade, aliado à idéia do automóvel como expressão da modernidade– com o objetivo de fortalecer a imagem da eficiência administrativa e executiva do governo civil-militar bem como da primazia da tecnocracia sobre a política, construindo uma nova paisagem urbana que caracterizou o período.

Os Planos Urbanos como expressão do poder do carro no planejamento da cidade

Hoje, passados pouco mais de 80 anos do primeiro grande plano viário para a cidade de São Paulo, a importância dos carros tem diminuído nas diretrizes de ocupação do espaço, mas longe de deixar de ser prioridade. O primado do veículo automotor individual não é um fenômeno recente e está ligado ao desenvolvimento da cidade de São Paulo no cenário capitalista industrial brasileiro. O automóvel era um fenômeno mundial, apresentado ao mundo na Exposição Universal de Paris de 1889 por Karl F. Benz, popularizado por Henry Ford em 1908 com o modelo Ford T (Herce, 2006).

O Plano de Avenidas, publicado em 1930 por Prestes Maia após encomenda da Prefeitura, tinha em perspectiva a discussão urbanística que ocorria em outros países, em especial da Europa, e sua principal proposta era a circulação de veículos em esquema radial-perimetral por meio de um anel viário em torno do centro da cidade. Em 1937, Maia foi nomeado Prefeito e em sua gestão foram construídas grandes e importantes vias e viadutos para transpor os vales do centro da capital. O aspecto estético era relevante e a linguagem racionalista predominou na paisagem da cidade, em formas que exaltavam a grandiosidade das obras, a velocidade do automóvel e a modernidade da cidade.

Os principais pontos do Plano de Avenidas são “(...) o princípio do crescimento (horizontal e vertical destacando a expansão do centro), o papel crucial da circulação (dando-se preferência ao transporte rodoviário e automóvel) e a idéia de uma estrutura urbana voltada ao crescimento e apoiado no arcabouço viário (...)” (Campos; Somekh, 2008a: 62). Por isso, o transporte por ônibus substituiu paulatinamente o sistema de bondes, atingindo distâncias mais longas, expandindo os limites da cidade, implicando também numa ocupação desordenada do território.

O crescimento da cidade, o fim da II Guerra Mundial, o rodoviarismo e a influência dos Estados Unidos sobre o mundo contribuiu para a Prefeitura de São

.....

3 Las imágenes del presente artículo se visualizarán por medio de los hipervínculos activos contenidos en la palabra “Foto ...”. N. del E.

Paulo contratar em 1950 um estudo urbanístico à Internacional Basic Economy Corporation, ligada a Nelson Rockefeller. O estudo realizado por Robert Moses, responsável pelas maiores transformações urbanas da cidade de Nova Iorque, especialmente as obras viárias como pontes e túneis, e parques idealizou o “Programa de Melhoramentos Públicos para a cidade de São Paulo” e apesar de propor zoneamento, sistema viário, saneamento e áreas verdes, foi concebido sem base em diagnóstico e desenho de zoneamento, podendo ser considerado mais um conjunto de recomendações que um plano urbano (Campos y Somekh, 2008b: 86). Percebe-se aqui uma primeira ruptura de modelo urbano: substituía-se o modelo europeu pelo estadunidense.

Apesar das limitações, é inegável a influência deste plano na construção de paisagens em São Paulo. Moses idealizou o conceito de subúrbios conectados à área urbana por meio de grandes avenidas –*parkways*– e seu programa para São Paulo concebia novas grandes avenidas expressas conectadas às rodovias em construção (Anchieta, Anhanguera e Pres. Dutra), privilegiando o transporte individual. Aliado a isso, ao longo da década de 1950, a produção de veículos automotores recebeu incentivos fiscais do governo federal, em especial Juscelino Kubitschek, substituindo o transporte por bondes, que possuía 353km de malha em 1968. Neste momento, o transporte sobre rodas substituiu definitivamente o transporte sobre trilhos em São Paulo.

Nesse contexto, está um plano ambicioso para a zona central da cidade importante para o comércio e com muitos edifícios residenciais, que seria tratado, a partir daí, como um local de passagem para veículos. A mais importante intervenção está no trecho que realiza a ligação entre as zonas leste e oeste da cidade. A zona leste, bastante populosa e ocupada pela camada mais baixa da população além de ainda ser a zona industrial predominante da cidade, e a zona oeste ocupada historicamente pelas camadas mais altas da sociedade paulistana.

No centro da discussão da remodelação viária da área central da cidade está a Rua Amaral Gurgel, como o eixo Oeste da ligação entre o oriente e o ocidente. A via foi o alvo das principais transformações de paisagem da região: antes uma rua tranquila, foi duplicada durante a segunda gestão de Prestes Maia na Prefeitura, entre 1961 e 1965 visando continuar o Plano de Avenidas, construindo a “Segunda Perimetral”.

Por conta da dificuldade de transposição do centro em decorrência das vias e estrutura já existentes, a proposta de perimetral foi substituída por diametral, iniciada na Amaral Gurgel e se conectando ao lado leste por meio de vias na região da Luz e do Brás. De lá, partiria para o oeste por uma via elevada e conectada com o lado oeste por via arterial e viaduto. Essa ligação era considerada importante para tornar o tráfego mais ágil e por ligar áreas opostas, cruzando uma região com alta densidade populacional, visando melhorar o fluxo de carros no interior da área central da cidade, repleta de escritórios comerciais e de serviços, que já não comportava mais o volume de veículos que aumentava exponencialmente (Foto 2: Rua Amaral Gurgel, 1958 – Acervo Folhapress/ Foto 3: Acervo Folhapress - Data da última consulta: dez. de 2016).

O intervalo entre o estudo e sua execução foi longo, exigindo adaptações diante da dinâmica da cidade. A densidade urbana da região inviabilizaria a execução do projeto pelos custos de desapropriação e o tempo envolvido. Para tanto, o número de vias elevadas a leste –e, portanto, o mais pobre– foi ampliado, incluindo uma ligação

subterrânea na Praça Roosevelt. A obra na Praça foi anunciada em 1967 pelo Prefeito José Vicente de Faria Lima –eleito na última eleição direta em 1965–, e sua conclusão ocorreu em 1970 na gestão de Paulo Maluf, e foi alvo de críticas desde seu início por ter criado uma paisagem árida e ter provocado um forte impacto na paisagem da região.

A praça possui cinco pavimentos que foram concebidos para representar a modernização da cidade, pois “(...) a Roosevelt era mais que uma praça. Era um sistema viário, edifício e viaduto” (Calliari, 2012). Cada um dos pavimentos teria uma função distinta: estacionamentos subterrâneos, centros educacionais e esportivos, lojas, polícia, centro cultural (não realizado) e um espaço para feiras. O projeto expõe a primazia da estética Moderna da arquitetura, executado em concreto armado, com garagens para os veículos – uma expressão estética deste novo momento.

A mudança final do traçado da Segunda Perimetral para um eixo Diametral ocorreu também na gestão de Faria Lima, o último prefeito eleito por eleições diretas em 1965. A ligação no lado oeste não seguiria entre a Luz e o Brás –bairros populares e densos, de importante ocupação histórica e ao lado de ferrovias–, mas continuaria a oeste tangenciando a área central, invertendo a prioridade de investimentos da cidade de uma zona populosa e já contando com infraestrutura para transporte coletivo de massa sobre trilhos para a opção rodoviária e individual numa região que já era privilegiada nos investimentos urbanos e contava com população inferior à da zona leste da cidade.

A idéia inicial era aproveitar a larga calha da Amaral Gurgel e executar o lado oeste em nível, diferente do executado no lado leste: “(...) modificações no traçado foram estudadas ainda em 1965 (...) havendo alternativas de projeto com as pistas elevadas ou rebaixadas” (Zmitrowicz y Borghetti, 2009: 82). O jornal *O Estado de São Paulo*, de 01/12/1970, informa que o engenheiro do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Luiz Carlos Gomes Cardim Sangirardi havia apresentado uma proposta de executar uma via elevada sobre a Avenida São João até a Praça Marechal Deodoro, mas o Prefeito Faria Lima recusou a proposta porque “(...) conhecia as vias elevadas de outras grandes cidades e recusou-se a cometer o mesmo erro em São Paulo.” E ainda que Faria Lima “(...) preferia a solução do metrô para melhorar o tráfego urbano (...)”, mas “(...) em todo caso, mandou um projeto à Câmara, reservando a área necessária para a execução da obra, se outro prefeito se interessasse por ela”.⁴ Essa “predileção” citada pelo jornal não é sem fundamento, como veremos à seguir.

Minhocão x Metrô

Em 1967, Faria Lima instituiu o Grupo Executivo de Planejamento (GEP), de caráter transitório e ligado diretamente a seu gabinete, desvinculado do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, com o objetivo de centralizar os estudos e planejamento da cidade, em consonância com a nova política federal da ditadura,

.....
4 Elevado, o triste futuro da avenida. O Estado de São Paulo, 01 dez. 1970, p.23. As informações prestadas pelo jornal nesta matéria estão sob verificação em investigação em nível de doutorado em andamento por esta autora.

que entendeu a adoção de planejamento urbano integrado como paradigma para a proposição urbanística. No período imediatamente posterior ao golpe de 1964, o Governo Federal criou órgãos e instituições para organizar o financiamento de planos de desenvolvimento para os municípios e regiões de maneira centralizada (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – Serfhau, Banco Nacional de Habitação – BNH), privilegiando o setor privado para a contratação na elaboração de planos. (Feldman, 2005: 206-211).

Segundo Villaça, os administradores municipais e políticos relutavam sobre a idéia de criação de planos diretores. Faria Lima, por exemplo, priorizou os “estudos de viabilidade” do metrô, porque nunca esteve convencido da necessidade de um plano diretor. (Villaça, 2004: 215). Por essa razão, em 1966 optou-se pela criação do Grupo Executivo Metropolitano (GEM) para estudar a malha do metrô. A Companhia do Metropolitano foi criada em 1966, para contratar e coordenar estudos, projetos e obras para viabilizar o metrô e promover a operação do transporte. Para isso, foi contratado o Consórcio HMD (Hochtief, Montreal e Deconsult), que em 1968 apresentou um pré-projeto da rede básica para o metrô paulistano, prevendo 66 km de linha e 68 estações até 1990.

Esse estudo foi incorporado ao Plano Urbanístico Básico da cidade (PUB), cuja contratação ocorreu no ano de 1968 com recursos da U.S.Aid, no âmbito do Programa “Aliança para o Progresso”, em que milhares de dólares foram disponibilizados para elaborar projetos em diversas áreas. O consórcio vencedor para a elaboração do PUB era composto por duas empresas brasileiras – Asplan e Montreal, esta também partícipe do projeto do metrô – e duas americanas – Leo A. Daly Company e Wilbur Smith and Associates, com a participação de mais duas empresas americanas Real Estate Research Co. e Hazen & Swyer (Feldman, 2012: 234).⁵ O plano é considerado bastante avançado por incorporar informações e diagnósticos de levantamentos anteriores, priorizando o transporte público, ainda que previsse a construção de mais de 800km de vias expressas pela cidade.

Aqui é importante destacar duas questões relevantes: a primeira é o fortalecimento de grandes empresas brasileiras que se beneficiaram com as políticas estatais de desoneração de impostos, investimento em infraestrutura apoiando a expansão do capital concentrado e o grande aporte de recursos federais na região Sudeste – onde se localiza São Paulo; a segunda é a abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro, inserindo o país no capitalismo internacional (Schimdt, 1983). Esses aspectos são determinantes na política de planejamento das cidades brasileiras, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, que receberam os maiores volumes de investimento do governo central, como espécie de vitrine dos sucessos e grandiloquência das realizações da Ditadura.

.....
5 A partir de 1967, com a regulamentação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) e a criação no BNH do Fundo de Financiamento de Planos de Desenvolvimento Local Integrado, abriu-se um nicho de mercado rentável para as empresas de consultoria privada elaborarem planos para municípios e regiões. Até 1975, 75,9% dos planos de desenvolvimento foram elaborados por empresas privadas, 21,8% por entidades públicas e universitárias e 13,8% pelas próprias prefeituras. O planejamento virou um grande negócio para os empreiteiros (Feldman, 2005: 217-221; 228-232).

O metrô, por si mesmo constituiu uma importante obra propaganda do regime. As obras foram iniciadas em 1968, com o início da construção da Linha Norte-Sul, e a previsão da execução da linha Leste-Oeste prevista para 1971. Por esta razão, Faria Lima se opôs à construção de uma via elevada na Avenida São João, pois o projeto do eixo Leste-Oeste do Metrô faria este mesmo trajeto, utilizando o subterrâneo,⁶ de modo que a profundidade das pilastras de sustentação do elevado prejudicaria o traçado (Foto 4 - Ilustração apontando a sobreposição do traçado do metrô e do elevado. Fonte: “Metrô vs. Elevado: Quem perde?” - Data da última consulta: dez. de 2016). Como solução para a ligação entre o trecho leste e oeste da cidade havia um projeto que propunha “(...) pistas rebaixadas, mais adequadas do ponto de vista ambiental, embora mais complexo e dispendioso, [que] estava sendo elaborado por um consórcio em 1969, mas a idéia não foi levada adiante pela impossibilidade de as obras serem construídas dentro da gestão administrativa vigente” (Zmitrowicz y Borghetti, 2009: 82). A “administração vigente” a que se referem os autores é a gestão do prefeito Paulo Maluf, que tomou posse em 08/04/1969.⁷

Dois dias antes da posse de Maluf, Faria Lima comentou na inauguração de obra: “Eu me despeço do povo de São Paulo, certo de que numa nova eleição obterá um número de votos muito maior do que em 1965, quando fui eleito Prefeito”.⁸ Seu nome havia sido indicado em lista com outros cinco nomes pelo Governador Abreu Sodré, mas não foi acolhido pelo Presidente. Essa é uma questão importante nesse momento, porque as eleições para São Paulo e outras capitais consideradas estratégicas foram alteradas para o modelo indireto, tirando da população o direito de escolha de seu administrador municipal, a exemplo do que já ocorria nos âmbitos federal e estadual. Segundo Schmidt, o regime burocrático-autoritário, centralizador de poder e de recursos, com participação pública limitada e predomínio de orientações tecnocráticas despolitizam os assuntos públicos (Schmidt, 1983: 44).

Em 07 de abril, Faria Lima recebeu da Asplan exemplares do PUB,⁹ deixando para o sucessor aquilo “(...) que considera seu legado para a cidade do futuro”,¹⁰

.....
6 De acordo com o jornal constatou-se que “(...) os mapas avulsos, detalhados, referentes ao trajeto da linha comprovam sua passagem por todo o trecho da Avenida São João”. “Metrô x Elevado: Quem perde?” Coluna: A cidade e o homem, em *Folha de São Paulo*, 26 out.1969, p.16

7 De acordo com Skidmore, a eleição de Faria Lima em março de 1965, apoiado por Jânio Quadros (cujos direitos políticos haviam sido cassados com o golpe), colocou em alerta os militares da “linha dura”, com receio de que as eleições para 11 governadores em outubro de 1965 resultassem em derrota para o governo (Skidmore, 1988: 93). A Constituição de 1967 determinou que os Prefeitos das Capitais seriam nomeados pelo Governador com a aprovação da Assembleia Legislativa (Artigo 16, §1º, alínea a). Entretanto, com a edição do AI-5 (13/12/1968), foi facultado ao Presidente decretar o recesso do Poder Legislativo nas três esferas da federação. Em 07/02/1969, foi publicado o Ato Complementar 47 que determinou o recesso da Assembleia Legislativa de São Paulo, e outros estados. A indicação de Paulo Maluf à Prefeitura não passou por aprovação da Assembleia Estadual que só voltou a funcionar em 01/06/1970.

8 “Sodré empossa Maluf amanhã na Prefeitura”. *Folha de São Paulo*. 1º Caderno. 07 abr. 1969, p. 4.

9 “Faria Lima inaugura praça com instalações para aeromodelismo”. *Folha de São Paulo*. 1º Caderno. 07 abr. 1969, p. 4.

10 “Maluf: a palavra de ordem é trabalhar”. *Folha de São Paulo*. Capa. 09 abr. 1969

bem como “(...) a responsabilidade da publicação de editais de concorrência para a execução dos trechos 2, 3, 4 e 5 do metrô, que considera ‘inadiável e indispensável’”¹¹. Embora a imprensa e o Próprio Maluf confirmem elogios a administração Faria Lima, o fato é que Benjamim Ribeiro, arquiteto responsável pela coordenação do GEP, afirmou que Maluf determinou a incineração dos volumes do PUB, pois o via como propaganda política de Faria Lima (Feldman, 2012: 236). A rivalidade com Faria Lima ficou evidenciada em pesquisas de opinião encomendadas pela Prefeitura entre 1970 e 1971, em que uma das perguntas era “O senhor acha que o Prefeito Maluf realizou até agora uma administração melhor, igual ou pior que a do Prefeito Faria Lima?” (Tabela 1). O resultado total foi:

	Abril 1970	Fevereiro 1971
Melhor	2%	5%
Igual	34%	44%
Pior	57%	43%
Não sabe	7%	8%

Tabela 1 - Comparação entre a gestão Maluf e Faria Lima. Fonte: IBOPE. Pesquisa de Opinião Pública. Pesquisas Especiais, 1971, Volume 5 – Políticas, Pesquisa 3, pergunta 6, p.11. Acervo Arquivo Edgard Leuenroth

Embora haja melhora nos índices de Maluf, é evidente que a população reconhecia pouco ou nenhum avanço em relação à gestão anterior, talvez corroborando com a frase de Faria Lima quando deixou a Prefeitura. Não à toa, a imprensa e a propaganda de sua gestão foram importantes veículos de legitimação da figura do Prefeito, como veremos adiante.

Ainda está sob investigação as circunstâncias da decisão de executar a construção do elevado, anunciada em setembro de 1969. Acredita-se que o projeto da via elevada proposto por Sangirardi em 1968 tenha sido retomado por Maluf pela rapidez da execução, sendo passível de concluí-la ainda em sua gestão. Segundo o jornal *O Estado de São Paulo*, “Um prefeito que só tem 22 meses de mandato (...) e muita vaidade (...) precisava de uma obra grandiosa (...) e de rápida execução, para se perpetuar como prefeito da cidade” e assim, “(...) mais que depressa, ele foi buscar o projeto de Sangirardi –a essa altura já promovido a diretor do Grupo Executivo de Planejamento e seu principal assessor– e resolveu ampliá-lo até o Largo Padre Péricles.”¹²

Com o anúncio da obra, os receios pelo futuro do metrô começaram a circular na imprensa. No fim de outubro de 1969, o jornal *Folha de São Paulo* publicou matéria intitulada “Metrô x Elevado: quem perde?”. Nela, faz um levantamento acerca dos trajetos do elevado e do metrô e constata que eles se sobrepõem. O tom des-

.....

11 “Na despedida, Faria Lima contrata NCr\$44 milhões em obras do Metrô”. *Folha de São Paulo*. 1º Caderno. 09 abr. 1969, p. 8.

12 “Elevado, o triste futuro da avenida”. *O Estado de São Paulo*, 01 dez. 1970, p. 23.

toa daquele adotado meses antes, em setembro quando a obra foi anunciada com alguma euforia com a promessa de ligação Leste-Oeste em 10 minutos.¹³ O jornal *O Estado de São Paulo* adotou uma postura mais crítica: publicou um suplemento especial em 29/03/1969 sobre o PUB e a necessidade de priorização do transporte público sobre o individual. Com o desenrolar das obras, em dezembro de 1970 o jornal publicou forte crítica ao prefeito e à obra, afirmando que com a sua construção morriam a Avenida São João e o metrô.¹⁴

O projeto do elevador foi elaborado pela empresa Hidroservice considerada a maior projetista de engenharia do período da ditadura,¹⁵ e executada por um consórcio formado pela Companhia Brasileira Construtora de Estradas,¹⁶ Construtora Rebello¹⁷ e Engefusa, esta última responsável pela parte de fundação e pré-fabricação da estrutura.¹⁸ Esse dado é relevante para compreender a inserção da obra municipal –no caso o Minhocão na cidade de São Paulo– dentro de uma política econômica federal, encabeçada pelo padrinho político de Maluf, o Ministro da Economia Antônio Delfim Netto. Como já citado, a construção civil foi uma das grandes beneficiárias de reformas e políticas de investimentos estatais durante a Ditadura. Campos demonstra em sua tese o crescimento exponencial de km² de rodovias construídas por empreiteiras em consonância com os lucros aferidos no período entre 1966 e 1976, quando os investimentos estatais incrementaram o caixa destas empresas de maneira agressiva. Assim, São Paulo, a principal cidade do

.....
13 “Ligação Móoca-Perdizes em 10 minutos”. *Folha de São Paulo*. Capa. 25 de setembro de 1969.

14 “Elevador, o triste futuro da avenida”. *O Estado de São Paulo*, 01 dez. 1970, p. 23.

15 A Hidroservice era uma empresa de engenharia de propriedade de Henry Maksoud, responsável pela construção do Porto de São Sebastião. Seu dono foi presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo entre 1967 e 1968, e proprietário da Revista Visão a partir de 1974, a segunda maior publicação sobre construção civil em circulação no país. Assim, é possível identificar o potencial de influência da empresa perante os veículos de imprensa e sobre a categoria da construção civil e, por conseguinte, do próprio governo. Por essa razão, foi importante articulador do setor para que as obras de engenharia da ditadura fossem entregues à iniciativa privada nacional, em substituição ao emprego da estrangeira. De acordo com Campos, em 1969 “(...) um decreto impôs a reserva de mercado [para empresas brasileiras] para a construção e a montagem industrial, além de estudos e consultorias para obras públicas (...)”. (Campos, 2012: 296).

16 A Companhia Brasileira Construtora de Estradas (CCBE) foi fundada em 1948 e presidida por Cincinato Cajado Braga. O nome é bastante conhecido da política paulista uma vez que a família está fortemente relacionada à política do estado desde a República Velha por meio do Partido Republicano Paulista (PRP). A empresa participou da execução do plano rodoviário estadual de Juscelino Kubitschek, quando este era governador do Estado de Minas Gerais e também da construção da ponte Rio-Niterói em 1972. (Campos, 2012: 69).

17 A Construtora Rebello, de Marcos Paulo Rebello, fundada em 1944 em Minas Gerais, foi uma das empresas responsáveis pela construção do complexo da Pampulha, de parte da capital federal em Brasília (como o Eixo Monumental, Palácio do Planalto e da Alvorada), as rodovias Régis Bitencourt, Dutra e Castello Branco. Campos destaca o crescimento das empresas ligadas ao Plano de Metas da década de 1950 elaborado por Juscelino Kubitschek e seu fortalecimento durante a ditadura. (Campos, 2012: 78)

18 A Engefusa – Engenharia de Fundações S.A., foi fundada em 1951 pelos engenheiros Carlos da Silva e Raymundo José D’Araújo Costa, responsável por mais de 1.000 obras em diversos estados, destacando-se no setor de construção de conjuntos residenciais no Rio de Janeiro, como o Conjunto Padre Anchieta e Parque Novo Irajá, que se destacaram pelo encurtamento das construções de prédios de 4 andares de 48 meses para 12, em decorrência do uso de lajes pré-moldadas em concreto pretendido, construídos junto ao canteiro de obras por uma usina móvel. (Vasconcelos, 2002: 47-49).

país servia como verdadeiro campo de experimentações políticas, técnicas e financeiras da ditadura.

A obra do Minhocão era superlativa: foi projetada para percorrer 3,4 km de extensão, 90 vãos entre 33 e 40m e fundação de até 46m, a um custo de CR\$ 37 milhões (aprox. R\$370 milhões de reais em valores atualizados em out 2016), concluída em 14 meses ([Foto 5](#) - Rua Amaral Gurgel no início das obras, em 1969. Foto: Acervo Folhapress. - [Foto 6](#) - Rua Amaral Gurgel com obras em andamento, em 1970. Foto: Acervo Revista Veja. - [Foto 7](#) - Avenida São João, no início das obras, em 1969. Foto: Acervo Folhapress. - [Foto 8](#) - Avenida São João, com obras avançadas em 1970 - Data da última consulta: dez. de 2016). A obra estava prevista para ser finalizada em dezembro de 1970, mas a entrega ficou para a véspera do aniversário da cidade, 24 de janeiro de 1971, um domingo. O convite (Foto 1) circulou nos principais jornais da cidade, convocando a população a comparecer para a cerimônia de inauguração da obra, que contou com a presença do alto escalão do governo federal como Alfredo Buzaid, Ministro da Justiça; Delfim Netto, Ministro da Economia, o governador Abreu Sodré e o recém-escolhido governador Laudo Natel; além de autoridades militares e civis, Yolanda Costa e Silva (viúva do Ditador Artur da Costa e Silva).

A presença dessas figuras é altamente ideológica, já que o país vivia o chamado “Milagre Econômico”, sob a gestão do Ministro Delfim Netto e expressa a apropriação da modernização da cidade pelo poder militar, com obras que operavam como uma vitrine do sucesso da articulação entre os governos federal e municipal, conferindo legitimidade política aos gestores não eleitos.

As grandes obras públicas foram materialização do momento econômico do país, que chegou a crescer 9,8% a.a. em 1968; em contrapartida, a população convivia com arrocho salarial no setor público e no privado e com carestia. Uma série de medidas fiscais possibilitou que o município de São Paulo –já muito fortalecido por sua dinâmica econômica interna– obtivesse uma fatia maior de recursos federais e também financiamentos internos e externos de obras de infraestrutura. A política federal com Costa e Silva privilegiou a visão do “Brasil Grande” –cuja vocação e destino eram a “liderança continental de uma revolução e a afirmação mundial de uma grande potência” (Macarini, 2005: 57)–, que deveria ser construído por meio de incentivo não só à indústria, como foi no período entre 1964-1967, mas aos outros setores estratégicos: agrícola, infraestrutura econômica (portos, rodovias, setor energético) e social (habitação, educação e saneamento), caracterizando o período que ficou conhecido como de “nacionalismo autoritário” (Macarini, 2005: 53-92; Oliveira, 1991).

Nesse sentido, a obra do Minhocão operou como materialização desse discurso: reunia o capital nacional acumulado nas empreiteiras, com recurso fiscal centralizado no governo federal e aplicado em São Paulo a partir da Reforma Tributária de 1966, tocada pelo Prefeito indicado pelo Presidente, difundida como “a maior [obra] do gênero em toda a América do Sul”, a grandeza do Brasil e sua liderança regional.

A publicidade foi uma forte aliada do discurso do progresso e da grandeza. A Hidroservice pagou anúncio de duas meias páginas no primeiro caderno de *O Estado de São Paulo* ([Foto 9a](#) y [Foto 9b](#) - Anúncio de duas meias páginas n’ *O Estado*

de São Paulo de 24.01.1971 - Data da última consulta: dez. de 2016), crítico público da obra, com um longo texto técnico sobre a atuação da “maior empresa de engenharia de projetos da América Latina” naquela que “alinha-se entre as obras mais importantes do gênero em todo o mundo”, especialmente por sua inovação “em relação às soluções estruturais inéditas que soube encontrar”, destacando ainda seu envolvimento em “diversas obras de vulto”, listando 245 obras, entre elas o Plano de Desenvolvimento Integrado de seis municípios e duas regiões (Feldman, 2012: 228-233; Villaça, 2004: 222-231). É notório o discurso da grandeza da obra e da eficiência da técnica.

Maluf aproveitou a inauguração para enaltecer não só Costa e Silva, morto em 17/12/1969, mas o golpe civil-militar e seus feitos na condução do governo para o bem da cidade de São Paulo, ilustrando em detalhes cada um dos feitos, inclusive a Reforma Tributária, que não é tema de conhecimento amplo.

E São Paulo recebeu pela mão redentora da Revolução –tenho assistido e torno a afirmar que o maior Prefeito que a cidade já teve foi a Revolução de 64– através de um sistema tributário sensível às reais necessidades do país. Os meios para melhor atender às aspirações de seus moradores, vale dizer, os meios para melhor utilizar sua riqueza e seu dinamismo em benefício da nação.

Se à revolução devemos a reforma tributária, que tem permitido a remodelação da grande metrópole e a devolução ao laborioso paulistano, dos tributos pagos, em forma de obras e serviços, a Revolução deve, e muito, ao Presidente Costa e Silva. Homenageando a Revolução e a uma de suas figuras exponenciais, considere de estrita justiça que à importante obra pública ora inaugurada fosse dado o nome de Presidente Costa e Silva, pela extraordinária atuação de seu profícuo Governo.¹⁹

Havia vozes dissonantes, embora de permeabilidade limitada. O jornal *O Estado de São Paulo*, em tom crítico e coerente com sua postura contrária à obra desde o princípio, minimizou a festa de inauguração com a matéria intitulada “‘Minhocão’ aberto, sem repercussão esperada” –sem qualquer menção na capa da edição–, informando que o comparecimento do público foi abaixo das expectativas, e terminou “melancolicamente as 11 horas”. Ao final do artigo, o jornal apresenta a maior crítica:

Após passar o período inicial de euforia provocada pela novidade –pessoas visitando o minhocão nos fins-de-semana, e passageiros divertindo-se com a intimidade das pessoas que moram nos apartamentos devassados– os técnicos e urbanistas poderão analisar friamente o que foi feito de uma das maiores avenidas de São Paulo, a São João. Será considerado, obviamente, o problema do metrô que teve a linha Casa Verde-Vila Maria seriamente afetada pela obra de Salim Maluf.²⁰

.....
19 “Entregue à cidade a Via Presidente Costa e Silva”. *Folha de São Paulo*, 25 jan. 1971, p. 7

20 “‘Minhocão’ aberto sem a repercussão esperada”. *O Estado de São Paulo*, 26 jan. 1971, p. 16

Maluf era conhecedor das críticas ao seu governo e aproveitou a oportunidade de minimizá-las em seu discurso no ato:

(...) a raros habitantes de uma cidade terá sido dado o esforço de vê-la transformar-se rapidamente como se transforma São Paulo aos olhos de quem nela vive. Existem os românticos, que lamentam a mudança da paisagem que evoca um amor juvenil ou traz uma recordação familiar, existem os inconformados incapazes de abandonar o casulo do próprio interesse para enxergar a existência de uma comunidade que se expande (...) mas existe a maioria esmagadora dos brasileiros que reconhece a necessidade de São Paulo transformar-se para (...) continuar desempenhando o papel que lhe incumbiu o destino (...).²¹

O prefeito desqualifica seus críticos, adjetivando-os como “românticos” ou “inconformados”, resumindo ambos como individualistas incapazes de amar o país e o desenvolvimento visando o futuro grande da cidade de São Paulo e de seus habitantes. O discurso do Prefeito estava alinhado ideologicamente aos ideais e ao esforço de propaganda desempenhado pelo Governo Federal. De acordo com a análise de Oliveira,

A propaganda militar propunha a concordância, o amor. Portanto, aqueles que se colocassem contra o governo não queriam a harmonia. Queriam, sob esse ponto de vista, a discórdia, a tristeza. (...) A partir do conagraçamento povo-governo é que o “inimigo” era identificado, não como alguém com outra proposta para o país, mas como um elemento “desajustado, que não percebia os benefícios de se viver nesse corpo social de êxito”. (Oliveira, 2014: 24)

Havia a necessidade de criar vínculos entre as realizações da ditadura e o povo, como forma de legitimar o poder e as decisões autoritárias, como cassações e eleições por nomeação.²² Nesse sentido, criaram-se bordões para fixar no imaginário popular esse alinhamento, como “Ninguém segura esse país”, e no limite, “Ame-o ou deixe-o” (Fico, 1997: 100-103).²³

A construção da imagem do Prefeito como um homem ousado foi construída por ele mesmo e também pela imprensa. A revista *Veja* –alinhada ao regime–, na edição 125 dedicou 15 páginas a compreender o fenômeno de metropolização de

21 “Entregue à cidade a Via Presidente Costa e Silva”. *Folha de São Paulo*, 25 jan. 1971, p. 7

22 O texto do Ato Complementar N° 47 informa que “(...) em determinados estados, suas Assembleias Legislativas têm contrariado, até de modo ostensivo aqueles princípios [éticos em que se baseou a Revolução Democrática Brasileira (sic)] e a própria Constituição (...)”. Em seu discurso de posse, Maluf afirmou que “No sistema do Direito Público então vigente competia ao povo, em eleição direta, a escolha do prefeito da Capital. Demonstrou, no entanto, a experiência que, *não havendo harmonia entre o governo do Estado e a Prefeitura da Capital, um e outro sofriram danos, cuja repercussão, atingia direta e imediatamente a população*. A Revolução pôs fim a este estado de coisas.” Maluf: ‘O prefeito é nomeado pelo Governador. Esta solução é uma das conquistas da Revolução’ (sic)”. *Folha de São Paulo*, 09 abr. 1969, 1° Caderno, p.3.

23 De acordo com estudos de Carlos Fico, o slogan “Ame-o ou deixe-o” foi criado pela Operação Bandeirante, organização clandestina militar de perseguição e tortura aos opositores do regime criada em 1969 com o apoio do Governador Abreu Sodré e o financiamento privado de empresários, que depois foi institucionalizada como DOI-CODI na estrutura do Exército. Para o autor, a frase fora infeliz em decorrência de sua carga de radicalização e intimidação, e porque destoava dos demais instrumentos de propaganda criados pela Assessoria Especial de Relações Públicas do governo federal (Fico, 1997: 100-103).

São Paulo, caracterizou a gestão de Maluf como “(...) a mais profícua em obras na história da cidade (...)” e o Minhocão como o “(...) discutido elevado Costa e Silva, que faz parte de um amplo esquema de vias ligando o oeste ao leste da cidade sem cruzamentos (...)”.²⁴ Na mesma edição, o colocou como um dos três “prefeitos da transformação”, ao lado de Prestes Maia e Faria Lima. O jornal *Folha de São Paulo*, em seu editorial afirma que Maluf encarou o desafio de suceder Faria Lima, que “as comparações seriam inevitáveis e a muitos parecia difícil, senão impossível, que um administrador jovem como ele resistisse ao confronto”; no entanto, conclui que “(...) o atual prefeito cumpriu com galhardia sua missão. São Paulo continuou sendo revolucionada (...) e ousados empreendimentos tiveram início e foram concluídos”.²⁵ Já *O Estado de São Paulo* destoa dos dois veículos de imprensa e trata com fina ironia os intuítos do Prefeito, afirmando que a cerimônia de entrega da obra atende ao “(...) secreto intuito de se fazer passar pelo maior prefeito de São Paulo, de todos os tempos, presentes, passados e futuros.”²⁶ A entrega do Minhocão é um dos últimos atos de Maluf como Prefeito, que deixou o cargo juntamente com o governador Abreu Sodré, em março de 1971. Portanto, a opinião da imprensa na obra mais vultosa de Maluf foi determinante para construir o imaginário acerca da figura do administrador realizador. A pesquisa Ibope anteriormente citada demonstra um avanço de sua popularidade, que se consolidou com a continuidade de sua carreira política até os dias presentes, atuando como Deputado Federal por São Paulo, a despeito de todas as denúncias e condenações por corrupção.

Conclusão

As polêmicas envolvidas nas discussões atuais sobre o Minhocão expõem muito mais que desafios contemporâneos. Expressam que a obra mais importante da gestão de Paulo Maluf é fruto de uma ruptura com os processos de planejamento anteriores, que legou mais problemas que soluções para a cidade.

Os problemas passam pela proximidade excessiva da obra com a janela dos prédios da Avenida São João, onde a distância chega a ser de apenas 5 metros, dificultando a dispersão de poluentes e de iluminação natural nos baixos do elevado, o ruído excessivo tanto na parte baixa quanto em sua parte alta, desvalorizando os imóveis do entorno. Logo nos primeiros anos de funcionamento, comerciantes obtiveram vitórias em ações na Justiça que reivindicavam indenização por prejuízos causados.²⁷

Do ponto de vista da circulação há problemas de diversas ordens. O primeiro é justamente o que se pretendia sanar: a diminuição do tempo para percorrer o trajeto entre Leste e Oeste. Logo nos primeiros dias de funcionamento, os congestio-

.....
24 “O crescimento desvairado: a explosão urbana de 10 anos de São Paulo”. *Revista Veja*, Ed. 125 27 jan. 1971, p. 41.

25 “A capital e seus desafios”. *Folha de São Paulo*, 24 jan. 1971, 1º Caderno, p. 4.

26 “O Minhocão”. *O Estado de São Paulo*, 23 jan. 1971, p. 10.

27 “Justiça condena o Minhocão”. *O Estado de São Paulo*, 01 mar. 1973, p. 30.

namentos contrariaram a previsão de completar o percurso em 10 minutos. Outro aspecto é a priorização do transporte privado em detrimento do transporte público, impedido de trafegar pelo Minhocão. Por fim, o projeto da linha Leste-Oeste do metrô precisou ser replanejado, atrasando a obra que a partir de 1971 passou a ser vista como uma grande propaganda do regime – inclusive com sua inclusão na exposição internacional de transportes “Transpo’72” em Washington. Previstas para ser realizada em sistema de trincheiras, a obra foi executada por meio de escavações subterrâneas, elevando preço e prazo: prevista para ser entregue em 1974, só ocorreu em 1979, 1982 e 1988. Por essa razão, alguns urbanistas passaram a defender publicamente a demolição do elevado (Markum; Lemella, 1976: 46).

Observa-se algumas rupturas: a de Maluf com o planejamento urbano anterior, que já havia desconsiderado o modelo em elevado por seu prejuízo ambiental, que nas décadas anteriores privilegiou a estética embelezadora da cidade vendo no automóvel a modernidade e a velocidade; Maluf priorizou a técnica e a solução do problema do trânsito. A ruptura com o planejamento que priorizava o metrô naquele traçado –ainda que não contemplasse inicialmente a necessidade de mobilidade, mas a valorização fundiária de novas áreas da cidade. Essa é uma ruptura importante porque a gestão imediatamente posterior a Maluf – o Prefeito José Figueiredo Ferraz –colocou o Metrô como prioridade de sua administração, alinhado à política federal de investimento em planejamento de regiões metropolitanas, iniciada a partir de 1972 e consolidada a partir de 1973 com o estabelecimento de nove regiões metropolitanas no entorno das principais capitais brasileiras, visando corrigir as distorções urbanas – como hiperexpansão do território, problemas de saneamento e serviços essenciais, causadas justamente pela euforia com o milagre econômico (Serra, 1991; Schmidt, 1983).

Por fim, conclui-se que a obra do Minhocão é mais que apenas uma cicatriz na cidade, como é comum ser tratada. A intervenção na paisagem, em geral com aspectos negativos, evidenciam o caráter autocrático de Maluf mesmo para um regime autoritário e legaram uma característica estética à ditadura: a supremacia do concreto. Os discursos lingüísticos e simbólicos discutidos nesse trabalho evidenciam que o Minhocão é uma representação da ditadura e seu poder, tanto no plano da valorização da figura individual de Paulo Maluf quanto das realizações no plano federal. Tratou-se de uma associação entre o poder público e o capital privado para viabilizar uma obra grandiosa e de questionável eficiência, que funcionou como uma metáfora do próprio período, caracterizado pelo autoritarismo, a prevalência de soluções técnicas sobre as políticas e pelo uso de superlativos para a construção de um imaginário coletivo de São Paulo como a cidade arquétipo do sucesso da “Revolução” (sic) e suas políticas, rumo ao Brasil Grande.

Bibliografia y Fontes Primarias

Artigas, Rosa; Mello, Joana y Castro, Ana Claudia (orgs.) (2008). *Caminhos do Elevado: Memória e Projetos*. São Paulo: Imprensa Oficial.

Calliari, Mauro (2012). “Praça Roosevelt – Um espaço emblemático da relação de São Paulo com seus espaços públicos”. En: *Vitruvius. Minha Cidade*, São Paulo, ano

- 13, nro. 147.03, out. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/13.147/4504> Data da última consulta: março de 2017
- Campos, Candido Malta y Somekh, Nádia (2008a). “Plano de Avenidas: o diagrama que se impôs”. Em: Somekh, Nádia y Campos, Candido Malta (orgs.); *A cidade que não pode parar. Planos urbanísticos de São Paulo no século XX*. São Paulo: Editora Mackenzie; Mackpesquisa. Pp.55-72.
- Campos, Candido Malta y Somekh, Nádia (2008b). “Relatório Moses: a emergência da metrópole”. Em: Somekh, Nádia y Campos, Candido Malta (orgs.); *A cidade que não pode parar. Planos urbanísticos de São Paulo no século XX*. São Paulo: Editora Mackenzie; Mackpesquisa. Pp.83-94
- Campos, Pedro Henrique Pedreira (2012). *A ditadura dos empreiteiros: as empresas nacionais de construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro (1964-1985)*. Tese (doutorado em História Social), Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense: Niteroi.
- D’Araujo, Maria Celina (s/f). O AI-5. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5> Data da última consulta: 19 jul. 2017.
- Feldman, Sarah (2005). *Planejamento e zoneamento em São Paulo: 1947-1972*. São Paulo: Edusp/Fapesp.
- Fico, Carlos (1997). *Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário*. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas.
- Folha de São Paulo* (1969a). “Faria Lima inaugura praça com instalações para aeromodelismo”, 1º Caderno. 07, abr., p.4.
- Folha de São Paulo* (1969b). “Ligação Móoca-Perdizes em 10 minutos”. Capa. 25 set.
- Folha de São Paulo* (1969c). “Maluf: a palavra de ordem é trabalhar”. Capa. 09 abr.
- Folha de São Paulo* (1969d). “Maluf: “O prefeito é nomeado pelo Governador. Esta solução é uma das conquistas da Revolução” (sic), 09 abr., 1º Caderno, p. 3.
- Folha de São Paulo* (1969e). “Metrô x Elevado: Quem perde? Coluna: A cidade e o homem”, 26 out., p.16.
- Folha de São Paulo* (1969f). “Na despedida, Faria Lima contrata NCr\$44 milhões em obras do Metrô”. 1º Caderno. 09 abr., p.8.
- Folha de São Paulo* (1969g). “Sodré empossa Maluf amanhã na Prefeitura”. 1º Caderno. 07 abr. p.4.
- Folha de São Paulo* (1971a). “A capital e seus desafios”. 24 jan., 1º Caderno, p.4.
- Folha de São Paulo* (1971B). “Entregue à cidade a Via Presidente Costa e Silva”, 25 jan., p. 7
- Herce, Manuel (2015). *O negócio da cidade: evolução e perspectivas da cidade contemporânea*. Rio de Janeiro: Mauad X; Inverde.
- Macarini, José Pedro (2005). “A política econômica do Governo Médici: 1970-1973”. In: *Nova Economia. Belo Horizonte*, vol.3, nro.15, set.-dez. Disponível em <https://dx.doi.org/10.1590/S0103-63512005000300003> Data da última consulta: março 2017.
- Markum, Dilea y Lemella, Neuza (1976). “Urbanistas defendem o fim do minhocão”. In: *O Estado de São Paulo*, 07 nov., p. 46.
- O Estado de São Paulo* (1970) “Elevado, o triste futuro da avenida”, 01 dez., p.23.

- O Estado de São Paulo* (1971). “Minhocão’ aberto sem a repercussão esperada”, 26 jan., p.16.
- O Estado de São Paulo* (1973). “Justiça condena o Minhocão”, 01 mar., p.30.
- O estado de São Paulo* (2011), “Minhocão: 3,4km de extensão e 40 anos de polémicas”. 25 jan 2011. Disponível em <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,minhocao-3-4-km-de-extensao-e-40-anos-de-polemicas-imp-,670780> Data da última consulta: outubro 2016.
- O Estado de São Paulo* (1971). “O Minhocão”, 23 jan., p.10
- Oliveira, Fabrício Augusto de (1991). *A reforma tributária de 1966 e a acumulação de capital no Brasil* (2ª Edição revista e ampliada). Belo Horizonte: Oficina de Livros.
- Oliveira, Raphael (2014). “Otimismo em tempos de repressão. A publicidade inspirada na propaganda do governo Médici”. Dissertação, Mestrado em História Social, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense: Niteroi.
- Revista Veja* (1971). “O crescimento desvairado: a explosão urbana de 10 anos de São Paulo”. Ed. 125 27 jan., p.41
- São Paulo (Prefeitura). Decreto nº 8.574 de 19 de dezembro de 1969. Dispõe sobre a denominação de Via Elevada, em construção, nos 7º, 11º, 19º e 35º subdistritos – Consolação, Santa Cecília, Perdizes e barra Funda, respectivamente e dá outras providências
- São Paulo (Prefeitura). Lei Municipal nº 6.061 de 04 de outubro de 1962. Aprova o plano de abertura de uma via expressa, em direção Leste-Oeste da Cidade, ligando a avenida Alcântara Machado à Rua Amaral Gurgel, e ligações auxiliares, revoga em todos os seus termos as Leis ns. 5.419/57, 5.547/58, parcialmente a Lei 4.704/55 e dá outras providências.
- Schmidt, Benício Viero (1983). *O Estado e a política urbana no Brasil*. Porto Alegre: EDUFRGS/LP&M.
- Serra, Geraldo (1991). *Urbanização e centralismo autoritário*. São Paulo: Nobel/Edusp.
- Skidmore, Thomas (1988). *Brasil: de Castello a Tancredo (1964-1985)* (Tradução Mario Salviano Silva. 5ª Reimpressão). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Vasconcelos, Augusto Carlos (2002). *O concreto no Brasil. Pré-Fabricação, Monumentos, Fundações. Vol. III*. São Paulo: Studio Nobel.
- Villaça, Flávio (2004). “Uma contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil”. Em: Deak, Csaba y Schiffer, Sueli Ramos (orgs.). *O processo de urbanização no Brasil*. São Paulo: Edusp. Pp. 196-245
- Zmitrowicz, Witold y Borghetti, Geraldo (2009). *Avenidas 1950-2000: 50 anos de planejamento da cidade de São Paulo*. São Paulo: Edusp.

Terror y geografía: examinar múltiples espacialidades en un mundo “aterrorizado” *

ULRICH OSLENDER**

Resumen

Este artículo ofrece un recorrido historiográfico acerca de los conceptos de terror y terrorismo para después mostrar cómo se han pensado estos conceptos desde la geografía. Me refiero aquí a la geografía en dos sentidos: por un lado a la manera cómo desde la disciplina de la geografía nos hemos relacionado a los discursos de la “guerra al terror”; y por otro, cómo podemos pensar el terror geográficamente y más críticamente para evitar la reducción conceptual e intelectual a la que pueden llevar los discursos dominantes sobre la “guerra contra el terror”. Para esto ofrezco un marco conceptual que he llamado “geografías del terror”, el cual se aplica para el caso del terror que viven las comunidades negras en la región del Pacífico colombiano.

Palabras clave: geografía; terror; terrorismo; Pacífico colombiano.

Fecha de recepción: 25-01-2017

Fecha de aceptación: 25-05-2017

Terror and Geography: Examining multiples Spatialities in a Terrorized World

Abstract

In this article, I want to offer, first, a kind of historiographic tour through the concepts of terror and terrorism and then show how these concepts have been thought from geography. Here I understand geography in two senses. On one hand, to the way in which we have related to the speeches of the “war on terror” from the discipline of geography. On the other hand, I aim to illustrate how a broader geographical and critical thinking about terror and would allow us to get out of the conceptual and intellectual reduction of the dominant discourses of the “war on terror” discourses has taken. For this, I offer a conceptual framework that I have called “geographies of terror”, which applies to the case of the terror that the black communities live in the region of the Colombian Pacific.

Keywords: Geography; Terror; Terrorism; Colombian Pacific.

* Partes de este trabajo han aparecido en mi capítulo “Spaces of Terror” en *The Ashgate Research Companion to Critical Geopolitics* (eds.: K. Dodds, M. Kuus y J. Sharp; 2013; Farnham, Ashgate; pp.359-382). Este trabajo ha sido actualizado y modificado significativamente.

Traducción: Carlos Salamanca Villamizar.

** Doctor en Geografía (University of Glasgow), actualmente es Profesor Asociado de Geografía en la Florida International University (Miami, FL, Estados Unidos). Geógrafo político y cultural con intereses regionales en América Latina. Ha publicado más de cuarenta artículos y capítulos de libros en inglés y español, principalmente en relación con la teoría del movimiento social y la geografía política.

Correo electrónico uoslende@fiu.edu

Introducción: un mundo aterrorizado

“Está muerto.” Así era el titular del periódico estadounidense *Miami Herald* del 2 de mayo del 2011. Dos palabras que cubrían media página al lado de una foto del hombre que se había convertido en el rostro del terrorismo global sellaron el final de Osama Bin Laden. Esa noche las imágenes de la televisión mostraban a los estadounidenses en Nueva York y Washington bailando y celebrando en las calles; imágenes no tan distintas de aquellas que se proyectaron en las pantallas de televisión desde las calles de Pakistán, Palestina y otras geografías árabes –reales o imaginadas– frente a las noticias de dos aviones volando al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Ahora todo parecía haber llegado a un círculo completo: al hombre-monstruo detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre se le había hecho su juicio. Solo que, claro, el círculo no se cerró. Mientras el episodio de la caza de Bin Laden llegó a su final, la llamada “guerra al terror” simplemente pasó a su fase siguiente.¹

No hay duda que esta guerra –conducida por Estados Unidos y sus aliados– y sus implicaciones más amplias están reconfigurando de manera significativa nuestros modos de vida, y que lo seguirán haciendo incluso por mucho tiempo. Por una parte, hemos sido testigos de una reconfiguración de la geopolítica que ha dado paso a una nueva fase de neoimperialismo acompañada de procesos globales de desposesión y de restricción de las libertades civiles (Chomsky, 2004; Harvey, 2003). Por otra parte, en nuestra consciencia social colectiva se ha instalado lo que podríamos llamar un “sentido de terror”, tan amenazante y aterrador como impreciso y difícil de cernir.

La historiadora Joanna Bourke (2005) ha comparado el temor contemporáneo al terrorismo con el temor a la peste bubónica en el siglo XIV; en su opinión, el pensamiento irracional da lugar a formas específicas del temor. A su vez, Bourke llama la atención sobre la desproporción de la respuesta oficial a la forma en que se percibe la amenaza al terrorismo, precarizando valores democráticos como la libre circulación y la libertad de expresión. La multiplicación de los sistemas de vigilancia, el fortalecimiento de los servicios de seguridad y el endurecimiento de los controles fronterizos son solo algunas de las infracciones de las libertades civiles que la legislación antiterrorista ha traído consigo. La persecución de los solicitantes de asilo (Hyndman y Mountz, 2007) y la justificación de la tortura para extraer información “vital” (Butler, 2007) tienen consecuencias aún más graves para los derechos humanos.

En medio del estruendo de los debates sobre la “guerra al terror” es demasiado fácil olvidar que el terror y el terrorismo son en realidad términos controvertidos. En una época en la que se usa y abusa la noción de “terrorismo” para justificar todo tipo de políticas bajo el manto de “seguridad nacional” existe el peligro de

.....
 1 Con la expresión “guerra al terror” (*War on Terror* en el inglés original) me refiero a la campaña global iniciada por el gobierno de los Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 – y apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados – con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional. En español se ve también la expresión “guerra contra el terrorismo”. En este artículo uso ambas expresiones sin distinción.

que los discursos geopolíticos dominantes exploten este sentido de terror colectivo para fines políticos y económicos específicos. Este peligro ha sido denunciado, entre otras, por numerosas críticas desde la geografía crítica (Elden, 2009; Graham, 2004; Gregory, 2004; Gregory y Pred, 2007; Harvey, 2003; Hyndman, 2003; Smith, 2003). Sin embargo, en su mayoría estas críticas se han enfocado sobre la lógica imperial detrás de la guerra contra el terrorismo. No han indagado más a fondo en la noción de terror, ni en un replanteamiento radical del concepto mismo de terror.

En este artículo quiero reflexionar primero sobre la conceptualización misma de la noción de terror. ¿Qué queremos decir cuando decimos “terror”? ¿Cómo se produce y manifiesta? ¿Qué produce? ¿Para qué? Segundo, quiero pensar este concepto desde la geografía, y me refiero a la misma en dos sentidos: por un lado, cómo desde la disciplina de la geografía nos hemos relacionado con los discursos de la “guerra al terror”; y por otro, cómo podemos pensar el terror geográficamente, o sea, cuáles son las espacialidades –o, como sugiero más tarde, las geografías concretas del terror– y cómo podemos conceptualizarlas más críticamente para sacarnos de la reducción conceptual e intelectual a la que ha llevado el lavado de cerebro de los discursos dominantes de la “guerra al terror”. Por ejemplo, ¿cómo se vive con el terror en lugares particulares? ¿Cuáles son las expresiones y manifestaciones concretas del terror en los paisajes? ¿Cómo transforma el terror a lugares y espacios? Pero también, ¿cómo se resiste y lucha contra el terror desde lugares distintos? Estas son algunas de las preguntas más urgentes a examinar si queremos entender los múltiples terrorismos que engullen nuestro mundo y comenzar a transformar nuestra era del terror en una era de esperanza, solidaridad y convivencia pacífica.

Antes de examinar las múltiples imbricaciones geográficas con el terror y el terrorismo, resulta útil reflexionar sobre cómo se han definido estas nociones.

Definiendo Terror y Terrorismo

Terror: “El Estado de ser aterrorizado o muy atemorizado; miedo intenso, espanto o pavor.”
Oxford English Dictionary

Terrorismo: “Una política destinada a atacar con terror a aquellos contra quienes se adopta; El empleo de métodos de intimidación; El hecho de aterrorizar o la condición de ser aterrorizado.”
Oxford English Dictionary

Es común hoy en día afirmar que el concepto político de “terror” surgió con el período de la Revolución Francesa entre 1793 y 1794. Conocido como el “Reinado del Terror”, la facción gobernante derramó la sangre de miles y miles de personas a quienes consideraba no encajar con su idea de virtud. *La Terreur* se ha asociado principalmente con la figura de Maximiliano Robespierre –“el Incorruptible”– y la fuerza dominante en el Comité de Seguridad Pública que se encargaba de restaurar el orden en la República Francesa. El terror era el medio por el cual la sociedad debía ser purificada y la guillotina su herramienta y el principal símbolo de esta

fase de la Revolución Francesa. Para Robespierre, el terror no era “nada más que justicia, pronta, segura e inflexible” (Richardson, 2006: 19), y el uso extensivo de la guillotina estaba destinado a crear una “República de la Virtud” (Scurr, 2006).

De allí quiero señalar dos puntos importantes. En primer lugar, la yuxtaposición del terror, la justicia, la virtud y la pureza en ese entonces tiene una semejanza preocupante con los discursos moralizantes de hoy, tanto de las redes terroristas transnacionales del tipo Al-Qaeda e ISIS como de la “guerra al terror” llevada a cabo por EEUU. Tanto George W. Bush como Osama Bin Laden (ambos ya “retirados”) asumían un tono de alto nivel moral en la denuncia de sus némesis respectivas, e invocaban a Dios/Alá a su lado respectivo. Bin Laden consideraba su propia versión del terrorismo como justicia retributiva contra el imperialismo estadounidense en el Medio Oriente y como una forma legítima de lucha para purificar las tierras árabes que consideraba contaminadas por los invasores infieles. Como dijo en 1998:

El terrorismo puede ser encomiable y puede ser reprehensible... El terrorismo que practicamos nosotros es del tipo encomiable porque está dirigido contra los tiranos, los agresores y los enemigos de Alá.(...) Aterrorizarlos y castigarlos son medidas necesarias para enderezar las cosas y hacerlas bien.(...) La verdad es que todo el mundo musulmán es víctima del terrorismo internacional, manipulado por Estados Unidos y las Naciones Unidas. (citado en Richardson, 2006: 24, 65)

Argumentando desde el otro lado del espectro, George W. Bush compartió esta visión de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Sin embargo, a diferencia de Bin Laden quien reconoció que estaba cometiendo actos de terrorismo –aunque de “tipo encomiable”– Bush no veía las acciones de su administración como terrorismo. Para él, “el terrorismo es algo que hacen los malos” (Richardson, 2006: 19). En 2001, presentó al mundo su ahora infame proposición:

Cada Nación, en cada parte del mundo, debe tomar una decisión. Están con nosotros o están con los terroristas. Desde hoy y en adelante, cualquier Nación que continúe albergando o respaldando el terrorismo será considerado por los Estados Unidos como un régimen hostil.

Esta rígida elección de tipo “*esto / o*” en el discurso de Bush divide el mundo en bueno y malo. Retratándose a sí mismo como víctima del 9/11, Estados Unidos patrocinó un terrorismo de Estado que no sería inmediatamente visto como tal. Sin embargo, como el filósofo alemán Peter Sloterdijk (2009: 27) ha argumentado, “[c]ada ataque terrorista se ve a sí mismo como un contragolpe en una serie supuestamente siempre iniciada por el enemigo. Como resultado, el terrorismo se concibe como una expresión antiterrorista”.

Una primera represalia por los ataques terroristas en Nueva York y Washington fue lanzada en octubre de 2001, inicialmente denominada “Operación Justicia Infinita” (más tarde se cambió el nombre a “Operación Libertad Duradera”). Para Bush, el bombardeo de Afganistán era “nada más que justicia, pronta, segura e inflexible”, así como Robespierre quería que se entendiera su uso del terror durante la Revolución Francesa.

Esto nos lleva al segundo punto que vale la pena recordar de la Revolución Francesa: el término político “terror” surgió como una estrategia empleada por el Estado para controlar a su población nacional. En otras palabras, emergió como terror de Estado. Y hasta hoy, en términos del número de víctimas, el terrorismo patrocinado por el Estado supera con creces las acciones terroristas cometidas por grupos no estatales. Ejemplos obvios incluyen los regímenes de terror en la Alemania Nazi y en la Unión Soviética de Stalin, donde millones de civiles murieron y gran parte de la sociedad civil vivía –para emplear la definición de terror del Oxford English Dictionary– “aterrorizada o muy atemorizada”.

Lo mismo podría aplicarse a los cientos de miles de civiles que vivían, sufrían, desaparecían y morían durante las dictaduras militares en gran parte de América Latina en las décadas de 1970 y 1980, donde el terror fue empleado por los gobiernos en el poder como una herramienta de dominación y una estrategia de control de sus poblaciones (Brysk, 2003; Ensalaco, 1999; Hayner, 2001; Koonings y Kruijt, 1999; Menjivar y Rodríguez, 2005; Pion-Berlin, 1989). Como afirman Corradi, Weiss Fagen y Garretón (1992), la aplicación sistemática del terrorismo de Estado en los regímenes militares del Cono Sur de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en los años setenta y ochenta, funcionó como un dispositivo ordenador de la sociedad tan omnipresente que conducía a una cultura del miedo en esos países con consecuencias que se extienden hasta el presente.

A pesar de esta abrumadora presencia del terror estatal, en el imaginario geopolítico popular se ha prestado una atención desproporcionada a las acciones terroristas no estatales, alimentada por los medios de comunicación y la industria cinematográfica de Hollywood (Sharp, 2000). Por ejemplo, Bourke (2005) encontró que entre los años 1980 y 1985 grupos terroristas no estatales mataron a diecisiete personas en los Estados Unidos –un número relativamente insignificante– mientras que el New York Times publicó un promedio de cuatro historias sobre el terrorismo en cada edición durante este mismo período. En su historia cultural del miedo, Bourke atribuye esta cobertura aparentemente desproporcionada a los grupos con intereses creados en la promoción del miedo. Escribiendo sobre el mismo período en los años ochenta, Edward Said observa que “terror” y “terrorismo” se han vuelto “conceptos totalizadores”:

Todo el arsenal de palabras y frases que derivan del concepto de terrorismo [es] a la vez inadecuado y vergonzoso. Actualmente hay pocas formas de hablar del terrorismo que no hayan sido corrompidas por la guerra de propaganda; formas que, en mi opinión, han sido descalificadas como instrumentos para llevar a cabo una investigación racional y secular sobre las causas de la violencia humana. ¿Existe alguna otra forma de aprehender lo que podría estar implicado cuando ahora usamos sin pensar la palabra “terrorismo?” (Said, 1988: 53)

Es interesante notar que fue en los años ochenta que Said expresó su frustración en términos que serían bastante adecuados para describir nuestros debates actuales. Con el cerebro lavado por los discursos de la “guerra al terror” contra Afganistán, Pakistán e Irak, es fácil olvidar que otras geografías fueron el foco de la “guerra de propaganda” de la que habla Said. Como Chomsky ha declarado en numerosas

ocasiones, la “guerra al terror” solo fue “re-declarada” después del 11-S (Chomsky, 2003: 115; 2004: 188-198). La retórica de la Guerra Fría de la administración Reagan en los años ochenta promovió la idea de una conspiración terrorista internacional respaldada por los soviéticos que incluía a Centroamérica. Puede ser risible tomar hoy en serio la afirmación de Reagan: “las políticas y acciones del Gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” (citado en Chomsky, 2003: 116). Sin embargo, su declaración preparó el escenario para la masiva intervención estadounidense en Nicaragua mediante el suministro de armas a los Contras, que alimentaron una sangrienta guerra civil que finalmente terminaría en derrota electoral para los sandinistas en el gobierno.

Si retomamos la definición de terrorismo del *Oxford English Dictionary* (“Una política destinada a atacar con terror a aquellos contra quienes se adopta; el empleo de métodos de intimidación”) entonces la administración de Reagan claramente cometió actos de terrorismo internacional contra el pueblo y el gobierno de Nicaragua. Esta interpretación también sería válida si acudiéramos a un manual del Ejército de los Estados Unidos en donde se define al terrorismo como “el uso calculado de violencia o amenaza de violencia para alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos (...) a través de la intimidación, la coerción o el miedo” (citado en Chomsky, 2004: 188).

Además, dado que esta definición describe igualmente bien la actual intervención estadounidense en Afganistán, Pakistán, Irak y otros lugares considerados como una “amenaza” para los Estados Unidos, sería difícil argumentar en contra de Chomsky (2004: 189), cuando afirma que “Estados Unidos es un Estado terrorista”; un punto de vista que aparece tanto en el análisis del terrorismo de Estado occidental de George (1991), como en el discurso de Harold Pinter con quien aceptó el Premio Nobel en el 2005, cuando calificó la invasión estadounidense de Irak como “un acto flagrante de terrorismo de Estado”.

Sin embargo, muchos “expertos en terrorismo” se alejan de tal interpretación y en cambio se centran casi exclusivamente en grupos o acciones terroristas no estatales. Naturalmente, esto es porque para muchos el terrorismo estatal es una “violencia normalizada” (Watts, 2007: 188) y, en consecuencia, debe excluirse del análisis de las actividades terroristas. Por lo tanto, entre los sospechosos habituales se incluye a Hamas, Al Qaeda y Hezbollah, pero también a los Tigres Tamiles (Sri Lanka), el Sendero Luminoso (Perú), el Aum Shinrikyo (Japón), el grupo separatista kurdo PKK, la organización separatista vasca ETA, el Ejército Republicano Irlandés (IRA), y el grupo Baader-Meinhof o Facción del Ejército Rojo que operó en Alemania en los años setenta y ochenta.

Es allí que yace la “guerra de propaganda” de la que habla Said. Al retratar a cualquier organización separatista o revolucionaria como “terrorista”, su lucha es discursivamente despolitizada. En Colombia, por ejemplo, a raíz de las preocupaciones mundiales por el terrorismo como consecuencia del 11-S, las autoridades han seguido una estrategia discursiva que vincula al grupo guerrillero más grande y poderoso del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el cultivo y el narcotráfico, redefiniendo de esta manera a los guerrilleros como “narcoterroristas”. El objetivo ha sido desacreditar el proyecto político de la guerri-

lla y encubrir las raíces sociales e históricas del conflicto interno en curso.²

Al mismo tiempo, la administración del entonces presidente Uribe empleó sus propias estrategias de terror. ONGs nacionales e internacionales denunciaron continuamente la práctica de detenciones masivas arbitrarias, el asesinato selectivo de sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales y la continua colaboración entre las fuerzas armadas y grupos paramilitares de derecha que han creado un ambiente de temor en la sociedad civil colombiana. Un caso particularmente grave era el escándalo de asesinatos extrajudiciales conocido como “falsos positivos” que sacudió al país. Unidades del Ejército fueron alentadas a enfrentar militarmente a los grupos guerrilleros, ofreciéndoseles recompensas en función del número de cuerpos de guerrilleros muertos. Como resultado, para ser recompensados muchas de esas unidades mataron a miles de civiles disfrazándolos de guerrilleros.

El Premio Nobel de Literatura de 2005, Harold Pinter, describió –sin saberlo– el enigma del escándalo de los “falsos positivos” en su poema “Muerte”:

¿Dónde se encontró el cadáver?
¿Quién encontró el cadáver?
¿Había muerto el cadáver cuando lo encontraron?
¿Cómo se encontró el cadáver?
¿Quién era el cadáver?

¿Quién era el padre, la hija o el hermano
O tío o hermana o madre o hijo
Del cuerpo muerto y abandonado?

¿Fue el cuerpo muerto cuando fue abandonado?
¿El cuerpo fue abandonado?
¿Por quién fue abandonado?

¿El cadáver estaba desnudo o vestido para un viaje?

¿Qué te hizo declarar muerto el cadáver?
¿Declaraste muerto el cadáver?
¿Qué tan bien conociste el cadáver?
¿Cómo supiste que el cadáver estaba muerto?

¿Lavaste el cadáver?
¿Cerraste sus ojos?
¿Enterraste el cuerpo?
¿Lo dejaste abandonado?

.....
2 Aunque en noviembre del 2016 se firmó un acuerdo para el cese de hostilidades y hacia la construcción de una paz estable y duradera entre las FARC y la administración de Santos, se mantiene en gran parte de la población civil el imaginario de la guerrilla como “narcoterrorista”, lo que explica hasta cierto punto por que el referéndum inicial por la paz falló.

¿Besaste el cuerpo muerto?

En la perspectiva del escándalo de los “falso positivos”, el propio Estado colombiano parece ser un terrorista más grande que las FARC. De hecho, en la línea de lo argumentado por Chomsky, las autoridades colombianas no han sido las únicas en ver el 11 de septiembre como una “ventana de oportunidad” para legitimar su propio uso del poder y la represión política y militar:

Muchos gobiernos, entre ellos el de los Estados Unidos, instituyeron medidas para disciplinar a la población nacional y llevar adelante medidas impopulares bajo el disfraz de ‘combatir el terror’, explotando la atmósfera de miedo y la demanda de “patriotismo”. (Chomsky, 2003: 127)

Geografía y la “Guerra al Terror”

“Considero la guerra global al terror como una de las modalidades centrales a través de las cuáles se articula el presente colonial”

Gregory, 2004:13

Tras los ataques terroristas de Nueva York y Washington de septiembre de 2001, los geógrafos reflexionaron en torno a su papel en la “guerra al terror”. Esto tomaría diversas formas, algunas conflictivas. En 2002, la Asociación de Geógrafos Americanos organizó un panel sobre geografía y terrorismo en su reunión anual en Washington, que llevó a la publicación de una colección de ensayos sobre el tema. El libro –*The Geographical Dimensions of Terrorism* (Cutter et al, 2003)– resaltaba la “utilidad” de la geografía y de los Sistemas de Información Geográfica en una situación de emergencia, como la que se presentaba con la “guerra al terror”, en particular en relación con las áreas de datos geoespaciales, tecnologías de investigación sobre infraestructura, ciencia de vulnerabilidad e investigación en riesgos. El libro también proponía una política específica, sugiriendo la creación de una Oficina de Información de GeoSeguridad –*GeoSecurity*– dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Geógrafos críticos atacaron el libro rápidamente por su enfoque tecnocrático y su imposibilidad de considerar la importancia de la disciplina para ayudar a entender las raíces del terrorismo y las historias de los lugares de donde emergen los actos terroristas. En una colección editada por Derek Gregory y Allan Pred (2007), los editores explican en la introducción:

La provocación inmediata para nuestro proyecto fue un conjunto doble de respuestas a los sangrientos eventos del 11 de septiembre. Por un lado, hubo quienes redujeron los ataques al World Trade Center y al Pentágono a una barbarie que pasó por alto todo entendimiento... El terrorismo estaba situado más allá de los límites de la civilización y alojado en las patologías de aquellos que golpeaban tan destructivamente a sus puertas (...) Por otro lado, hubo quienes propusieron una respuesta puramente técnica o instrumental al 11 de septiembre, diseñada sobre tecnologías políticas (que también eran tecnologías geográficas), para perfilar, predecir y manejar la amenaza del terrorismo. (Gregory y Pred, 2007: 1)

Así, el libro de Gregory y Pred (2007) –*Violent Geographies*– fue no solo una contribución a una imaginación geográfica crítica emergente, sino también una refutación al enfoque simplista, tecnocrático y acrítico del papel y la utilidad de la geografía en la guerra contra el terrorismo patrocinada por Cutter y otros.

En el 2003 un número de la revista *The Professional Geographer* incluyó dos artículos cortos publicados uno al lado del otro que son representativos de los distintos enfoques que los geógrafos han tomado en sus investigaciones sobre el terrorismo. En su artículo, Richard Beck (2003) pretende demostrar la utilidad de la teledetección ambiental y de los SIG como instrumentos de lucha contra el terrorismo en la guerra en Afganistán. Basándose en imágenes de vídeo de una formación rocosa y en una imagen cartográfica satelital, el autor identifica un lugar en el Este de Afganistán como un refugio probable de “terroristas”. El autor remitió esta información al gobierno de los Estados Unidos en octubre de 2001 y posteriormente afirmaría con cierto orgullo que “informes militares y de prensa indicaron la subsecuente eliminación exitosa de un gran número de terroristas y municiones en Zhawar Kili en noviembre de 2001 y en enero, febrero y abril de 2002” (Beck, 2003: 170).

Tal triunfalismo atrajo la ira de otros geógrafos profundamente preocupados por las implicaciones éticas y profesionales de tal connivencia con el ejército estadounidense y por el hecho de haber cedido a sus demandas de retrasar la publicación del artículo para proteger sus operaciones militares (O’ Loughlin, 2005). También se podría añadir que se ignora cuántos presuntos “terroristas” y cuántos civiles (como “daño colateral”) fueron asesinados como resultado de este tipo de inteligencia proporcionada al Ejército de los Estados Unidos.

En el mismo volumen, Colin Flint (2003) por su parte, presenta una posición crítica frente a la débil comprensión de la dimensión geográfica del terrorismo contemporáneo. En su lugar, propone una perspectiva político-geográfica sobre las causas y consecuencias del terrorismo y el contraterrorismo que involucra la interacción de la política del poder y los procesos geográficos. El autor destaca asimismo la importancia del contexto geohistórico en la comprensión de las causas del terrorismo contemporáneo y, en especial, del papel de los Estados Unidos como poder hegemónico. A su vez, Flint argumenta la necesidad de examinar más detenidamente la espacialidad de las redes terroristas, concluyendo que:

(...) ninguna otra disciplina [que la geografía] es mejor posicionada para sintetizar las múltiples causas del conflicto, comprender y dar voz a las percepciones basadas en el lugar que conducen a la confrontación, definir el camino hacia la paz, y evidenciar las imbricaciones entre la paz a escala local y las estructuras globales. (Flint, 2003: 166-167)

Escribiendo también desde una perspectiva geopolítica crítica, Stuart Elden (2007, 2009) examina las intersecciones de terror y territorio. Está particularmente interesado en las formas en que la integridad territorial y la soberanía se ven cuestionadas en la guerra contra el terrorismo. Estados como Somalia, Afganistán e Irak que han preservado nominalmente las fronteras carecen, sin embargo, de control territorial efectivo sobre sus territorios. Por un lado, la soberanía territorial de estos Estados se ve amenazada por agresiones externas como la intervención militar estadounidense en Irak y Afganistán. Por otra parte, los grupos no estatales

han sido capaces de llenar el vacío de poder que dejó el Estado y establecieron el control territorial en ciertas partes de estos países. Al-Qaeda, por ejemplo, más que una red desterritorializada, como suele describirse, ha establecido campos de entrenamiento y bases operativas en algunos de estos Estados. Elden (2007: 829), por lo tanto, nos advierte acerca de “no ver a Al-Qaeda en términos no territoriales o indicativos de una desterritorialización más amplia”.

De esta manera se han producido numerosas intervenciones de geógrafos involucrados en los debates sobre la guerra contra el terrorismo. Sin embargo, la mayoría de ellas han tratado la noción de terror solamente dentro del contexto de la “guerra al terror”. No pretenden investigar la naturaleza del terror como tal, ni proponen un replanteamiento radical del concepto mismo de terror. De allí mi propuesta ahora de indagar más en las geografías concretas del terror, de iluminar y enfocar “otras” geografías de terror, tal vez menos conocidas. Terminaré estas reflexiones con un marco conceptual que he denominado “geografías del terror” que se nutre de mi trabajo empírico con comunidades negras en el Pacífico colombiano a lo largo de los últimos veinte años (véase Oslender, 2007; 2008; 2016).

Geografías del Terror

*“El terror, como lo conocemos hoy, golpea
sin ninguna provocación preliminar”*

Hannah Arendt, *The Burden of Our Time*, 1951

El terror es una estrategia de guerra y una herramienta de dominación. No está dirigido tanto a sus víctimas más inmediatas, sino más bien a los sobrevivientes. Es una estrategia comunicativa. El terror funciona como un espectáculo, envía un mensaje a los supervivientes, amenazándolos. A través de la aplicación sistemática del terror, se genera un profundo sentimiento de temor entre las poblaciones locales y los lugares se transforman en espacios de miedo que rompen dramáticamente las relaciones sociales locales y regionales.

Bajo esta premisa el antropólogo Michael Taussig (1984) examina el informe del representante consular británico Roger Casement sobre el abuso sistemático, la tortura y los asesinatos de indígenas que trabajaban al peonaje por deuda en las plantaciones de caucho en la región colombiana de Putumayo a principios del siglo XX. Este informe de 136 páginas es el resultado de una investigación de Casement realizada en el año 1910: siete semanas de viaje a través de las áreas de recolección de caucho de las selvas de los afluentes de los ríos Caraparami e Igaraparana de la parte media del río Putumayo, y seis meses en la cuenca del Amazonas. En detalles duros de leer, Casement describe el terror y la tortura sufridos por los indios Huitoto a manos de los oficiales y trabajadores de la compañía. Según Casement, el caucho del Putumayo no sería rentable si no fuera por el trabajo forzoso de los huitotos locales. Entre 1900 y 1910, la producción de unas 4 mil toneladas de caucho en el Putumayo costó la vida a miles de indios. Las muertes por tortura y enfermedades habían disminuido la población de la zona en alrededor de 30 mil durante ese tiempo (Taussig, 1984: 474).

Una de las principales formas de castigo eran los azotes o latigazos que a menudo eran infligidos hasta que los huesos de la víctima se hacían visibles. Los latigazos se aplicaban, por ejemplo, cuando un indio no traía suficiente caucho. Para aquellos que se atrevían a intentar huir, los latigazos eran particularmente sádicos. Exentos de cualquier cuidado médico, una vez azotados y torturados, los indios eran dejados para ser aperreados por los perros de la compañía. El azote era mezclado con otras torturas como la castración o la crucifixión con la cabeza hacia abajo. Los trabajadores blancos también habrían cortado a los indios en trozos con machetes y sacudido el cerebro de niños pequeños arrojándolos contra árboles y muros. Los ancianos, por su parte, cuando ya no podían trabajar, eran asesinados.³

Para divertirse, los oficiales de la compañía usaban a los indios como blanco. En ocasiones especiales, como el sábado de Pascua, mataban a los indios en grupos o los rociaban con Kerosene y los prendían fuego para gozar de su agonía (Taussig, 1984: 475). Una forma particular de tortura sigue siendo común hoy en día. El casi-ahogamiento fue diseñado, como Casement señala, “para detenerse a poco de producir la muerte, mientras se inspiraba un agudo temor mental y se infligía gran parte de la agonía física de la muerte” (Taussig, 1984: 477). En ese momento, esta práctica aún no se conocía como *waterboarding*.

Taussig (1984: 495) resume que el terror y la tortura se convirtieron en la forma de vida durante unos quince años en la región de Putumayo, donde efectivamente se había desarrollado una “cultura de terror”. Y agrega:

Las culturas del terror están basadas en el silencio y alimentadas por él (...) Sin duda, el deseo del torturador es también prosaico: adquirir información, actuar de acuerdo con las estrategias económicas a gran escala elaboradas por los amos y las exigencias de la producción. Sin embargo, tal vez es más importante la necesidad de controlar a las poblaciones masivas mediante la elaboración cultural del miedo. (Taussig, 1984:469)

Visto desde el presente, hay muchos lugares donde tal elaboración cultural del miedo ha permitido el control masivo de poblaciones y personas viviendo en una cultura del terror. Podemos pensar en las ya mencionadas dictaduras militares de América Latina de los años setenta y ochenta, en el régimen de *apartheid* sudafricano o en regímenes de terrorismo de Estado más recientes, como la Libia gobernada por Gadafi, que recibiría un tratamiento ficticio por parte del libio Hisham Matar, en su aclamada novela de debut *En el país de los hombres* (2006). Al igual que el informe de Putumayo de Roger Casement y la lectura crítica que Taussig hace de este, Matar proporciona un relato del terror como experiencia vivida. Estos relatos denuncian la violencia y el terror como sistemas de opresión, al mismo tiempo que transmiten una proximidad moral con las personas que están sujetas a regímenes de terror.

Es esa preocupación por el terror como experiencia vivida que ha nutrido mi in-

.....
³ En más de una ocasión las descripciones de tortura y castigo en el informe de Casement recuerdan la crónica del Fray Bartolomé De las Casas sobre las barbaridades cometidas por los conquistadores españoles en el siglo XVI.

tento de pensar geográficamente sobre el terror y por la que he desarrollado un marco conceptual que he denominado “geografías del terror” como una herramienta metodológica para el estudio sistemático del impacto del terror y sus manifestaciones espaciales en las poblaciones locales. A la vez considero que este enfoque es un intento de redireccionamiento de los discursos geopolíticos contemporáneos de la “guerra al terror” que definen al terrorismo exclusivamente como dirigido contra el estado democrático neoliberal occidental, al tiempo que ocultan otros terrorismos, incluso aquellos aplicados por estas mismas democracias neoliberales occidentales. En particular, el marco de las “geografías del terror” examina una serie de fenómenos geográficos asociados con el terror y el terrorismo. Por lo tanto, ofrece un contraargumento a la generalización de los discursos sobre el terrorismo y anima a mirar más profundamente y con más detalle las múltiples manifestaciones del terror y cómo las personas comunes viven y tratan con él diariamente.

Siete puntos constituyen el marco de las “geografías del terror”. Los he elaborado desde la experiencia de las comunidades negras en la región del Pacífico colombiano que han sido expuestas sistemáticamente a la violencia por parte de grupos armados (Oslender, 2007; 2008; 2016). He conducido el trabajo de campo etnográfico entre estas comunidades desde hace más de veinte años. En los años noventa examinaba, sobre todo, su lucha por adquirir derechos territoriales sobre las tierras que habían venido ocupando ancestralmente en esa región de bosque tropical. Sin embargo, hacia finales de los años noventa se empezó a dar el fenómeno del desplazamiento forzado de estas comunidades como resultado de una coyuntura geoeconómica y política compleja que incluía la extensión del conflicto armado a esta región antes considerada como “refugio de paz”. Fue en ese entonces que cambié mi enfoque de investigación examinando ahora los procesos espaciales que llevaban a la producción de lo que denominaría después “paisajes de miedo”.

Ahora bien, mientras hago referencias concretas a la experiencia de las comunidades negras en Colombia, se invita aquí al lector a pensar estas geografías del terror en otros escenarios también. No se requiere mucha fantasía para imaginarse, por ejemplo, los “paisajes de miedo” que actualmente se están produciendo a lo largo del territorio de Siria en esta horrible guerra que no parece tener final. Pero también podemos pensar en la “movilidad restringida en las prácticas espaciales rutinarias” de la población de Palestina en los territorios ocupados por Israel. Allí también se producen geografías particulares de movilidad y des-movilidad a través de la imposición de un régimen de violencia estatal y el terror. Finalmente, los “movimientos físicos en el espacio” (discutido en el punto 5 del siguiente apartado) se dejan ilustrar fácilmente con una de las grandes tragedias del siglo XXI: la migración masiva de poblaciones enteras que huyen de la guerra, del terror y de la persecución, de este modo redefiniendo no solamente los espacios que dejan atrás, sino también los nuevos espacios de llegada que transforman en procesos de reterritorialización (descrito en el punto 6 apartado). De esta manera el planteamiento espera ofrecer no solamente un marco conceptual a reorientar la discusión sobre el terror y terrorismo, sino también apunta a la necesidad de siempre pensar e indagar en lo empírico al mismo tiempo.

Geografías del Terror – un marco conceptual

1. La producción de paisajes de miedo

El uso continuo del terror en una región lleva a la producción de paisajes de miedo. Ellos son frecuentemente visibles en las huellas que los grupos armados dejan después de los ataques contra las poblaciones civiles. Casas destruidas, agujeros de bala y grafitis en las paredes, o plantaciones en cenizas son “estampas” de la presencia de los agentes del terror. Como “recuerdo” del acto violento son una amenaza constante para los pobladores atemorizados. Estas huellas transforman el espacio en paisajes de miedo y son la manifestación más obvia del terror como espectáculo, como estrategia comunicativa. Efectivamente, estos paisajes se dejan “leer” e interpretar a través de estas huellas. Esta interpretación va más allá de la clásica propuesta humanística de Tuan (1979) quien piensa los paisajes de miedo como una metáfora para el estudio de geografías imaginadas, por ejemplo, en cuentos infantiles. Se trata aquí más bien de establecer una relación sistemática entre miedo y paisaje en relación con el espacio social rutinario y las prácticas corporeizadas de la vida cotidiana. Estos paisajes de miedo se manifiestan también, por ejemplo, en “espacios vaciados”, como lo son los pueblos abandonados por los habitantes que han tenido que huir de las amenazas y masacres. Aunque después de un tiempo de haber huido de sus tierras los habitantes frecuentemente regresan a sus casas, la experiencia del terror continua en la gente, y el sentido de terror producido queda impreso en los nuevos paisajes de miedo.

2. Movilidad y prácticas espaciales rutinarias restringidas

La imposición de un régimen de terror en un lugar impone restricciones a los movimientos cotidianos de la población. Estas restricciones pueden ser explícitamente impuestas por los actores armados que prohíben a la población local desplazarse a ciertos lugares; o pueden ser restricciones implícitas impuestas por el miedo y el sentido de terror que le “aconseja” a uno no moverse hacia ciertos lugares. Un sentido de inseguridad generalizada se extiende por el lugar y afecta las formas de cómo la gente se mueve en sus alrededores. El contexto de terror lleva así a una fragmentación del espacio y rompe dramáticamente la movilidad espacial cotidiana. En el Pacífico colombiano hay una tendencia hacia la creación de “campos de confinamiento”. Estos constituyen un cercamiento espacial que les inhibe a los pobladores entrar a o salir de una región. Los actores armados establecen puntos de vigilancia en determinados sitios de paso (por ejemplo en diferentes partes de un mismo río) y controlan así la entrada y salida de productos, mercancías y personas. Los confinamientos en sí constituyen un problema igual de grave que el desplazamiento, al ser las comunidades “emplazadas” en sus lugares de origen sin poder ejercer control territorial ni moverse libremente.

Estos campos de confinamiento se observan también en el conflicto Israel-Palestina, donde la población palestina está confinada espacialmente en los territorios ocupados. De manera drástica se muestra este confinamiento en la construcción de un muro por los israelíes que pretende inhibir a los palestinos entrar a territorio israelí.

3. Transformación dramática del sentido de lugar

Con “sentido de lugar” nos referimos a la dimensión subjetiva de un lugar; a las percepciones individuales y colectivas que se generan en un lugar; y a los sentimientos asociados con un lugar. Estas dimensiones subjetivas y experienciales del lugar se transforman dramáticamente en un contexto de terror. La gente comienza a sentir, pensar y hablar de diferentes maneras sobre sus lugares de vida, ya impregnados de experiencias traumáticas, recuerdos y temor. Estas personas también pueden involucrarse en el silencio cuando piensan o se les pide que hablen de sus hogares. Para muchos refugiados, por ejemplo, las atrocidades experimentadas o presenciadas son a menudo demasiado duras para ser nombradas.

Más que el lugar hogareño que recordarían (y del que hablarían) antes de que el terror se desatara sobre ellos, ahora es el sitio físico de la masacre, el asesinato, la tortura o el encuentro cara a cara con los agentes del terror. Ya no es el “lugar de residencia” (*homeplace*) del que nos habla bell hooks (1991: 41-49) –un espacio libre de vigilancia y opresión, donde se construyen solidaridades y sociabilidades–, más bien, la imaginación individual y colectiva del lugar de origen da paso a lo que he denominado un “sentido de lugar aterrorizado” (Oslender, 2008: 83).

En el Pacífico colombiano el sentido de lugar está condicionado por un entorno de bosque húmedo tropical en el cual las relaciones sociales están espacializadas a lo largo de las cuencas de los ríos hasta tal punto que podemos hablar de un “sentido de lugar acuático” (Oslender, 2016). Con esto me refiero a las formas íntimas en que los pobladores rurales en el Pacífico se identifican con sus ríos. Estos constituyen no solamente la infraestructura de transporte y movilidad, sino también la fuente de memoria colectiva y el sitio de la vida social que conecta y comunica a las diferentes comunidades a lo largo de las orillas. El contexto de terror rompe abruptamente este sentido de lugar. Las geografías imaginadas y las formas en que la gente del Pacífico piensa y se refiere al entorno en que vive y se mueve diariamente, están ahora impregnadas de miedos y angustias. No son solamente sus movimientos físicos y su movilidad por los ríos los que están confinados espacialmente, sino también su imaginación y experiencia sentimental de viajes, visitas, juegos y fiestas.

4. Desterritorialización

El terror separa las formas existentes de territorialización. Las amenazas y masacres cometidas por los grupos armados provocan la pérdida del control territorial de las poblaciones locales. El desplazamiento físico y el desplazamiento forzado de individuos o comunidades son su expresión más visible, ya que las personas huyen de la violencia y el terror, abandonando sus tierras, sus casas y sus ríos. Sin embargo, la desterritorialización también existe cuando las poblaciones locales son inhibidas o se sienten restringidas en sus movimientos cotidianos rutinarios alrededor de sus espacios habituales. En otras palabras, el miedo produce “desterritorialización mental” (Oslender, 2008: 83), que se establece cuando la pérdida del control territorial es percibida como resultado de la violencia y que se materializa en la evasión de lugares donde el peligro puede estar al acecho.

5. Movimientos físicos en el espacio

El desplazamiento forzado es la reacción más inmediata frente a situaciones de amenazas y matanzas. Este puede darse a menor escala con la huida de personas individuales o a escala masiva con el éxodo de poblaciones enteras desde una región azotada por el terror. Los desplazamientos pueden resultar en migraciones de corta distancia y duración, por ejemplo hacia viviendas de familiares en un poblado cercano; o pueden ser de larga distancia y duración, por ejemplo hacia las grandes ciudades del país. En Colombia se han identificado cuatro ciclos de migración forzada: 1) *corto*: entre cabeceras municipales cercanas dentro de la misma región; 2) *intermedio*: entre las cabeceras municipales y polos urbanos a nivel subregional; 3) *extra-regional*: desde los polos subregionales a las grandes ciudades del interior del país (Bogotá, Medellín, Cali); y 4) *intra-urbano*. Muy lejos de lo que podría sugerir la categorización ordenada de esta cadena migratoria, sin embargo, estos ciclos de desplazamiento se articulan en un contexto de impredecibilidad y desorganización. Los desplazamientos frecuentemente se producen en una situación de total caos, pánico e inseguridad. Sin embargo, el desplazamiento es solo *un* aspecto de estos movimientos reorganizadores del espacio. Esfuerzos para lograr un retorno seguro de las comunidades afectadas a sus tierras –sea promovida de forma institucional u organizada individualmente– llevan a movimientos en dirección opuesta a la huida y dirigidos hacia una recuperación de las territorialidades perdidas, o, en otras palabras, a procesos de reterritorialización.

6. Reterritorialización

La desterritorialización debe considerarse conjuntamente con la reterritorialización; la una no ocurre sin la otra. El retorno seguro de las poblaciones desplazadas a su lugar de origen debe ser, en última instancia, el objetivo para la resolución del conflicto. Pero este regreso a las tierras de origen no es fácil. Está acompañado por el miedo y la incertidumbre sobre lo que uno va a encontrar, las condiciones en que se encuentran las tierras, la casa y el pueblo. El proceso de reterritorialización en el lugar de origen es largo e implica una redefinición de las relaciones sociales anteriores y una reconstrucción de los paisajes de miedo en espacios de solidaridad y paz.

Sin embargo, los desplazados que no vuelven (sea por decisión propia o por falta de condiciones de seguridad) también embarcan en procesos de reterritorialización. De hecho, estos procesos comienzan en el momento de la reubicación del desplazado en el lugar de llegada con los primeros intentos de sobrevivencia y de reconstrucción de sus vidas. El nuevo entorno urbano brinda todas las dificultades del reacomodamiento en un espacio desconocido y frecuentemente hostil. Se ha resaltado, por ejemplo, las muchas dificultades de encontrar trabajo, y la cuadruple estigmatización y discriminación de la mujer afrocolombiana desplazada en la ciudad: por ser mujer, pobre, desplazada y negra.

Sin embargo, la reterritorialización también brinda posibilidades para la construcción de nuevas identidades. En particular para las mujeres, la reconstrucción de proyectos de vida frecuentemente brinda nuevas formas de autonomía en un ambiente de solidaridad entre mujeres y no dominado por hombres (Meertens, 2001:144). En la apropiación de los nuevos espacios suelen confluir formas materiales y simbólicas.

El establecimiento de una oficina de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en Bogotá, por ejemplo, tiene un gran significado para la organización, no solamente al nivel funcional que les facilita coordinar sus acciones, sino también a nivel simbólico. La oficina constata la presencia visible de los desplazados afrocolombianos en la capital, quienes reclaman en condición de ciudadanos colombianos con derechos propios. Además, la oficina brinda un espacio de solidaridad en la ciudad y para muchos desplazados afrocolombianos recién llegados es el primer lugar para encontrar ayuda, consejos, o simplemente un abrazo fuerte y un café.

7. Estrategias espaciales de resistencia

El entorno físico brinda posibilidades particulares para la población local de defenderse y de resistir a los actores violentos. O, en otras palabras, el espacio se deja movilizar para confrontar al terror en su lugar. En caso de un inminente acto de agresión por parte de actores armados, por ejemplo, los pobladores locales pueden movilizar el entorno para esconderse en ciertos lugares o huir a través de rutas particulares de escape que conocen bien. En algunas zonas del Pacífico colombiano las comunidades locales han implementado estas “estrategias de ocultamiento” escondiéndose de los actores armados a través de constantes microdesplazamientos al interior de sus territorios. La experiencia histórica del cimarronaje y el conocimiento íntimo de los espacios locales y las microgeografías del lugar de pertenencia se combinan en esta estrategia espacial de resistencia. Como la movilidad espacial en el Pacífico colombiano se da a lo largo de los ríos, las redes laberínticas de los innumerables ríos ahora brindan también la posibilidad de rutas de escape.

Una de las preguntas urgentes a resolver por el movimiento afrocolombiano es si estos microdesplazamientos y estrategias de ocultamiento se dejan coordinar a nivel local, regional o incluso nacional. Hay debates sobre la posibilidad de evacuar temporalmente pueblos enteros en el caso de amenazas y de incursiones violentas de actores armados. Pero también si es posible desarrollar sistemas de alerta local que comuniquen entre sí a los diferentes poblados situados a lo largo de los ríos para coordinar las evacuaciones. Pese a estas posibilidades, es importante resaltar que solamente se puede tratar de mecanismos de defensa temporal, pues conllevan la ruptura de la vida social individual y colectiva y no permiten una construcción permanente de convivencia más allá de la influencia del conflicto armado. El objetivo central de todas las resistencias debe ser la expulsión de los actores armados de la región del Pacífico colombiano, por más que esto pueda sonar utópico en estos días.

Ahora bien, el marco de siete puntos de las “geografías de terror” debe entenderse como una agenda para abordar el terror como un conjunto complejo de espacios, emociones, prácticas, movimientos y materialidades en una gama de escalas desde el cuerpo hasta las microgeografías de la casa, la calle, el río, el bosque y la región. Presta especial atención a las formas en que las personas enfrentan el terror en su lugar. En particular, la política multiescalar de resistencia llevada a cabo por los movimientos sociales puede ofrecer un rico campo de análisis para comprender mejor la lucha de muchas poblaciones que enfrentan el terror, la guerra y el desplazamiento forzado.

Aunque he aplicado este marco al caso de las comunidades negras de Colombia

en la región de la costa del Pacífico que viven bajo constante amenaza a sus vidas y que durante los últimos veinte años han sido arrancadas violentamente de sus tierras, sostengo que el mismo puede ser aplicado a otras geografías y otras situaciones, como las de las poblaciones locales en Palestina, Afganistán, Siria, Sudán del Sur, entre otros. De esta manera este marco de análisis puede verse como una contribución a un compromiso crítico con el mismo concepto de terror y un antídoto contra los “conceptos totalizadores” en que de acuerdo con Said (1988: 53) se han convertido las nociones de terror y terrorismo. Esto no es una aventura fácil en la “era del terror” actual que está dominada por un discurso binario simplista del mundo. Sin embargo, es necesario seguir insistiendo en que los espacios de terror son múltiples y se encuentran en muchos lugares, a menudo insospechados.

Bibliografía

- Agnew, John (2002). *Making political geography*. London: Hodder Education.
- Beck, Richard (2003). “Remote sensing and GIS as counterterrorism tools in the Afghanistan War: a case study of the Zhawar Kili region”. En: *The Professional Geographer*, vol. 55, nro. 2: pp. 170-179.
- Bourke, Joanna (2005). *Fear: a cultural history*. London: Virago Press
- Brysk, Alison (2003). “Recovering from state terror: the morning after in Latin America”. En: *Latin American Research Review*, vol. 38, nro. 1: pp. 238-247.
- Butler, Judith (2007). “Torture and the ethics of photography”. En: *Environment & Planning D: Society and Space*, vol. 25: pp. 951-966.
- Chomsky, Noam (2003). “Wars of terror”. En: *New Political Science*, vol. 25, nro. 1: pp. 113-127.
- Chomsky, Noam (2004). *Hegemony or survival: America's quest for global dominance*. London: Penguin Books.
- Corradi, Juan; Weiss Fagen, Patricia y Garretón, Manuel Antonio (eds.) (1992). *Fear at the edge: state terror and resistance in Latin America*. Oxford: University of California Press.
- Cutter, Susan; Richardson, Douglas y Wilbanks, Thomas (2003). *The geographical dimensions of terrorism*. London: Routledge.
- De las Casas, Bartolomé (2004) [1542]. *A short account of the destruction of the Indies* (Introducción por Anthony Pagden). Londres: Penguin Classics.
- Elden, Stuart (2007). “Terror and territory”. En: *Antipode*, vol. 39, nro. 5: pp. 821-845.
- Elden, Stuart (2009). *Terror and territory: the spatial extent of sovereignty*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ensalaco, Mark (1999). *Chile under Pinochet: recovering the truth*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Flint, Colin (2003). “Terrorism and counterterrorism: geographic research questions and agendas”. En: *The Professional Geographer*, vol. 55, nro. 2, pp. 161-169.
- George, Alexander (ed.) (1991). *Western state terrorism*. Cambridge: Polity Press.
- Graham, Stephen (ed.) (2004). *Cities, war, and terrorism: towards an urban geopolitics*. Oxford: Blackwell.
- Gregory, Derek (2004). *The colonial present: Afghanistan, Palestine, Iraq*. Oxford: Blackwell.
- Gregory, Derek y Pred, Allan (eds.) (2007). *Violent geographies: fear, terror, and political violence*. New York: Routledge.

- Harvey, David (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hayner, Priscilla (2001). *Unspeakable truths: confronting state terror and atrocity*. New York: Routledge.
- hooks, bell (1991). *Yearning: Race, Gender, and Cultural politics*. London: Turnaround.
- Hyndman, Jennifer (2003). “Beyond either/or: a feminist analysis of September 11th”. En: *ACME. An International E-Journal for Critical Geographies*, vol. 2, nro. 1: pp. 1-13.
- Hyndman, Jennifer y Mountz, Alison (2007). “Refuge or refusal: the geography of exclusion”. En: Gregory, Derek y Pred, Allan (eds.); *Violent geographies: fear, terror, and political violence*. New York: Routledge. Pp. 77-92.
- Koonings, Kees y Kruijt, Dirk (eds.) (1999). *Societies of fear: the legacy of civil war, violence and terror in Latin America*. London: Zed Books.
- Matar, Hisham (2006). *In the country of men*. London: Viking.
- Meertens, Donny (2001). “Facing destruction, rebuilding life: gender and the internally displaced in Colombia”. En: *Latin American Perspectives*, vol. 28, nro. 1: pp. 132-148
- Menjívar, Cecilia y Rodríguez, Néstor (eds.) (2005). *When states kill: Latin America, the US, and technologies of terror*. Austin: University of Texas Press.
- O’Loughlin, John (2005). “The war on terrorism, academic publication norms, and replication”. En: *The Professional Geographer*, vol. 57, nro. 4: pp. 588-591.
- Oslender, Ulrich (2007). “Spaces of terror and fear on Colombia’s Pacific coast: the armed conflict and forced displacement among black communities”. En: Gregory, Derek y Pred, Allan (eds.); *Violent geographies: fear, terror, and political violence*. New York: Routledge. Pp. 111-132.
- Oslender, Ulrich (2008). “Another history of violence: the production of ‘geographies of terror’ in Colombia’s Pacific coast region”. En: *Latin American Perspectives*, vol. 35, nro. 5: pp. 77-102.
- Oslender, Ulrich (2016). *The geographies of social movements: Afro-Colombian mobilization and the aquatic space*. Durham: Duke University Press.
- Pion-Berlin, David (1989). *The ideology of state terror: economic doctrine and political repression in Argentina and Peru*. London: Rienner.
- Richardson, Louise (2006). *What terrorists want: understanding the terrorist threat*. London: John Murray Publishers.
- Said, Edward (1988). “Identity, negation and violence”. En: *New Left Review*, nro. 171: pp. 46-60.
- Scurr, Ruth (2006). *Fatal purity: Robespierre and the French Revolution*. London: Metropolitan Books.
- Sharp, Joanne (2000). *Condensing the Cold War: Reader’s Digest and American identity 1922-94*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Sloterdijk, Peter (2009). *Terror from the air*. Los Angeles: Semiotexte [originally published in 2002 as *Luftbeben. An den Quellen des Terrors*. Editions Suhrkamp: Frankfurt am Main].
- Smith, Neil (2003). “After the American *lebensraum*: ‘Empire’, Empire, and globalization”. En: *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies*, vol. 5, nro. 2: pp. 249-270.
- Taussig, Michael (1984). “Culture of terror – space of death: Roger Casement’s Putumayo report and the explanation of torture”. En: *Comparative Studies in Society and History*, vol. 26, nro. 3: pp. 467-497.
- Tuan, Yi-Fu (1979). *Landscapes of fear*. Oxford: Basil Blackwell.
- Watts, Michael (2007). “Revolutionary Islam: a geography of modern terror”. En: Gregory, Derek y Pred, Allan (eds.); *Violent geographies: fear, terror, and political violence*. New York: Routledge. Pp. 175-203.

La naturaleza política de la selva: políticas de desplazamiento forzado de pueblos indígenas durante el régimen militar en Brasil*

PAULO TAVARES**

Resumen

En los imaginarios coloniales y modernos, los pueblos indígenas de la Amazonia han sido frecuentemente definidos por categorías que hacen referencia a lo incompleto. Uno de los argumentos principales que respaldaban este punto de vista era la supuesta inexistencia de centros urbanos en el paisaje selvático, en el pasado en tanto evidencia arqueológica, como en el presente en tanto infraestructuras espaciales de gran escala. Se decía que los pueblos de la selva carecían del producto más notable de la “civilización”: la ciudad. Las cartografías presentadas en este artículo desafían esta perspectiva colonial. Son parte de una investigación más amplia sobre la campaña genocida llevada a cabo contra los pueblos indígenas de la Amazonia por parte del Estado brasileño durante la dictadura militar de los años setenta y ochenta. A través de una arqueología de la violencia que se registra en mapas, documentos y el tejido botánico del bosque, esta investigación revela una imagen radicalmente diferente de la naturaleza de la Amazonia. Se mostrará que el bosque es en gran medida una construcción diseñada que resulta de las diversas formas en que las sociedades indígenas hicieron uso, manipularon y transformaron la tierra.

Palabras clave: arquitectura; desarrollo; violencia.

Fecha de recepción: 01-03-2017

Fecha de aceptación: 04-09-2017

The Political Nature of the Forest: Research Notes about the Forced Displacement Politics of Indigenous Peoples during Military Regime in Brazil

Abstract: In colonial and modern imaginaries, the indigenous peoples of Amazonia have always been defined by categories of incompleteness. One of the most conspicuous arguments supporting this view was the alleged nonexistence of urban complexes in the forest landscape, both in the ancient past, as archaeological evidence, and in the modern present, as large-scale spatial infrastructures. Supposedly constrained by the environmental conditions of the tropics, technological limitations and “subsistence economies,” forest peoples thus also were said to lack that most remarkable product of “civilization”: the city. The cartographies presented in this essay challenge this colonial perspective. They are part of an investigation into the genocidal campaign conducted against the indigenous peoples of Amazonia by the Brazilian State during the military dictatorship of the 1970s and 80s. Through an archaeology of the violence as it registers in maps, documents and the forest’s botanic fabric, this research reveals a radically different image of the nature of Amazonia. By carefully studying these evidence we see that the forest is to a great extent an designed construction that results from the various ways indigenous societies engage, manipulate and transform the land.

Keywords: Architecture; Development; Violence.

* Traducción de Pamela Colombo.

** Arquitecto y urbanista, professor de cultura visual y paisajismo en la Universidad de Brasilia. Ha contribuido en varias publicaciones internacionales, y su trabajo se ha exhibido en la Trienal Arquitectura de Oslo y en la Bienal de Diseño de Estambul, entre otras. Fue Profesor invitado en las Universidades de Princeton y Cornell entre otras y ha sido un asiduo colaborador en el colectivo de investigación Forensic Architecture. pt@unb.br.

Introducción

En los imaginarios coloniales-modernos, los pueblos indígenas de la Amazonia han sido frecuentemente definidos por categorías que hacen referencia a lo incompleto, a la ausencia y la carencia. Sociedades sin agricultura ni sistemas de manejo de recursos; sin economías de mercado ni instituciones gubernamentales complejas; sociedades en estado de naturaleza, sociedades sin historia (Clastres, 1987; Clastres, 2010). Uno de los argumentos principales que respaldaban este punto de vista era la supuesta inexistencia de centros urbanos en el paisaje selvático. Teóricamente, estaban limitados por las condiciones ambientales de los trópicos y por las restricciones tecnológicas, se decía que los pueblos de la selva carecían del producto más notable de la “civilización”: la ciudad. Se trataría entonces de sociedades no urbanas, en el sentido de que no podían desarrollar estructuras tecnológicas, espaciales, culturales y políticas que caracterizan la *polis*. Las cartografías presentadas en este artículo desafían esta perspectiva colonial. Son parte de una investigación más amplia sobre la campaña genocida llevada a cabo contra los pueblos indígenas de la Amazonia por parte del Estado brasileño durante la dictadura militar de los años setenta y ochenta. A través de una arqueología de la violencia que se registra en estos mapas, esta investigación revela una imagen radicalmente diferente de la naturaleza de la Amazonia, demostrando que el bosque es en gran medida una construcción diseñada que resulta de las diversas formas en que las sociedades indígenas usaron, manipularon y transformaron el paisaje.

Terra Nullius - Tabula Rasa

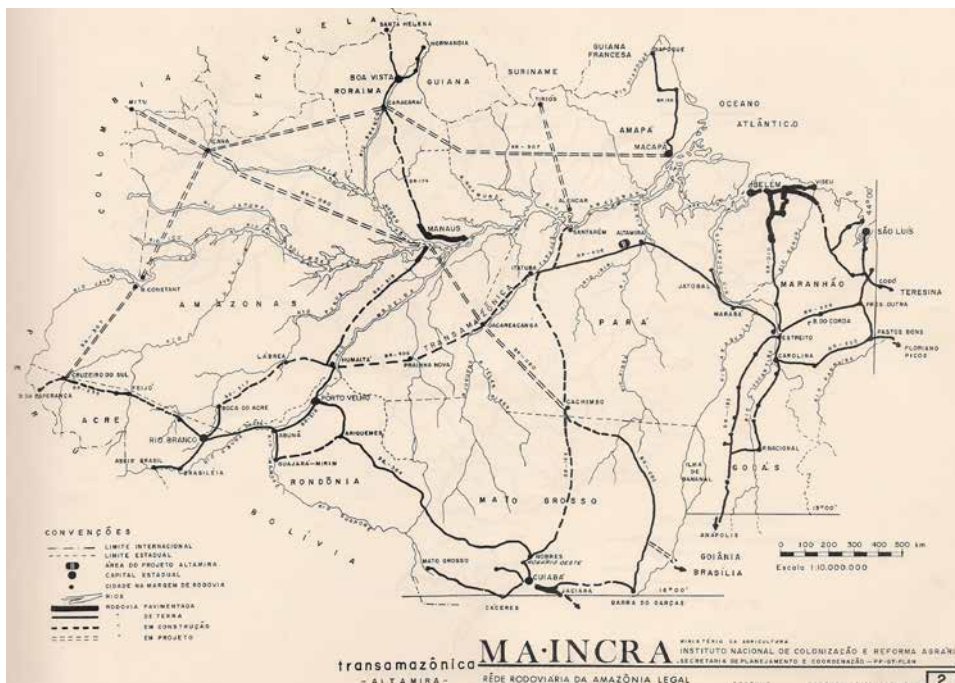
Explicando el concepto sobre el que se apoya el diseño del plan maestro de Brasilia, la capital modernista de Brasil construida desde cero a finales de la década de 1950 en las mesetas del Interior, el urbanista Lúcio Costa escribió: “La ciudad nació del gesto primario de alguien que marcó o tomó posesión de un lugar, dos ejes que cruzan en un ángulo recto, el signo de la cruz” (Costa, 1957: s/p). Recién a principios de los años setenta, cuando Brasil estaba bajo una dictadura militar, Brasilia se convirtió en el centro *de facto* del poder político nacional. Para entonces, el programa colonial (tanto su aspecto simbólico como funcional) encarnado en el diseño modernista de la ciudad –una cruz urbana que demarcaba la conquista de un territorio– se expandía rápidamente hacia las profundidades de la Amazonia.

Al igual que sus predecesores coloniales, los estrategas y planificadores modernos definieron la Amazonia como un espacio vacío que se caracterizaba por una carencia crónica: vacío demográfico, subdesarrollo tecnológico, estancamiento económico, aislamiento territorial. En el libro *Geopolitics of Brazil* (1967), el general Golbery do Couto e Silva, el autor intelectual más influyente de la Doctrina de Seguridad Nacional, describió la Amazonia como una “isla” gigante flotando al margen de la sociedad nacional y fuera de la geometría del Estado (Silva, 1967). Esta perspectiva neocolonial llevó a la dictadura militar (1964-1985) a diseñar una estrategia de larga escala para “ocupar e integrar” la Amazonia, que Golbery des-



Fuente: Cortesía del Archivo Público del Distrito Federal, Brasília

Frateras modernas coloniales. El punto cero de Brasília, aproximadamente 1957. “[Esta ciudad] nació del gesto primario de quien marca o toma posesión de un lugar: dos ejes que se cruzan en ángulo recto, el mismo signo de la cruz”, escribió el urbanista Lucio Costa sobre su diseño conceptual para la capital modernista de Brasil. En las fronteras del Tercer Mundo, la modernización y el colonialismo se hicieron prácticamente sinónimos. La arquitectura modernista fue uno de los avatares más poderosos de este imaginario colonial. Fotografía de Mario Fontenelle



Fuente: Manchete Magazine, 1973

Diseño Territorial. Mapa del Plan de Integración Nacional, Instituto de Reforma Agraria y Colonización (INCRA), 1971. Sobre el terreno, la “maniobra geopolítica” del General Golbery se tradujo en una matriz de carreteras de proporciones continentales que interconectan una serie de “polos de desarrollo”. Los polos fueron concebidos como enclaves modernizadores equipados con una serie de infraestructuras (represas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos, etc.) para dar cabida a operaciones de extracción de recursos a gran escala. Las carreteras debían operar como canales a través de los cuales las fronteras agrícolas se expandirían hacia el interior, así como las rutas para la migración masiva de mano de obra para poblar y colonizar el bosque. También en la imagen, una de las líneas punteadas, figura la infame autopista transamazónica en construcción

cribió como una “maniobra geopolítica para la integración del territorio nacional”. Esta estrategia se tradujo en una serie de experimentos radicales de planificación espacial que fueron desplegados como si los extremadamente diversos y complejos sistemas socio-ambientales de la selva pudieran planificarse y modificarse en su conjunto: una *terra nullius* o *tabula rasa* homogeneizada para ser domesticada racionalmente, colonizada y rediseñada. Con la ayuda de sofisticadas tecnologías de cartografía desarrolladas por el complejo militar-industrial de la Guerra Fría, la selva fue concebida y visualizada como un terreno de recursos ilimitados y abierto para la explotación capitalista, en el que se proyectaría e implementaría una serie de imaginarios cartográficos, discursos gubernamentales y estrategias espaciales. Sin embargo, este proceso provocó cambios dramáticos y violentos tanto en el paisaje natural como en el social al interior de la Amazonia.

Políticas del borramiento

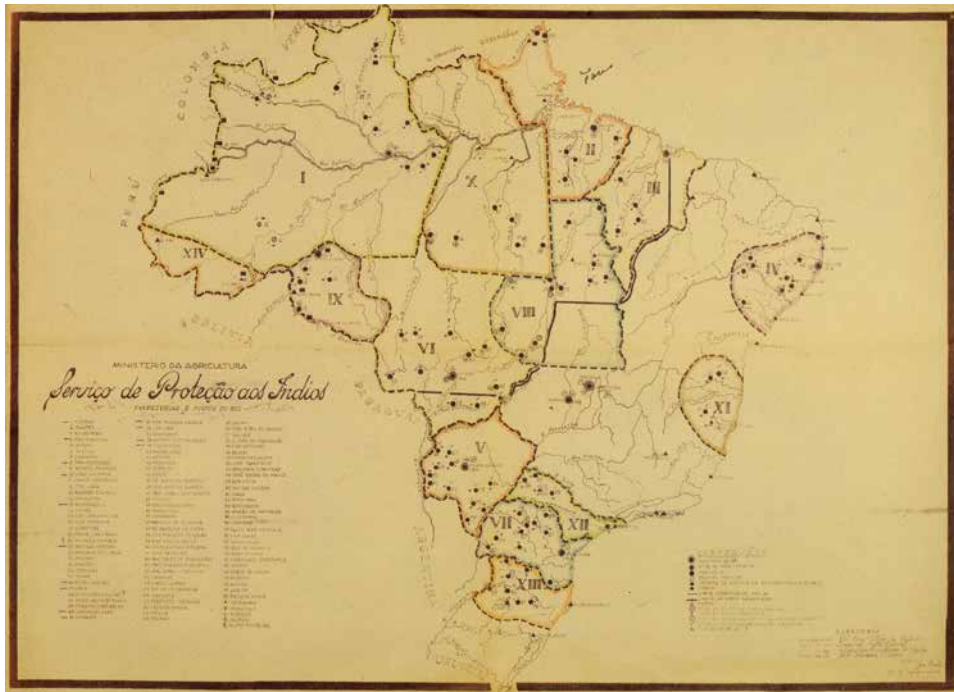
Para llevar a cabo ese plan, el gobierno militar buscó “pacificar” a las comunidades indígenas cuyos territorios estaban ubicados en zonas estratégicas designadas para llevar a cabo proyectos de desarrollo como ciudades, minas, represas, plantaciones y granjas de ganado. Mientras las políticas estatales dirigidas a los pueblos indígenas se alineaban con la doctrina de la Seguridad Nacional, las campañas de “pacificación” se militarizaron cada vez más, agravando así la violencia estructural contra la población amerindia que forma parte de la historia colonial y moderna de Brasil. Como se documentó en el informe final de la Comissão Nacional da Verdade, una comisión de la verdad establecida en Brasil en 2012 para investigar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el régimen militar, la “pacificación” incluyó desalojos y traslados forzados, expropiaciones sistemáticas de tierras, masacres, detenciones arbitrarias, tortura y represión de la actividad política. Estas acciones se combinaron con una ecología letal que causó el despojo masivo y el desplazamiento, llevando a reducciones demográficas severas, desintegración cultural y casi al exterminio y desaparición de grupos nativos enteros. Cuando todas estas acciones se ven en conjunto, como en un mapa, se dibujan los contornos de una estrategia más amplia para “producir vacíos demográficos”. Las formas múltiples y enredadas de violencia y las violaciones de los derechos por las que se llevó a cabo esta estrategia sobre el terreno, no son “ni esporádicas ni accidentales, [sino] sistemáticas”, concluye el informe, “en la medida en que resultan directamente de políticas estatales estructurales”, e “incluso cuando se dirigen a personas, se enfocan en un pueblo como un todo y en tanto tal” (Comissão Nacional da Verdade, 2014: 198-217).

La percepción colonial de que el interior de la selva constituía una vasta *terra nullius* escasamente poblada por tribus primitivas se tradujo en una política oficial del Estado destinada a generar vacíos territoriales, *de jure* y *de facto*, es decir, por ley y en el territorio; con el objetivo de eliminar la existencia de los pueblos indígenas como sujeto de derechos y como pueblo. “Con el fin de liberar la tierra para la colonización y la construcción de proyectos de infraestructura, [esta política] condujo no solo a intentos formales de negar la existencia de ciertos pueblos indígenas en determinadas regiones, sino también a los medios para hacer realidad esta desaparición” (Comissão Nacional da Verdade, 2014: 205).



Fuente: cortesía del Archivo Municipal SINOP

Terra Nullius - Tabula Rasa. La ciudad de SINOP, uno de los principales “polos de desarrollo” diseñados por el régimen militar, hoy en día el centro logístico-urbano del complejo de plantación de soja en el sur de la Amazonia, en una etapa temprana de construcción a principios de los años setenta

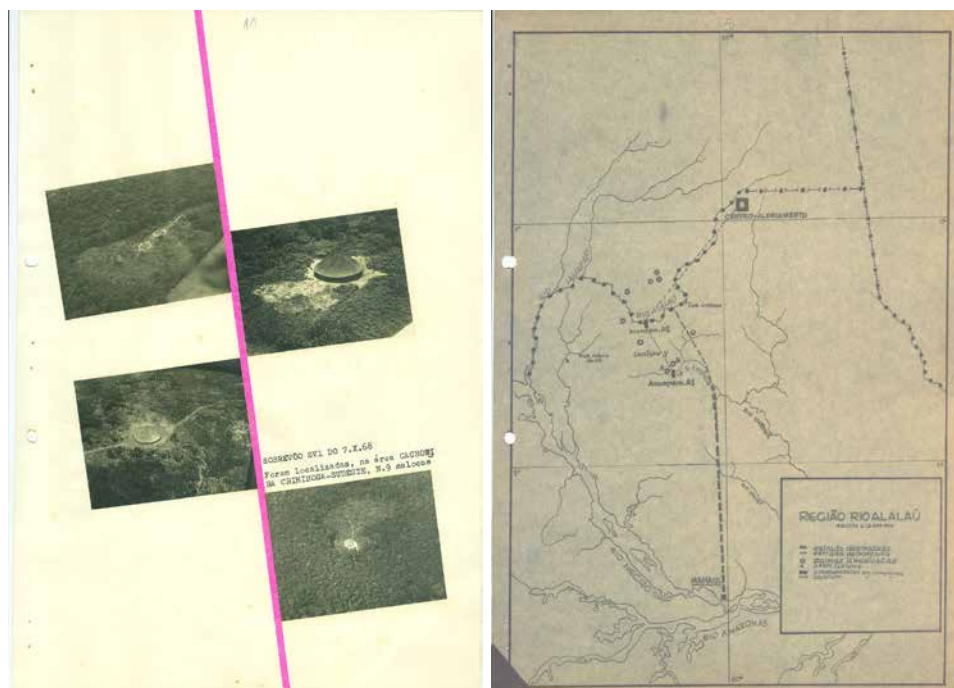


Fuente: cortesía del Museu do Índio, Rio de Janeiro

Pacificación. 1946 mapa de la red de puestos y bases del Servicio para la Protección del Indígena (SPI), la agencia estatal creada en 1910 para llevar a cabo la “pacificación” de las poblaciones indígenas. A finales de los años sesenta, cuando Brasil estaba bajo dictadura militar, había más de 100 puestos de avanzada de la SPI (ahora llamada FUNAI, Fundación Nacional Indígena), distribuidos en todo el territorio brasileño. Inicialmente sirviendo como centros para contactar y atraer a grupos indígenas dispersos, estos campamentos se convirtieron posteriormente en colonias agrícolas comandadas por oficiales del Estado. El SPI / FUNAI actualizó formas de tutela política y control territorial originadas en la administración colonial. La agencia empleó una estrategia similar al método de *descimientos* o *reducciones*, que consistía en transferir y concentrar las comunidades dispersas en aldeas centralizadas, facilitando así el gobierno de los nativos y la ocupación de sus tierras

Las aldeas desaparecidas

Una de las operaciones más largas y violentas de estas “política del borramiento” se desplegó contra el pueblo *Waimiri Atroari*, un grupo caribe de la Amazonia central. Su tierra, una región rica en depósitos minerales, fue mapeada como un “polo de desarrollo” clave dentro de la estrategia general de ocupación de frontera. A fines de los años sesenta, después de siglos de enfrentamientos violentos e intentos fallidos de colonizar este territorio, el gobierno creó el “Frente de Atracción Waimiri Atroari” (FAWA), una operación de pacificación dirigida a frenar la resistencia indígena y relocalizar a la población para hacer lugar para construir autopistas, la mega-represa de Balbina, enclaves mineros y proyectos agrícolas. Durante las dos décadas siguientes, la FAWA llevó a cabo una amplia campaña de extracciones forzadas y transferencias, desplazando a los Waimiri Atroari de sus aldeas tradicionales y confinándolos en asentamientos controlados por el Estado. Más de 2.000 indios fueron asesinados durante el proceso de pacificación, ya sea a través de acciones directas de las fuerzas estatales y milicias privadas o de masacres y ataques químicos aéreos, e, indirectamente, por enfermedades traídas por soldados, trabajadores y colonos. Esto causó la aniquilación del 90% de la población indígena y la destrucción de un número desconocido de aldeas, lo que llevó a transformaciones dramáticas en el territorio Waimiri Atroari y el exterminio casi total de sus modos de vida y sus maneras de habitar (Comissão Nacional da Verdade, 2014: 205).



Fuente: cortesía de FUNAI

Atracción Frente. Páginas extraídas del “Proyecto de Pacificación de los Waimiri Atroari” elaborado en 1968. Varias aldeas fueron mapeadas por vuelos de reconocimiento. El mapa muestra la estrategia para dislocar los grupos de Waimiri Atroari fuera de la ruta de la carretera BR-174. Un puesto de avanzada situado en los márgenes de los ríos Alalau y Abonari funcionó para contactar y atraer a la población indígena que más tarde sería trasladada a un asentamiento más grande controlado por el Estado

Rigurosamente geométrica, la arquitectura de los pueblos Waimiri Atroari consta tradicionalmente de una única casa comunal construida en una forma circular de aproximadamente 18 a 50 metros de ancho, que se encuentra dentro de una gran plaza elipsoide rodeada de jardines frutales, árboles de nueces y pequeños campos de agricultura de quema y roza. A medida que los claros de la selva se expanden alrededor del núcleo central, el pueblo es gradualmente rodeado por otro anillo que puede extenderse por más de 300 metros de ancho. “Mydy taha” o “casa grande”, el término usado por los Waimiri Atroari para referirse a sus aldeas, designa todo este complejo, abarcando la estructura residencial, la plaza, los jardines y los pequeños campos de agricultura de quema y roza adyacentes. Antes del proceso de reasentamiento, esta célula socio-espacial básica era altamente móvil. Estas aldeas eran periódicamente abandonadas y reconstruidas en otra parte, realizando un movimiento constante a través del paisaje del bosque. Los campos de agricultura de quema y roza tienden a reatraer presas y concentrar especies de árboles frutales y plantas medicinales, por lo que las aldeas abandonadas continuaron siendo utilizadas durante muchos años. Los estudios arqueológicos también demuestran que los nuevos asentamientos probablemente se localizaron en áreas que ya habían sido habitadas en el pasado, las cuales son generalmente identificables por la presencia de suelos antropogénicos altamente fértiles conocidos como tierras oscuras (Miliken *et al.*, 1992).

Distribuidas a lo largo de márgenes de ríos y arroyos, las redes de pueblos autónomos formaban agrupaciones regionales organizadas en un sistema territorial más amplio interconectado por varias rutas, que los Waimiri Atroari llaman “umá”. Aunque relativamente distantes entre sí y políticamente independientes, las aldeas se integraron social y espacialmente a través de interacciones culturales e intercambios materiales, haciendo del Waimiri Atroari un territorio muy dinámico y poblado, sostenido por una amplia, intrincada y bien definida infraestructura de tierra y comunicaciones fluviales.

Asumir que esta extensa infraestructura territorial podría haber desaparecido completamente sin dejar ruinas sería un acto más de borramiento de la agencia socio-histórica de los pueblos indígenas, perpetrando y perpetuando la política genocida de la dictadura militar por otros medios.¹ Tal suposición solo reafirmaría la ideología colonial según la cual la Amazonia habría sido un territorio vacío y dominado por una naturaleza suntuosa y prístina y poblado por pequeñas tribus de salvajes cuyos modos de relacionarse con el medio ambiente estaban tan subdesarrollados que no habrían producido modificaciones significativas en el territorio, y consecuentemente no habrían dejado signos evidentes en el paisaje. En otras palabras, en la medida en que las tecnologías indígenas y las prácticas espaciales son consideradas incapaces de transformar y rediseñar la tierra, no hay un “registro arquitectónico” que dé testimonio de la destrucción masiva del territorio Waimiri Atroari. Pero ¿cómo

.....
1 Sobre el concepto de ruina y las discusiones recientes sobre la materia, ver: Edensor, Tim. 2005. *Industrial Ruins. space, aesthetics and materiality*. Berg: New York; Olsen, Bjornar. 2010. *In Defense of Things: Archeology and the Ontology of Objects*. Lanham: Altamira Press; Stoler, Ann. 2013. “Introduction”, en Stoler, Ann (ed.). *Imperial Debris: on ruins and ruination*. Durham: Duke University Press. *Nota de los editores*.

podría haber operado la devastación en tal escala, que casi exterminó a la población Waimiri Atroari y destruyó una extensa red de asentamientos, jardines y senderos, sin dejar restos ni marcas en el terreno? ¿Cómo podrían haber desaparecido numerosos pueblos sin ninguna marca arqueológica reconocible en el territorio?

Arqueología botánica

Hay pocas evidencias materiales de la planificación y ejecución de los desalojos y masacres de los Waimiri Atroari, y no existe un mapa apropiado de la ubicación, del número o del tamaño de los pueblos que fueron destruidos o abandonados a la fuerza. Esta supuesta ausencia de evidencia material a menudo ha apoyado las afirmaciones de que, a diferencia de los opositores al régimen militar que fueron torturados y asesinados en las ciudades, las comunidades indígenas no habrían sido un blanco de estas políticas.² Sin embargo, fue en las profundidades de este territorio, en donde los Generales lanzaron una gran campaña de anexión de territorios indígenas sobre los cuales el Estado no ejercía un control total. Esas graves violaciones a los derechos humanos se perpetraron de la manera más extendida, desenfrenada y brutal, exponiendo las profundas raíces coloniales sobre las que se forjó la sociedad nacional brasileña en el siglo XX. Al mismo tiempo, la violencia colonial fue en su mayor parte invisible, subestimada y no registrada como parte del terror del gobierno dictatorial y, en el mejor de los casos, fue considerada como un daño colateral de un proceso rápido de modernización que se extendió caóticamente sobre la selva.



Fuente: cortesía de Stéphen Rostain

Agrupaciones urbanas. Los paisajes esculpidos de los campos elevados interrumpen las inundadas sabanas de la costa de la Guayana Francesa, en el norte de la Amazonia. Casi invisibles desde el suelo, estos grandes racimos agrícolas (aproximadamente 1.000 años de antigüedad) fueron descubiertos a través de las “arqueologías fotográficas” multicanal producidas por Stéphen Rostain en los años ochenta

.....
 2 Como dijo uno de los coordinadores de la comisión de la verdad brasileña a la prensa en 2012, los pueblos originarios “no se resistían en el sentido político, ya que no sabían exactamente lo que era la dictadura... de cierta manera su resistencia era ingenua, solo para preservar sus tierras... pero fueron tratados con extrema violencia” (Balza, 2012).

Confrontando esta narrativa histórica, en 2012-2013, junto con investigadores del grupo de investigación de *Arquitectura Forense*,³ conduje una investigación sobre la campaña genocida dirigida por el Estado contra los Waimiri Atroari.⁴ El objetivo principal fue identificar las ruinas de los pueblos que fueron borradas por la política de pacificación, proporcionando un análisis cartográfico de la escala y la espacialización de la violencia. Para localizar evidencias arqueológicas de la destrucción, el proyecto utilizó tecnologías de teledetección –originalmente desarrolladas para mapear el cambio climático global–, y, principalmente, metodologías diseñadas para establecer la edad del bosque que permiten a los investigadores rastrear diferencias casi imperceptibles en la estructura y composición botánica de la vegetación.

Las imágenes satelitales contemporáneas son difundidas, comúnmente, en el dominio público con “colores verdaderos”, es decir, codificadas para representar el terreno lo más cerca posible de los colores percibidos por un observador humano en contacto directo con el paisaje. Sin embargo, tales imágenes satelitales operan sobre un espacio sensorial mucho más amplio del espectro de la óptica humana y captan no solo una imagen plana de la Tierra, sino también una serie de informaciones ambientales únicamente detectables a través de la visión de la máquina. Los datos recolectados por esta visión multispectral del entorno pueden ser codificados para “mapear” características específicas en el paisaje y realizar interpretaciones detalladísimas de los procesos socio-ecológicos a medida que se registran en la cobertura terrestre y las transformaciones del suelo.

En relación con la cartografía de los bosques tropicales, los datos de las imágenes satelitales pueden traducirse a otro conjunto de imágenes que indican el brillo, el verdor y la humedad del terreno calculando variaciones en la reflexividad de la superficie, las concentraciones de vegetación fotosintéticamente activa y las condiciones de humedad del suelo. La constitución botánica y la estructura de la selva –diferencias en la configuración y densidad del follaje; las tasas variables de fotosíntesis; las relaciones entre la tipología de la vegetación, la biomasa y el drenaje del suelo– corresponden en su totalidad a patrones singulares de reflexión y absorción de ondas electromagnéticas, una información que se almacena en las propiedades espectrales de cada píxel que compone la imagen. Cuando se analiza a través de un archivo de imágenes coherente, es posible rastrear la historia espectral de los píxeles en relación con estos índices. La distribución espacial resultante de los datos mide las perturbaciones en el entorno forestal con precisión, distinguiendo la vegetación secundaria de la antigua a partir de la atribución de edades específicas a áreas del bosque. A través de esta “arqueología” de las propiedades espectrales del píxel, se puede trazar un vínculo directo entre los datos de teledetección y el ciclo de vida del bosque, identificando así la interferencia antropogénica en zonas forestales que, a primera vista, pueden aparecer como entornos naturales puros.

.....

3 Sobre el campo de la arquitectura forense, ver: Franke, A., Weizman, E., & der Welt, H. D. K. (2014). *Forensis: the architecture of public truth*. Sternberg Press; Weizman, E. (2010). *Forensic Architecture: Only the criminal can solve the crime*. Radical Philosophy. Nota de los Editores.

4 Ver <http://www.forensic-architecture.org> Fecha de la última consulta: agosto 2017.

Las técnicas cartográficas de datación forestal evolucionaron gracias a las investigaciones sobre el cambio climático global. Los bosques de diferentes edades albergan especies arbóreas distintas, tipos de tallos, hojas y raíces, que se traducen en cantidades variables de reservas de carbono de biomasa. Al “leer” los bosques según las fases de crecimiento, es posible visualizar y analizar cómo las variaciones en la composición botánica a través del ciclo de vida del bosque interactúan con el ciclo planetario del carbono.

Las cartografías presentadas en este estudio utilizan la misma tecnología para trazar patrones espaciales de violencia. Cuando se aplican las correlaciones de la edad forestal y las reservas de carbono en el territorio de Waimiri Atroari, revelan perturbaciones significativas en la estructura del bosque. Una serie de formaciones forestales secundarias de forma ovalada, de más de treinta años de edad, son claramente detectables, formando varios grupos de parcelas jóvenes de vegetación ubicadas en los márgenes de los principales arroyos. El tamaño de estas parcelas varía, el más ancho hasta 700 metros, mientras que algunas aglomeraciones se extienden por kilómetros y se organizan en zonas que cubren áreas mucho más grandes. Analizados en relación con la existencia de pueblos contemporáneos en el paisaje selvático, el tamaño y la forma de estas formaciones forestales secundarias, así como su singular disposición en relación con los canales del río, son notablemente consistentes con los modos pasados y presentes de habitación de los Waimiri Atroari. La distribución geográfica de los datos muestra que los parches ovalados no fueron intervenciones localizadas, sino que de hecho ocuparon vastas extensiones, trazando el mapa de un territorio complejo y densamente poblado.

La arquitectura nómada de los “mydy taha” con sus múltiples anillos de campos de agricultura de quema y roza, jardines y barbechos –el movimiento histórico de ocupación y abandono, claros y rebrotes realizados por los pueblos– dejó una huella rastreable en el paisaje, cuyo registro arqueológico puede ser identificado en la estructura botánica de la selva. Estas formaciones forestales secundarias, que comenzaron a crecer en la década de 1970 cuando la violencia era más intensa, evidencian la ubicación de aldeas que fueron destruidas o desalojadas forzosamente.

La aparente imposibilidad de encontrar restos arquitectónicos de los asentamientos Waimiri Atroari, la aparente desaparición de las ruinas de los pueblos en el bosque, requiere un cambio en los métodos de lectura del terreno y de recolección de datos ambientales. La naturaleza misma de estas ruinas es radicalmente diferente de la evidencia arqueológica tradicional. Cuando el bosque se interpreta como un recurso arqueológico en sí mismo, y cuando los patrones de distribución y composición de la vegetación viva son leídos como inscripciones de la historia social, la arquitectura de los pueblos desaparecidos por la política de pacificación aparece registrada en el tejido selvático. Su geografía demuestra que el Estado brasileño no estaba interviniendo en un territorio vacío, sino más bien, revela el plan estratégico para interrumpir, transformar y aniquilar los modos de habitar el bosque que se consideraban contradictorios al proyecto de desarrollo nacional.



Fuente: cortesía del arqueólogo Stéphane Rostain

Evidencia del terreno. Uno de los cientos de complejos de montículos artificiales que se conocen en el valle del río Upano, Amazonia ecuatoriana. Del mismo modo, los geoglifos (geoglyphs) (patrones geométricos urbanos) solo se podían identificar después de que el bosque fuera despejado

La evidencia botánica del genocidio también descubre una imagen de la Amazonia que se opone radicalmente a la ideología colonial promovida por el régimen militar, según la cual el bosque era un territorio primitivo, despoblado y subdesarrollado. Este edificio ideológico fue heredado de las descripciones evolucionistas que situaban la Amazonia como un entorno natural y prístino habitado por colectivos que eran incapaces de transformar el paisaje. Contrariando esta narrativa, los mapas revelan marcas claras de un medioambiente altamente manipulado. La violenta reconfiguración de esta arquitectura socio-ecológica fue el medio a partir del cual el Estado asumió un control más estricto sobre el territorio Waimiri Atroari. A pesar de la ausencia de otras posibles formas de evidencia, la historia de la violencia y sus víctimas sobrevive en la memoria de las selvas vivas de la Amazonia.

La naturaleza diseñada de la selva

La capacidad de esta técnica arqueológica de teledetección para investigar el pasado del bosque está limitada por el alcance mismo de las imágenes satelitales de archivo, que comenzaron a ser más consistente recién después del desarrollo de los primeros escáneres multiespectrales a principios de los años setenta. Por lo tanto, la máxima “profundidad de excavación” que se puede alcanzar a través de estas técnicas basadas en imágenes se limita a las últimas décadas del siglo XX. Si se pudiera superar este impedimento, el patrón geográfico de formaciones forestales secundarias en el territorio de Waimiri Atroari probablemente sería mucho más extenso y denso, haciendo visible un historial más largo de intervenciones antropogénicas en la estructura botánica del bosque engendrado por el ciclo perenne de ocupación y abandono de una

multitud de pueblos indígenas. Siguiendo a la inversa la trayectoria colonial de la experiencia demográfica de los Waimiri Atroari, cuanto más lejos pudiéramos observar el pasado de estos bosques, más compleja y extensa sería la distribución espacial de las “ruinas forestales”.

Sin embargo, las interpretaciones cartográficas estándar retratan estos bosques como entornos imperturbables, clasificando toda la zona como una masa intacta de “bosques antiguos” o de “altos bosques”, términos utilizados para designar bosques que tienen un carácter primario y que no han sido modificados por la acción humana ni en un pasado reciente ni tampoco remoto. Esta “ceguera óptica” en la cartografía es en gran medida el correlativo espacial de una “miopía epistemológica” que ha condicionado históricamente las formas en que las ciencias modernas han interpretado la naturaleza de la Amazonia. En una amplia gama de campos –etnografía, biología, arqueología, geografía, etc.–, así como en la cultura occidental en general, existe la suposición de que las sociedades indígenas no influyeron en la composición de las especies ni en la diversidad biológica de la Amazonia. Estudios etnobotánicos y arqueológicos recientes están demostrando que nada puede estar más lejos de la verdad. No solo los modos de habitabilidad de los pueblos de la selva dejan una clara marca en el paisaje, como revela la arqueología de los pueblos desaparecidos, sino también desempeñan una función notable en la formación de las asociaciones vegetativas y el contenido de especies del bosque (Balée, 2013).⁵

Los sistemas indígenas de manejo del paisaje en la Amazonia están tradicionalmente formados por varios bolsones de roza y quema, en diferentes etapas de uso y distribuidos dentro del bosque; cada campo suele contener un número impresionante de plantas y cultivares.⁶ Cuando el bosque vuelve a crecer sobre este tapiz de plantas y gradualmente reclama el sitio de aldeas abandonadas, es un bosque diferente el que emerge allí, con especies particulares de árboles y plantas que son sembrados por las actividades de los aldeanos y animales que son atraídos a los antiguos asentamientos. Muchas sociedades nativas de la Amazonia reconocen que las áreas de roza y quema y otras zonas manipuladas funcionan como atrayentes de importantes agentes de dispersión y manejan deliberadamente ciertos tipos de plantas para aumentar su presencia y así aumentar la distribución de semillas y la germinación de especies particulares. La composición resultante del bosque que crece sobre un campo abandonado es similar a un huerto que continúa siendo utilizado, y que a menudo tiene importantes connotaciones simbólicas para los pueblos indígenas, configurando un elemento arquitectónico vivido y poblado dentro de una infraestructura urbana más grande compuesta de pueblos antiguos y nuevos.

.....
5 Mi informe sobre la naturaleza cultura de los bosques de la Amazonia está también basado en una extensa entrevista con el etnobotánico Nigel Smith.

6 El pueblo Kayapó del sudeste de la Amazonia, por ejemplo, puede reconocer al menos doce variedades de banano en un solo claro; el pueblo Tukano del noroeste de la Amazonia tiene nombres para más de 130 tipos de yuca. Los Waimiri Atroari reconocen más del ochenta por ciento de las especies de árboles y vides en áreas densamente boscosas, y entre los Ka'apor de la Amazonia oriental este número puede alcanzar el 100 por ciento. Ver W. Miliken *et al.*, 1992.

Puesto que parecen ser tan naturales como los bosques antiguos y contienen tasas similares de biodiversidad, el ojo inexperto apenas puede detectar estas formaciones forestales secundarias en el paisaje. Sin embargo, son el producto de un compromiso social con el medio ambiente a largo plazo o, en palabras del etnobotánico William Balée, son “bosques culturales”, construcciones botánicas antropogénicas forjadas por tipos específicos de interacciones entre dinámicas culturales y naturales que albergan “inscripciones, historias, y memorias en la vegetación misma” (Balée, 2013: 2). Los bosques en barbecho originados a partir de los sistemas de manejo de tierras indígenas “representan una especie de reforestación indígena”, sostiene Balée, “en la medida en que la riqueza de especies de la selva alta está siendo reemplazada por especies equivalentemente ricas de bosques secundarios a través de la mediación cultural”. Por lo tanto, estos sistemas actúan a favor del mejoramiento de la biodiversidad (en lugar de su agotamiento), y es por ello que tendemos a ver estos artefactos humanos como naturaleza prístina ya que en gran medida son “bosques naturales” propiamente dichos.

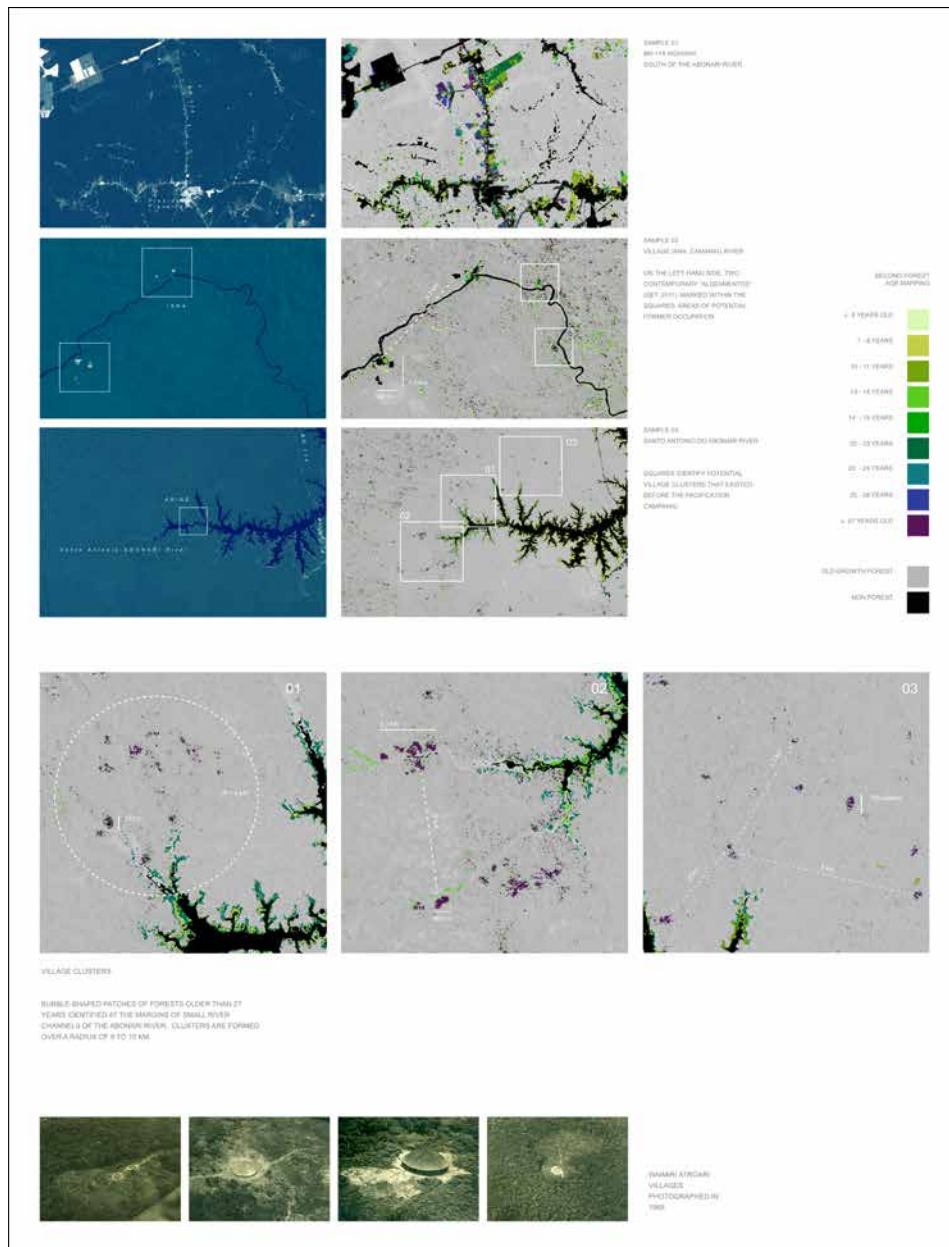
Las cartografías de las ruinas de estos pueblos son la prueba de este proceso socio-histórico de “construcción arquitectónica” del bosque, que fue casi destruido por la política de borramiento ideada por la dictadura militar. Además de la naturaleza política de la violencia que se dirigía contra los modos indígenas de habitar, esta arqueología revela que la naturaleza del bosque es en sí misma política, mostrando que la Amazonia es el producto de modificaciones socio-espaciales que son sostenidas y auto-sostenidas por la vida del bosque. El exterminio de estos grupos de pueblos originarios conduce a la destrucción del bosque, ya que la diversidad biológica y social, la naturaleza y la cultura, son estructuralmente interdependientes en la Amazonia.

Imágenes de naturaleza, paisajes de violencia

En un estudio innovador publicado en 1989, Balée estimó que al menos 11,8% de la Amazonia está compuesta por bosques antropogénicos. Esto equivale a imaginar un territorio más grande que Francia, cubierto por un entorno extremadamente biodiversificado creado por sistemas indígenas de manejo de paisajes (Balée, 1989). Desde entonces, nuevos hallazgos arqueológicos están demostrando que esta cifra es probablemente mucho mayor, lo que confirma que el pasado del territorio con más biodiversidad de la Tierra es tan rico en naturaleza como en cultura. En otras palabras, la estructura botánica y la composición biológica de la selva tropical es en gran medida un “patrimonio urbano” de los diseños indígenas.

La Amazonia ha figurado como la representación por excelencia de la naturaleza en las construcciones imaginarias y epistémicas de la cultura y las ciencias occidentales. Pero como revela la arqueología del pasado reciente y de larga data de la selva, esta imagen de la naturaleza es en realidad producto de la violencia colonial. En lugar de falta de pruebas, la presunta ausencia de evidencia arquitectónica en el paisaje forestal indicaba limitaciones en las formas en que el conocimiento moderno ha interpretado los paisajes humanizados de la Amazonia. La fabricación

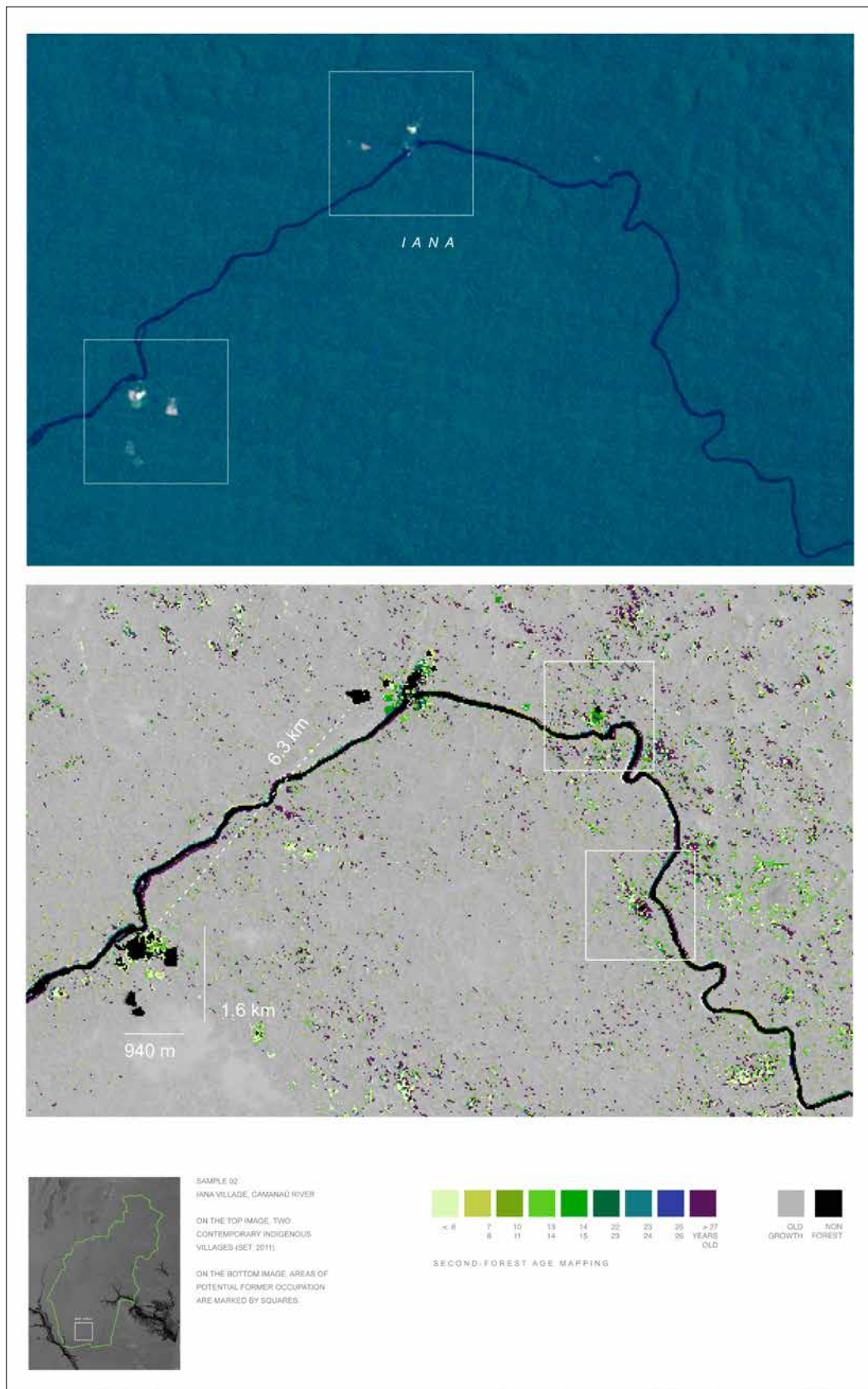
de esta epistemología estaba íntimamente ligada a los imaginarios coloniales que funcionaban como uno de los instrumentos más poderosos y duraderos en el proceso histórico de exterminio de los pueblos indígenas.



Fuente: Paulo Tavares

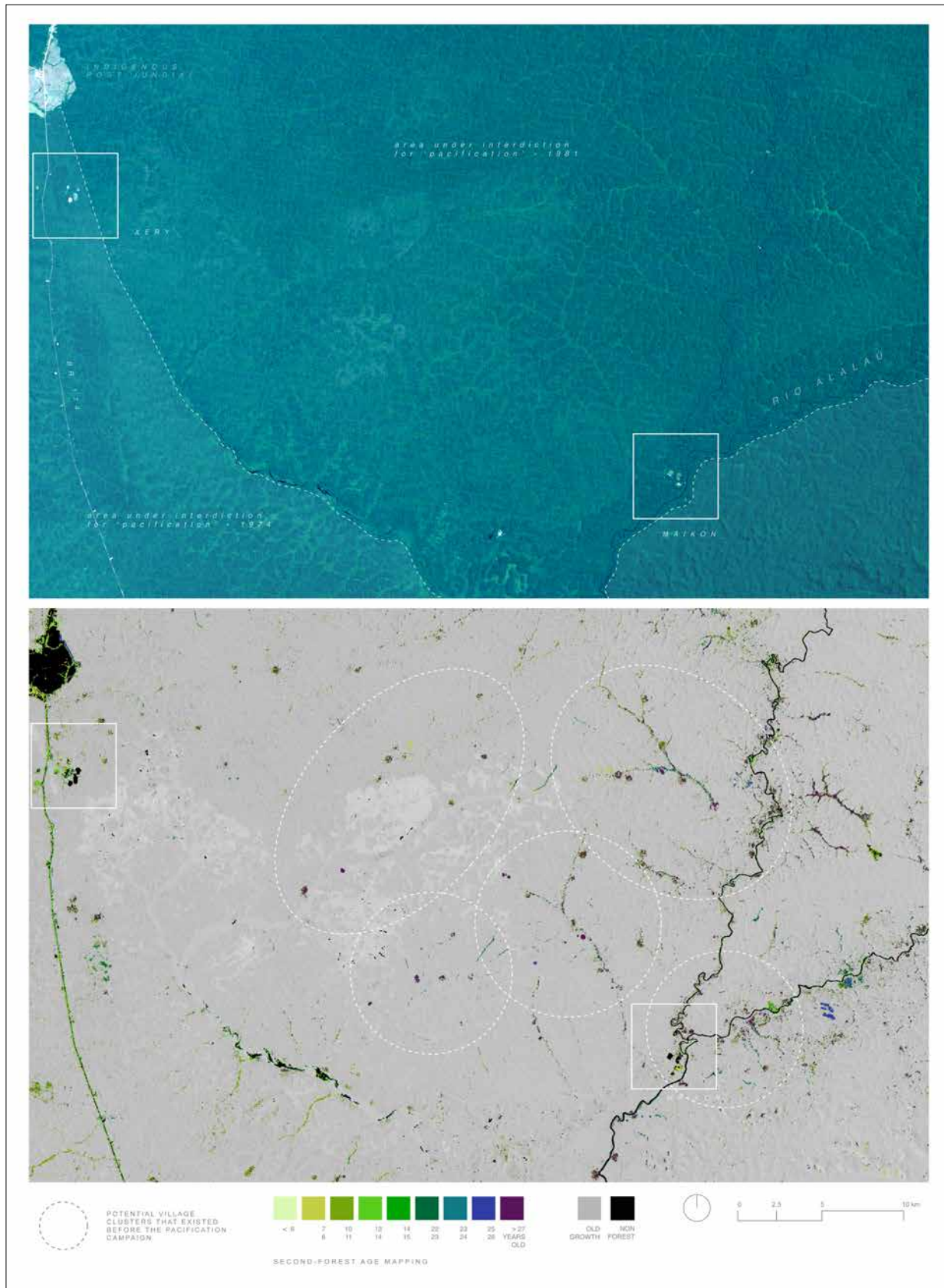
Marcas del paisaje. Marcas de formaciones forestales secundarias que indican antiguos sitios de pueblos indígenas que comenzaron a crecer en los años setenta, cuando la violencia era más intensa en el territorio de Waimiri Atoari

Las ruinas de los bosques demuestran que la violencia ha sido un factor determinante en la configuración de las representaciones y los alrededores de la Amazonia, al mismo tiempo que hacen visibles cómo las nociones dominantes



Fuente: Paulo Tavares

Arqueología forestal. Mapeo de la edad de la selva secundaria aplicado en la región del río Alalauá en el centro del territorio Waimiri Atoari, mostrando la huella dejada por los pueblos indígenas contemporáneos y posibles satélites de asentamientos que indican la ocupación anterior



Fuente: Paulo Tavares

Bosque construido. Mapa de agrupaciones de aldeas Waimiri Atroari que existían antes de la violencia en el río alto Alalaú

de la sociedad y la naturaleza sirvieron para comunicar y legitimar tal violencia. A medida que investigamos y aprendemos las historias de estas ruinas vivientes, se comienzan a dibujar modos alternativos de concebir y organizar las relaciones entre poblaciones y medioambientes, describiendo tecnologías espaciales capaces de “producir naturaleza”. Estos diseños que mejoran la biodiversidad están bien vivos en la memoria y en las prácticas cotidianas de los pueblos del bosque. La protección de sus derechos sobre la tierra también significa el diseño de un sistema ecológico planetario más resistente frente a las ruinas del cambio climático antropogénico.

La descolonización de la ciudad

Observar la arquitectura de los modos indígenas de ocupación en la Amazonia requiere un cambio radical de perspectiva y un ejercicio de descolonización de la mirada. En lugar de ver la ausencia de la ciudad, es el concepto mismo de la ciudad que debe ser ampliado y transformado. La distribución espacial de árboles y especies vegetales, la geometría del follaje, el mosaico de patrones de las formaciones forestales, las ligeras variaciones en el relieve y la topografía, las diferencias en la composición del suelo, etc., son índices de formas específicas de conjuntos sociales, “registros arquitecturales” que son el producto de complejas interacciones entre las acciones humanas, las fuerzas ambientales y la agencia de otras entidades no humanas, ellos mismos coparticipantes en el “diseño del bosque”.

Así como los arquitectos leen la ciudad como un palimpsesto histórico producido por fuerzas sociales que se codifican en forma material –capas sobre capas de ruinas que constituyen un tejido vivo de relaciones sociales– la Amazonia debe ser interpretada a través de la sintaxis del diseño urbano o bien el concepto de lo urbano debe ser elaborado de nuevo para incorporar esta naturaleza construida presente en el bosque. La relación entre la figura y el terreno es subvertida, en la medida en que lo que se define como el entorno, la antítesis o el exterior del espacio cívico se incorpora como parte constitutiva de una “polis expandida” dentro de la cual los seres humanos y los no-humanos cohabitan en un espacio político común. En ese proceso, se hace visible todo un nuevo concepto de lo urbano, cuyos contornos abarcan una arena política de especies múltiples, y que inicialmente podemos encontrar difícil de reconocer porque durante demasiado tiempo nuestra perspectiva se ha limitado a los recintos epistémicos de la ciudad occidental.

El “otro” radical que presenta el bosque no es un paisaje completamente natural, la negación absoluta o la antítesis del entorno urbano culturalmente saturado. Es una forma de arquitectura completamente diferente, que desafía los fundamentos coloniales de las categorías hegemónicas de conocimiento al demostrar las estructuras de poder que sostienen y la violencia que infligen.

Bibliografía

- Balée, William L. (1989). "The Culture of Amazonian Forests". En: *Advances in Economic Botany*, vol. 7, 1989, pp. 1-21.
- Balée, William L. (2013). *Cultural Forests of the Amazon: A Historical Ecology of People and Their Landscapes*. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.
- Balza, Guilherme (2012). *Comissão da Verdade apura mortes de índios que podem quintuplicar vítimas da ditadura*. Disponible en: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/11/12/comissao-da-verdade-apura-mortes-de-indios-que-podem-quintuplicar-vitimas-da-ditadura.htm> Fecha de la última consulta: agosto 2017.
- Clastres, Pierre (1987). *Society Against The State: Essays in Political Anthropology*. New York: Zone Books.
- Clastres, Pierre (2010). *Archeology of Violence*. Los Angeles: Semiotext(e).
- Comissão Nacional da Verdade (2014), *Final Report, Volume II: Thematic Texts*. December 2014.
- Costa, Lúcio (1957). *Memorial do Plano Piloto de Brasília*. (El documento original está en el archivo DF Archive, Brasília).
- Miliken, William *et al.* (1992), *Ethnobotany of the Waimiri Atroari Indians of Brazil*. Chicago: University of Chicago Press.
- Silva, Golbery do Couto e (1967). *Geopolítica do Brasil*. Rio de Janeiro: Livraria J. Olympio.

ENTREVISTA A ELIZABETH LIRA

Incluir la salud mental en la agenda de los derechos humanos

POR CAROLINA AGUILERA*

En esta entrevista, la psicóloga Elizabeth Lira hace un recorrido por su trayectoria en el campo de los derechos humanos, contando su experiencia desde su trabajo en los organismos ligados a las iglesias cristianas durante la dictadura hasta su participación en los programas de reparación, la Mesa de Diálogo de derechos humanos y la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante los gobiernos de la transición democrática. En este derrotero, la intervención terapéutica, la denuncia humanitaria y la reflexión historiográfica permiten enhebrar temas en apariencia tan disímiles como la reconciliación política y la salud mental durante la dictadura y la democracia en Chile. En reconocimiento a su destacada trayectoria, Lira ha recibido en 2017 el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile.

.....

*Carolina Aguilera es Socióloga por la Universidad de Chile y Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Universidad Católica de Chile. Actualmente realiza sus estudios posdoctorales financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CONICYT) y se desempeña como investigadora asociada al Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Es, además, Investigadora Adjunta del COES. Esta entrevista fue realizada el 28 de octubre de 2015. [El trabajo de edición de esta entrevista, incluida la añadidura de las notas al pie, ha sido responsabilidad de María Soledad Catoggio, coordinadora de esta sección de *Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria.*]



Fotografía: Andrés Aguirre

Carolina Aguilera: ¿Cuándo y cómo comenzaste a trabajar en torno a los derechos humanos?

Elizabeth Lira: Antes del Golpe de Estado (1973), yo trabajaba en un programa de educación para dirigentes campesinos de todo el país, en el Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Católica de Chile. El programa empezó a inicios del año 1969 dentro del marco de la Ley de Sindicalización Campesina, que daba financiamiento para que las organizaciones pudieran contratar servicios de formación.¹ Estaba en desarrollo la Reforma Agraria y había una gran necesi-

dad de capacitar a la gente que era beneficiaria de esas políticas. Los dirigentes campesinos venían a Santiago y estaban internados durante tres meses en un programa con clases y actividades diarias. En ese programa se enseñaba el marco histórico, político, cultural y social de Chile, se incluían nociones de economía y de administración, de expresión oral, así como la posibilidad de ver cine y obras de teatro. También se visitaban empresas y se enseñaban otras muchas cosas que tenía que saber un dirigente para arreglárselas con los requerimientos del proceso de Reforma Agraria, en general, en torno al tema de la organización.

1. La Ley N° 16.625 de Sindicalización Campesina fue promulgada el 26 de abril de 1967, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y estableció, entre otras cuestiones, la promoción de la educación gremial, técnica y general de sus asociados como una de las finalidades de las asociaciones sindicales. Véase <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-97799.html>

Era difícil imaginarse, para alguien que no estaba en el campo, lo precaria y limitada que era esa vida. Hasta el año 1967 el trabajo campesino no se pagaba en dinero, sino en especies. Y también se pagaba en fichas para un almacén dentro del fundo, la “pulpería”. A partir de la ley de sindicalización campesina se estableció que se les debía pagar en dinero al menos el 75% del sueldo. Hasta entonces los campesinos en la práctica no tenían libertad para poder comprar, no solo porque su salario era escaso, sino porque no tenían salario en dinero. Mucha gente veía eso como algo “bueno”, dado que se aseguraba el alimento y los bienes básicos. Al pagar en dinero, del salario pactado se hacían descuentos para la previsión y la capacidad adquisitiva disminuía progresivamente durante el año por la inflación, porque los ajustes salariales siempre eran inferiores a esa inflación. En ese contexto de cambios legales y sociales en el campo empezamos a capacitarlos. Pero, después del año 1972, no se pudo continuar con el programa. El nivel de polarización en la sociedad era creciente y no era posible sentar juntos en una misma sala a personas de distintas ideas políticas (al menos eso ocurrió con los dirigentes campesinos), entonces cualquier espacio de este tipo se transformaba en un espacio de conflicto potencial entre diferentes visiones sobre el proceso político.

Después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, la mayoría de quienes habían sido alumnos nuestros terminaron presos; muchos murieron, otros desaparecieron. Algunos fueron expulsados del campo. Ese fue un punto muy decisivo para mí. Fue la situación concreta de esas personas la que me empezó a preocupar. Uno de los dirigentes que nosotros habíamos tenido como alumno cayó preso y fue muy torturado y, a raíz de la tortura, desarrolló un daño cerebral y un deterioro progresivo. Verlo en ese proceso y advertir que había muy pocas posibilidades de respuesta y apoyo era muy difícil.

C.A.: ¿Qué hicieron entonces?

E. L.: Frente a los casos como el suyo, existía mucha precariedad en la forma de atención y apoyo. Se crearon organismos de derechos humanos a los que se podía acudir, pero al inicio se desarrolló una respuesta de emergencia muy limitada. O sea, nos preguntábamos: ¿cómo resuelves las necesidades de salud mental de la gente con recursos que no existen y con redes destruidas? Ese primer tiempo fue muy difícil. Eran también momentos en los que una veía a la gente en las peores circunstancias: expulsados del campo, recién salidos de la cárcel, con situaciones económicas imposibles, con problemas familiares y con los hijos y todo. Entonces el tema de la salud mental era un tema muy complejo, porque las personas comenzaban a estar afectadas por la tortura o por la represión general y luego se veían afectadas por los efectos de la situación represiva, en especial el desarraigo. Porque para proteger sus vidas tenían que salir del campo o, en muchos casos, eran expulsados por haber sido dirigentes, acusados de ser “agitadores políticos”. La situación de estos alumnos fue para mí un tema movilizador. Yo me empecé a vincular con las redes de ayuda social, legal y psicosocial de derechos humanos a raíz de esto. Más tarde, por la vinculación, a propósito de la situación de personas que yo conocía y que estaban en un gran desamparo, llegué a trabajar en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), a partir de 1978.

C. A.: Cuando tú llegaste a FASIC, ¿ya existía el programa de apoyo psicológico?

E. L.: Sí, claro. Se había organizado unos meses antes. La Vicaría de la Solidaridad, y antes el Comité Ecu­ménico de Cooperación para la Paz (COPACHI),² empezaron con la defensa legal, presentando recursos de amparo y buscando formas de proteger a las per-

2. El Comité Ecu­ménico de Cooperación para la Paz, llamado Comité Pro Paz o COPACHI, fue creado un mes después del golpe de Estado en Chile y articuló a algunas iglesias cristianas (católica, luterana y otras) y a la comunidad judía. Fue presidido por los obispos Fernando Ariztía (católico) y Helmut Frenz (luterano). Funcionó hasta 1975 y debió cerrar ante las presiones directas de Augusto Pinochet, quien llegó a prohibir el ingreso al país del obispo Frenz. La Vicaría de la Solidaridad, un organismo pastoral de la iglesia católica fue creado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, bajo su dependencia; funcionó entre 1976 y 1992. Representantes de la iglesia metodista, pentecostal, ortodoxa, católica y luterana formaron el comité para los refugiados (CONAR) y después la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.

ELIZABETH LIRA: psicóloga, investigadora y activista

Elizabeth Lira Kornfeld nació el 5 de abril de 1944 en Chile. Es Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica, Licenciada en Ciencias del Desarrollo por el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES) y Terapeuta Familiar. Inició su carrera profesional en los años setenta como parte del Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Católica, en calidad de investigadora y desde entonces se volcó de lleno al trabajo en el campo de los derechos humanos. Formó parte de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), fue miembro del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) e integró el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales (ILADES). Desde 2014 a la actualidad ejerce el cargo de Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado.

Se ha destacado como miembro de la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech I, y de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura 2010-2011, conocida como Comisión Valech II. Por su destacada trayectoria acumula más de diez premios y distinciones, entre los cuales puede mencionarse el Premio Nacional Colegio de Psicólogos en 1983, el Nevitt Sanford Award de la *International Society of Political Psychology* de 1998, el International Humanitarian Award otorgado por la *American Psychological Association* en 2002 y el recientemente otorgado, en 2017, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile.

Ha publicado más de 20 libros (muchos de ellos en coautoría con su colega y amigo Brian Loveman), entre los cuales puede desatacarse su “trilogía” sobre la reconciliación política a lo largo de la historia de Chile, compuesta por *Las suaves cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política 1814-1932* (LOM, 1999), *Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política 1932-1994* (LOM, 2000) y *El Espejismo de la Reconciliación Política. Chile 1990-2002* (LOM, 2002). A su vez, las políticas de reparación han sido otro importante eje de sus producciones, entre los cuales es posible mencionar *Reparación, derechos humanos y salud mental* (ILAS Chile-América/CESOC, 1997); *Políticas de Reparación Chile: 1990-2004* (LOM, 2005) y *Los actos de la dictadura. Comisión Investigadora 1931* (LOM, 2006). Sus preocupaciones actuales giran en torno al papel de la justicia en estos procesos y han dado lugar a su reciente libro *Poder Judicial y Conflictos Políticos. Chile 1925-1958* (LOM, 2014).

sonas para evitar que fueran detenidas. La asistencia médica empezó con horas voluntarias de profesionales de salud y, posteriormente, se organizaron equipos de atención. Así se formó el programa de salud de la Vicaría (1976) y el programa médico psiquiátrico en FASIC (1977). En la Vicaría, y antes en el Comité, la atención se había iniciado ofreciéndola en las consultas privadas de algunos profesionales. Al final de la dictadura había por lo menos seis ONGs, algunas de ellas con trabajo solo en Santiago, otras en algunas regiones, con focos distintos (niños, psicoterapia familiar, atención neurológica y psiquiátrica, atención

integral) que prestaban servicios de salud mental de manera permanente.

Tal vez, desde 1981 o 1982 se empezó a cambiar el enfoque inicial, que era actuar como respuesta a la emergencia y para proporcionar atención en crisis. Es decir, se comienza a pensar que la dictadura podía durar varios años y que, por lo tanto, había que ofrecer respuestas permanentes y duraderas. Estos organismos, a la par que proporcionaban atención psicológica y psiquiátrica, apuntaron a un enfoque más integral incorporando asistencia social e intervenciones clínicas y psicosociales de familias y grupos. Esas intervencio-

Desde 1981 o 1982 se empezó a cambiar el enfoque inicial, que era actuar en respuesta a la emergencia y proporcionar atención en crisis. La dictadura podía durar varios años, había que ofrecer respuestas permanentes y duraderas. Estas ONG's apuntaron a un enfoque más integral incorporando asistencia social e intervenciones clínicas y psicosociales de familias y grupos.

nes reflejaban lo que se consideraba relevante para los psicólogos, psiquiatras, médicos y asistentes sociales en esa época. Es importante señalar que ninguno de los que trabajábamos en esos organismos tenía formación, ni experiencia, para enfrentar situaciones

tan críticas, en las que además los problemas eran acumulativos. O sea, había familias donde había una o dos personas en prisión y, a la vez, se habían quedado sin trabajo y estaban viviendo con algún pariente, tenían niños pequeños que se perturbaban por todo lo que ocurría y los adultos necesitaban salir a buscar a alguien que se encontraba desaparecido y, además, debían procurar el sustento de la familia. En FASIC se formó un equipo médico psiquiátrico que comenzó a trabajar instalado físicamente en la institución, a partir de los últimos meses de 1977. Eso marcaba una diferencia con el trabajo anterior: permitía la consolidación de un equipo y lograba condiciones para una reflexión compartida sobre los problemas que traían los consultantes, con tiempo dedicado a examinar las circunstancias y el padecimiento presentado de acuerdo a las características de las personas, los problemas que les afectaban y las posibilidades de intervención.

C.A.: ¿Había distintos perfiles entre los afectados que trataba FASIC?

E.L.: La represión no fue aleatoria, al contrario de lo que pudiera parecer al examinar las cifras de deteni-



Fotografía: Andrés Aguirre

dos en los primeros meses del golpe. Hubo un grupo de gente que fue selectivamente muy afectada: los dirigentes de las organizaciones políticas y sociales vinculados a la Unidad Popular, los dirigentes de los partidos políticos de la Unidad Popular que fueron ilegalizados desde el momento en que se ilegalizaron los partidos. A ello se agrega la persecución al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esto se puede comprobar analizando los perfiles de las víctimas reconocidas en las distintas comisiones creadas con ese propósito.

FASIC atendía fundamentalmente a los presos políticos que, en ese tiempo, tenían una posibilidad de salir del país por el Decreto 504.³ Entonces, mucha gente salió al exilio en condiciones mejores o peores, variando de acuerdo con los países pero también de acuerdo con la historia previa de la persona. Era muy distinto si tú eras un médico y tenías que irte del país y te ibas a los Estados Unidos donde habías estudiado la especialidad, o si siendo médico podías hacer la especialidad en el país de exilio y volver luego al país “muy calificado”; que si siendo chofer del INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) o de algún otro organismo público tenías que irte a Alemania o a Suecia. A lo mejor tú podías ser chofer en Alemania y daba lo mismo, pero a lo mejor no. Tus posibilidades dependían de los programas para los refugiados en cada país, del aprendizaje del idioma, de la edad y de tu formación y experiencias previas. El exilio fue muy complejo en cuanto a las posibilidades y al tipo de problemas que la gente tuvo que enfrentar. Y sabemos poco de eso, porque hubo una visión muy idealizada (y a la vez negadora de sus impactos reales) de que el exilio era “mucho mejor que vivir en Chile”. Y para alguna gente lo fue y, claramente, pudieron educar a los hijos y vivir con mucha más comodidad de la que podrían haber vivido acá. Pero también con un conjunto de pérdidas y de situaciones muy complicadas, que para muchos se hicieron definitivas, ya que se quedaron fuera de Chile. En relación con el trabajo de atención en FASIC entre 1978 y 1979, a nosotros nos abismaba y golpeaba mucho lo que escuchábamos. Era muy abrumador ver

a personas tan devastadas y, al mismo tiempo, estar viviendo en el mismo lugar y en el mismo contexto, aunque sin estar en su situación, por otras circunstancias. Las posibilidades de intervenir eficazmente para que la persona recuperara mayor control en su vida y pudiera procesar lo que le había ocurrido eran muy difíciles y limitadas. Nosotros no teníamos mucha idea de qué hacer con la complejidad del padecimiento de las personas. En el tipo de formación clínica y profesional de la época esos temas no estaban incorporados. Nos tomó un par de años estudiar, discutir, aprender, ensayar, buscar formas de intervención que pudieran ser mejores. Durante los primeros cinco años en el programa médico psiquiátrico de FASIC éramos únicamente mujeres. Hacíamos lo mejor que podíamos con lo que sabíamos: escuchar, acompañar, solidarizar. Yo estoy segura de que para mucha gente hizo una gran diferencia el haber podido ir a un lugar donde alguien escuchaba; sobre todo para quienes no tenían con quien hablar de lo que les había ocurrido.

C.A.: ¿Entonces se pusieron a estudiar?

E. L.: Según mis recuerdos, era muy angustioso darse cuenta de que sabíamos tan poco y que, por más que estudiáramos, íbamos detrás del proceso. Los problemas que traía la gente eran tan graves, ¡tan acumulados! O sea, no era solo la tortura, eran los problemas, por ejemplo, de los campesinos que tuvieron que dejar el campo y se tuvieron que ir a la ciudad a vivir como pobladores pobres, en lugares donde no había ni un árbol. Entonces había desarraigos que fueron terribles

En el tipo de formación clínica y profesional de la época esos temas no estaban incorporados.

Nos tomó un par de años estudiar, discutir, ensayar, buscar formas de intervención y aprender qué cosas podrían ser mejores.

3. Este decreto era una forma de indulto. Permitía conmutar la pena de cárcel por “extrañamiento”, es decir, quienes habían sido condenados por tribunales militares podían solicitar salir del país y cumplir la condena en el exilio.

para las personas y sus familias. Uno de los esfuerzos que se hicieron en ese período fue documentar, sistematizar, escribir, tratando de dar cuenta de lo que les pasaba, de lo que les ocurría a las personas y describir mucho lo que hacíamos, porque era la única manera de poder mejorar. Y creo que así fue cómo partimos.

La elaboración del trauma social

C. A.: ¿Ahí nace esa idea sobre el testimonio como una forma de elaboración de esas experiencias traumáticas?

E.L.: Claro. Eso lo empezamos a hacer en esos años: 1978, 1979. Primero por nuestra imposibilidad de tomar nota de lo que la gente decía, porque nos decían cosas terribles y era más importante estar en conexión con la persona que documentar su experiencia. Una manera de poder registrar lo que nos decían era grabarlo y después alguien del equipo lo transcribía y, luego, se volvía a conversar con el paciente sobre el documento que su relato había permitido producir. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que este método involucraba muchas cosas: era una experiencia muy potente poder contar lo que les había sucedido y, para algunos, tenía un valor enorme. Por ejemplo, para alguien que era escasamente alfabeto y que difícilmente habría podido escribir veinte páginas, leer esas páginas con sus palabras tenía el enorme valor de poder ver ahí escrito lo que había contado. También tenía valor porque se lo podía dar a su mujer, a sus hijos, a su familia y sentir “no tengo que volverlo a contar, aquí está”. A su vez era valioso porque en ese tiempo había un activismo importante en el exilio para reforzar las denuncias de las violaciones de Derechos Humanos ante Naciones Unidas, lo que se traducía en antecedentes para la condena del país, anualmente, por las violaciones de derechos humanos que continuaban ocurriendo. También servía para la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus informes sobre Chile o en los informes anuales del organismo que daban seguimiento a los casos. Entonces, los testimonios tenían un efecto terapéutico en las personas por varias razones. El testimonio tiene una dimensión de catarsis. A todas las personas que sufren

de algo muy fuerte les hace bien poder expresar sus ideas y sus emociones y relatar lo sucedido. En las situaciones traumáticas no siempre es posible poner palabras a las experiencias, pero en el caso de poder hacerlo se hacía con una gran carga emocional que aliviaba transitoriamente a la persona. Pero no era solo una catarsis, eso daba lugar a una forma de trabajar, elaborando algunos significados que estaban ahí. Yo creo que trabajar de esa manera nos enseñó mucho. Las personas necesitaban comunicar lo que les había sucedido, contar como habían vivido hasta ese momento con esa historia y cómo lo entendían con sus contradicciones, sus desconciertos, sus penas, sus vergüenzas y sus culpas.

A ello se agregaba la necesidad de confirmar que estos hechos efectivamente habían sucedido. Tenemos que pensar que en ese tiempo el discurso oficial era que la tortura y la desaparición de personas “eran un invento”, que nada de lo que las personas relataban como vivido había existido jamás. Era también muy terrible para las personas llegar a contarlo y que otros les dijeran, por ejemplo, en una reunión familiar “no, pero eso no puede ser”. Entonces, tenían la necesidad de que alguien les dijera “sí, yo le creo, esto ha sido como usted dice”. Esto tiene mucho valor en el contexto de la comunicación, con otro dispuesto a escuchar y a creer la posibilidad de procesar experiencias muy complejas, muy difíciles de poner en palabras, como la humillación, el atropello a la intimidad, la violación sexual, el dolor llevado al extremo, el temor a morir. El decirse a otra persona y recibir de ella apoyo moral por el solo hecho de escuchar con interés y empatía era importante. Esto, en cierta forma podría haberlo hecho cualquiera, y es lo que naturalmente hacemos todos cuando consolamos a las personas que tienen alguna tristeza o algún problema, pero eso era el inicio. El trabajo de salud mental que se hizo en ese tiempo apuntaba a que la persona pudiera integrar la experiencia en el conjunto de su vida, a que la tortura no fuera todo. Era como decirle después de ese trabajo terapéutico, al momento de cerrar: “usted no es la pura experiencia de la tortura. Ha sido un dirigente social, político, ha sido una persona con una trayectoria, tiene una vida hacia atrás y una vida después de esa violencia. Esa agresión no lo ha demolido”. Eso era algo muy importante en ese proceso.

El trabajo de salud mental apuntaba a que la persona pudiera integrar la experiencia de la tortura en el conjunto de su vida. Era como decirle: “usted no es la pura experiencia de la tortura, ha sido un dirigente social, político. Ha sido una persona con una trayectoria, tiene una vida hacia atrás y una vida después de esa violencia, esa agresión no lo ha demolido”.

C.A.: Hablas del trabajo vinculado a un tiempo histórico específico ¿Fueron cambiando el tipo de intervenciones terapéuticas?

E.L.: El relato era emocionalmente muy potente cuando nadie en la sociedad hablaba de estas cosas, pero cuando empezó a decirse en todas partes (en revistas de oposición, en reuniones públicas, en diversos documentos), esa verdad escondida que se hacía parcialmente pública en el espacio terapéutico fue perdiendo su impacto emocional. La comunicación ya no tenía ese mismo valor de contención, de novedad para la propia persona; pero permitía ver su experiencia y su padecimiento como parte de su historia personal y de la historia nacional. Si la persona escucha historias similares a la suya, contadas por otras personas que sufrieron algo parecido, puede sentir y darse cuenta de que la suya es otra historia más y sin embargo es única, es la suya. Eso empieza a pasar poco después del año 1980, lo que tiene aspectos positivos porque da lugar a formas de elaboración, pero resta importancia al testimonio de la experiencia represiva como instrumento terapéutico como lo era al inicio.

Los familiares de detenidos desaparecidos, especialmente las mujeres, contaban muy a menudo la his-

toria de la desaparición de su familiar como parte de la denuncia y de la búsqueda. Precisamente por eso, ese testimonio ya no tenía el valor emocional directo para sí mismas sino que tenía un valor político y un valor social. El sentido otorgado a su quehacer permitía tramitar su propia angustia. Pero no el relato por sí mismo, el que se repetía muchas veces sin emoción, se lo contaba de una manera disociada. Lo que es normal, porque nadie puede pasar desgarrado todo el tiempo y la única manera de poder mantener la denuncia y la búsqueda era lograr contarla como si no te pasara a ti. Fue lo que me dijo una persona una vez: “Lo trato de contar como si no fuera mi historia, porque si pienso que es mi historia, me voy a poner a llorar. Entonces, para poder contarla, tengo que pensar que esto es de otro”.

De lo individual a lo público

C.A.: Esto, me imagino, se fue vinculando con un trabajo más reflexivo, al punto que te has transformado en investigadora de estos temas ¿Me puedes contar cómo fue ese tránsito?

E. L.: Tomamos una decisión muy precoz como equipo, porque lo que estábamos haciendo tenía que ser bien hecho. Hay problemas éticos muy serios cuando uno, por ignorancia, comete errores con las personas: casi siempre los errores técnicos son problemas éticos. Entonces teníamos que saber más, pero para saber más teníamos que estudiar. Al mismo tiempo, nos parecía que había que hacer una denuncia académica en otros lugares. Es decir, una denuncia en instancias internacionales de académicos. Lo que nos interesaba era poner la ciencia al servicio de que se terminara la represión y la tortura.

Durante la dictadura, visitaron Chile por casos de derechos humanos varias misiones de científicos, de profesionales y de académicos (y de artistas y estrellas de cine). En esas misiones participaron, incluso, algunos Premios Nobel en algunas ciencias. La organización *American Association for Advancement of Sciences*, por ejemplo, envió una delegación en 1981 para entrevistarse con el gobierno por el caso de tres médicos que se encontraban desaparecidos por más



Elizabeth Lira recorre el Memorial "Paine, un lugar para la memoria", junto a Rainer Huhle del Centro de DDHH de Nuremberg y Vicepresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. Enero de 2017

Fotografía: Evelyn Hevia J.

El trabajo tenía una limitación enorme, porque nosotros podríamos haber pasado el resto de nuestras vidas trabajando con problemas que se vivían como si fueran personales, individuales y privados, aunque se trataba simultáneamente de problemas públicos y políticos.

de 20 días y algunos de ellos habían estudiado en los Estados Unidos. Los médicos aparecieron ante la presión internacional de sus colegas. A raíz de eso, se formó la organización *Physicians for Human Rights* en Estados Unidos. En el año 1985 vino una misión de la *American Psychiatric Association* y de la *American Psychological Association* a evaluar cuál era el riesgo que corrían los colegas médicos, los psiquiatras, y los psicólogos, trabajando con las víctimas. Ese tipo de diálogo y de denuncia obligaba a una rigurosidad mayor, a tratar de dar cuenta en un lenguaje menos coloquial, con menos presupuestos de todo tipo y con menos desconocimiento. Se trataba de intentar explicar qué era lo que efectivamente pasaba y de expli-

carlo de manera que eso valiera por la fuerza de los hechos, independientemente de las ideas políticas de los profesionales. La idea no era convencer a los convencidos, sino movilizar el repudio a la tortura y a las desapariciones, denunciar las consecuencias en la salud mental de un régimen dictatorial, más allá de las ideas políticas de las personas. Por eso, la denuncia debía fundarse en hechos, argumentos y razonamientos concretos. Esto era muy importante para nosotros. Muchos de los que participamos en esas tareas habíamos iniciado una carrera académica, fuimos expulsados de las universidades y terminamos instalados en esas tareas.

Empecé a pensar que este trabajo tenía una limitación

enorme, que era que nosotros podríamos pasar el resto de nuestra vida trabajando con problemas que se vivían como si fueran personales, individuales y privados, cuando se trataba simultáneamente de problemas públicos y políticos. Me parece que esa visión marcó nuestras reflexiones de mediados y fines de la década de 1980. O sea, había que trabajar en función del cambio. Pero no solo para terminar con la dictadura de Pinochet sino en función de qué íbamos a hacer cuando tuviéramos que enfrentar las consecuencias sobre las personas, una vez terminada la dictadura. Es decir, cómo haríamos frente a los efectos del exilio y del retorno –que ya se veían en algunas familias– y los efectos de la prisión política y de la tortura. Por otra parte, nos preguntábamos cuáles serían las consecuencias de la desaparición forzada, del miedo, de las cesantías prolongadas, de la represión en general sobre la sociedad. Nos parecía necesario señalar la necesidad de considerar los efectos de la represión política sobre la salud mental de las personas al pensar la transición. Y ése fue el tema sobre el cual trabajamos durante varios años.

C. A.: ¿Y esa fase cómo se fue dando?

E.L.: Se dio de muchas maneras. Pero, casualmente, ocurrió una bien interesante. Cuando se hizo el plebiscito, el 5 de octubre de 1988, para rechazar la continuidad de Pinochet, presentado nuevamente como candidato a la presidencia de la República, se organizó una red muy grande de control de la votación. Esa red articuló a organizaciones no gubernamentales, a profesionales y colegios profesionales, a la Asamblea de la Civilidad;⁴ a distintas organizaciones que eran muy transversales. Estas redes dieron lugar posteriormente a la preparación del programa de gobierno de Patricio Aylwin. Ese programa de gobierno, que se publicó en julio del año 1989 en el diario *La Época*, fue construido por más de mil profesionales por áreas temáticas. Hay un reportaje de la revista *APSI* que dio cuenta de cómo se hizo. De hecho, por ejemplo, nosotros, como equipo en el Instituto Latinoamericano

de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) –del cual yo formaba parte desde 1988–, colaboramos con la preparación del Programa de Salud Mental Nacional, en el Área de Salud, para incluir el tema de las violaciones a los Derechos Humanos y sus secuelas. En ese programa contribuimos en varias instancias: participamos en la reflexión sobre la posibilidad de establecer una comisión de la Verdad, así como en la propuesta de que se creara en el Programa de Salud un programa de reparación en salud; trabajamos en la articulación de la educación en Derechos Humanos –hoy diríamos “memoria”, pero en aquel tiempo no se hablaba de esa manera–. Luego continuamos en equipos más pequeños, afinando las propuestas y pensando que algunas se transformarían en proyectos de ley. De hecho, fueron insumos para las políticas de reparación. En ese período de la transición, hubo una contribución muy potente de la sociedad civil, desde las ONGs que estaban especializadas en distintos temas. Esa fue la forma.

La transición y los programas de reparación

C. A.: ¿Cómo fue que esas propuestas se transformaron en programas?

E. L.: El Gobierno de Aylwin empezó el 11 de marzo y el 20 de marzo se enviaron varios proyectos de ley al Congreso, entre ellos el programa de la Oficina Nacional del Retorno. Esta oficina fue creada en agosto del año 1990 como una iniciativa para la reintegración de las personas que venían del exilio, incluyendo de manera significativa el tema de la salud mental. En ese marco se hicieron convenios con instituciones, con organizaciones, con los hospitales. Pero, al mismo tiempo, en abril de 1990, el Gobierno creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y la Comisión pidió ayuda en algunos temas para responder a su mandato. La Comisión envió una carta a más de mil personas pidiendo propuestas sobre las medidas de reparación. Recibió no más de un diez por ciento de respuestas. Entre las

4. En el contexto de las Jornadas de Protesta de mediados de los años ochenta tuvieron lugar diversas alianzas de oposición al régimen. La Asamblea Nacional de la Civilidad reunió a sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales y partidos políticos de cara al plebiscito de 1988.

propuestas de reparación, la mayoría planteó considerar la salud mental. El Informe de la Comisión, conocido como Informe Rettig, recomendó expresamente la creación de un programa de salud y a la salud mental como medida de reparación al mismo tiempo que hacía mención expresa a las secuelas que dejaron las violaciones de derechos humanos, la desaparición y la muerte de personas. Esto tuvo que ver con las conversaciones, los trabajos y las colaboraciones con la Comisión de los equipos de salud mental que tenían los organismos de derechos humanos.

En esa época, yo trabajé en una comisión pequeña del gobierno para recoger las expectativas de las organizaciones de víctimas sobre las políticas de derechos humanos, para captar la percepción que la sociedad tenía de los temas vinculados a derechos humanos. En ese tiempo había un gran temor sobre la fragilidad de estos procesos. Lo que hoy vemos retrospectivamente como muy estable se vivía cotidianamente como muy frágil e inestable, había un exceso de preocupación por caminar con mucha lentitud para ir consolidando cada una de las cosas y no arriesgar el conjunto. En el año 1990 también hubo situaciones muy críticas, como el hallazgo de los cuerpos en la fosa de Pisagua a mediados de mayo. Colaboramos desde ILAS con el trabajo que se realizó en Pisagua y luego en Iquique. Unas colegas de ILAS se integraron con los equipos de salud mental que acompañaron y atendieron a las familias, las que en su mayoría eran de Iquique, durante el proceso de identificación y entrega de los restos para su sepultación.⁵

C. A.: ¿Cómo hicieron para definir esos límites: cómo y hasta dónde avanzar y en qué momento mejor detenerse?

E. L.: Mira, son cosas muy complejas. Yo creo que la transición fue un pacto: Pinochet tenía todo el poder, incluso tanto como para no considerar el plebiscito y tomar la decisión de seguir adelante. Entonces, las presiones internacionales tuvieron un rol decisivo, pero también las tensiones internas en los sectores que lo apoyaban e, incluso, en las fuerzas armadas, que posibilitaron que se implementara la transición tal como había sido prevista en la Constitución de 1980. Pero fue una transición extraordinariamente controlada, porque se pensaba que si el Comandante en Jefe, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema – por lo tanto, teóricamente, el Poder Judicial –, estaban alineados con el pasado de la dictadura, entonces el espacio de movimiento que tenía el Gobierno era extraordinariamente limitado. A su vez, la existencia de senadores designados hizo perder fuerza al Gobierno en ese Congreso recién electo. En ese marco, de los tres poderes del Estado, la nueva coalición de gobierno ejercía el Poder Ejecutivo, con una administración pública heredada de la dictadura. Mirando las condiciones de poder de la época, creo que precisamente en el gobierno de Aylwin las cosas se llevaron al límite del poder que se tenía. Patricio Aylwin como presidente de la República no aceptó las presiones del “ejercicio de alistamiento y enlace”, en diciembre de 1990, ni “el boinazo” de los militares en 1993.⁶ Para el presidente Aylwin fue claro que eso se hacía en función de los intereses privados de Pinochet (los llamados “pinocheques” pagados por el ejército a su hijo mayor), y no se hacía en función del tema de los derechos humanos. Por lo tanto, en eso no retrocedió y todo lo que se propuso hacer desde el programa de gobierno se hizo. Sin embargo había una dificultad importante: todos esos programas se pensaron para una transición de

5. El 16 de mayo de 1990 se levantó la vigilancia militar del cementerio de Pisagua. El 2 de junio de 1990 se procedió a abrir una fosa clandestina denunciada previamente por un médico, ex prisionero en Pisagua, que contenía restos de al menos 19 prisioneros que se encontraban momificados y que evidenciaban muertes por impacto de bala (ejecuciones), vista vendada, ataduras y señales de tortura. El hallazgo de la fosa de Pisagua causó impacto nacional.

6. El general Augusto Pinochet, aún comandante en Jefe del Ejército, ordenó en diciembre de 1990 el llamado “ejercicio de alistamiento y enlace” que, en la práctica, fue un acuartelamiento en reacción al trabajo de la comisión parlamentaria que entonces investigaba cheques por un total de tres millones de dólares pagados por el Ejército a su hijo Augusto Pinochet Hiriart por la adquisición de la empresa *Valmoval*, proveedora del Ejército de Chile. Tres años después, el 28 de mayo de 1993, soldados en ropa de combate y caras pintadas rodearon el edificio de las Fuerzas Armadas tras la reapertura de la causa, en un episodio conocido como “el boinazo”.



Fotografía: Andrés Aguirre

cuatro años. El Programa de Retorno se cierra en el año 1994, incluso inicialmente se había propuesto terminarlo en 1993. La Corporación de Reparación se diseñó por dos años, de 1992 a 1994, aunque logró extenderse por ley del Congreso hasta 1996. Pasó lo mismo con el Programa de Reparación y Atención Integral de la Salud (PRAIS), que se diseñó por cuatro años: en el año 1995 se dio por cumplido y se empezó a transformar en un programa de violencia y derechos humanos (incluyendo la violencia doméstica). Hubo también un programa para la salida de los presos políticos de la cárcel y su reinserción –eran 400– en 1990. Entonces, hubo un acotado diseño institucional de programas, bajo una concepción de que ya se había hecho todo lo posible en salud y en materia de retorno y, a su vez, ya se había enviado la ley para el reconocimiento y reparación de los exonerados, que fue aprobada en 1993. En términos estrictos se cumplió “lo previsto” en el Programa. Pero ese punto fue

el que entró en crisis, porque la implementación de lo previsto fue dejando en claro que no era suficiente para reparar a los miles de chilenos que habían sido afectados por la política represiva de la dictadura.

La justicia, el diálogo y la verdad

C. A.: ¿Y qué pasó en el terreno de la justicia?

E. L.: También en relación con la justicia se pensaba entonces que no iba a ser posible ir más allá de los procesos judiciales ocurridos fuera del período que cubría el decreto ley de amnistía de 1978.⁷ Se suponía que con un par de casos llamados “emblemáticos” estaría todo resuelto: el “Caso Letelier”, cometido en 1976 pero excluido expresamente del decreto ley de amnistía, cuya condena en Chile fue en mayo de 1995, y el “Caso de los Degollados”, cometido en 1985, también fuera del período cubierto por la amnistía, cuya condena fue a

7. La Ley de Amnistía o Decreto N° 2191 se sancionó el 18 de abril de 1978 y concedió amnistía a todas las personas implicadas en homicidios en calidad de autores, cómplices o encubridores cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sin distinción alguna entre los delitos comunes y aquellos cometidos con motivación política.

finés de 1994.⁸ Entonces, con dos casos de condenas parecía suficiente y que se había hecho todo lo posible. Pero ¿qué pasó con eso? Yo creo que, para mucha gente, para muchas víctimas, eso era insuficiente, aunque no era muy claro por dónde se podría introducir algún cambio. Pinochet, antes de terminar su gobierno favoreció el reemplazo casi completo de la Corte Suprema y nombró nuevos ministros de su confianza antes de salir. En ese contexto, tal como había quedado la configuración de los poderes públicos no se favorecía ni siquiera la condena moral de las violaciones a los derechos humanos. Eso quedó claro con la respuesta de las Fuerzas Armadas al Informe Rettig, justificando sus actuaciones en nombre de la salvación de la patria, sin entrar a discutir los hechos denunciados. Sobre ese punto no se pronunciaron, lo que se interpretó como una confirmación de la veracidad de las denuncias. Pero ellos objetaron la interpretación de los hechos. Señalaron que consideraban injusta la denuncia de sus actuaciones calificadas como violaciones a los derechos humanos y rechazaron el informe. Yo creo que esa discusión caló muy hondo en las tensiones internas de la coalición que formaba parte de la Concertación. Para algunos sectores en la Concertación la postura se podría resumir en “se hizo lo más que se pudo”; y para otros era “esto no es nada, falta mucho por hacer”. En este escenario, creo que hay un par de situaciones que dieron un giro a este proceso. La primera ocurre en el año 1996, cuando se presenta en Valencia la querrela por genocidio de ciudadanos españoles en Argentina y Chile. La prensa no le dio mucha importancia y mucha gente fue a declarar, aunque lo veía como “un saludo a la bandera”, es decir, como una obligación formal entre tantas otras cosas. Y, entonces, distintas circunstancias fortuitas, que fueron realmente fortuitas, permitieron que el juez Baltazar Garzón fuera informado de que Pinochet esta-

Yo creo que la detención de Pinochet marca una diferencia fundamental en la transición. En un sentido psicológico y moral: se mostró que era un sujeto que podía ser detenido y responder por sus actos, que no era intocable.

ba en la clínica London de Londres e hicieron posible que formalizara una petición de extradición. Con esa petición la policía inglesa arrestó a Pinochet. Yo creo que la detención marca una diferencia fundamental en la transición. En dos sentidos. Primero, en un sentido psicológico y moral: se mostró que era un sujeto que podía ser detenido y podía responder por sus actos, que no era intocable. Pero, en segundo lugar, también sucede una ironía en materia jurídica: los países signatarios de la Convención contra la Tortura tienen jurisdicción sobre ese delito solo en el caso en que el delito haya sido cometido en algún otro país signatario de la misma. Paradójicamente Pinochet había firmado la Convención contra la Tortura en el año 1987, señalando que lo hacía para demostrar que su gobierno no torturaba. Procesar a Pinochet generaba una gran tensión en Chile, especialmente entre sus partidarios y las fuerzas armadas. Había catorce países que estaban solicitando que compareciera ante distintos Tribunales. En esa coyuntura, el gobierno de Chile tomó la decisión política y táctica de reclamarlo por razones humanitarias.

8. El asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende, ocurrió el 21 de septiembre de 1976 y formó parte de un operativo realizado en Washington en el marco de la Operación Cóndor. El caso despertó el escándalo internacional y dio lugar al desmantelamiento de la agencia de inteligencia chilena Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y al procesamiento de Michael Townley (expatriado estadounidense colaborador de la DINA), Manuel Contreras (jefe de la DINA) y el general de brigada Pedro Espinoza. El caso de los Degollados fue el secuestro y asesinato de Santiago Esteban Nattino Allende, José Manuel Parada Maluenda y Manuel Leónidas Guerrero Ceballos, tres miembros del Partido Comunista de Chile. Fue llevado a cabo por los Carabineros en marzo de 1985. El hecho provocó una indignación generalizada que obligó a una investigación que tuvo como resultado la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. Fue también causa de la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y de la disolución de la Dirección de Comunicaciones de los Carabineros.

C. A.: En este proceso, ¿me puedes contar cómo entras a participar en la Mesa de Diálogo y en la Comisión Valech?

E. L.: Participé en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos entre 1999 y 2000. En ese tiempo yo estaba investigando sobre la reconciliación política. Acabábamos de publicar el libro *Las suaves cenizas del olvido*,⁹ que incluía los procesos de reconciliación política en Chile desde 1814 hasta 1932. Entonces, me invitaron señalando que, dado que estaba en el tema de la reconciliación política, tenía sentido mi participación en esa instancia. Y no había –como siempre pasa– muchas mujeres posibles. Luego, fui a la Comisión Valech, creo, por haber estado antes en la Mesa de Diálogo.¹⁰

El tema de crear la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech,¹¹ fue una decisión muy compleja para el Gobierno, considerando las cifras provenientes de distintas fuentes sobre personas detenidas por motivos políticos. Las estimaciones del Colegio Médico eran por lo menos de 200.000 torturados y presos políticos antes del fin de la dictadura. Las cifras del Programa de Reparación y Atención Integral de la Salud, entre los años 1999-2000 consideraban 800.000 personas susceptibles de ser categorizadas como personas con derecho a recibir salud mental por violaciones por derechos humanos, estimando que la cifra más importante se originaba en las víctimas de detención y tortura. Era totalmente distinto, como gobierno, proponer una Comisión para realizar su trabajo en un plazo breve

(de uno a dos años) considerando 200.000 casos en el horizonte, que si se contaba con el mismo plazo para hacer frente a cerca de 800.000 afectados. Frente a ese panorama, el gobierno del presidente Ricardo Lagos tomó la decisión de crear una comisión después de evaluar su factibilidad. Se hizo un seguimiento muy estricto de los números reales, proclamados por el propio régimen de Pinochet. En marzo del año 1975 el general Benavides, que era ministro del Interior, había dicho que hasta entonces había 41.000 “delinquentes” que habían estado o estaban detenidos, refiriéndose a los presos políticos. Entonces si se consideraba esa como una cifra dura y se le sumaban los datos de los casos atendidos por la Vicaría de la Solidaridad que eran cerca de 13.000 más, se podía pensar que la tarea era manejable, porque si eran 800.000 era imposible dentro de los plazos que duraba un gobierno.

Evaluando la experiencia, creo que el número de personas que concurrieron a la Comisión y fueron calificadas está subrepresentado. Sabemos que hay personas que no quisieron participar por distintos motivos. Hay personas que no se atrevieron o que no quisieron hacerlo. Me parece que, por ejemplo, a la gente de los sectores rurales le era imposible probar su detención, especialmente en recintos de Carabineros. Los estándares que tuvo la Comisión, desde la estipulación rigurosa de un plazo de seis meses para recoger la información hasta los criterios y medios de prueba que se fijaron para calificar los casos, fueron muy altos. Creo que debería existir una oficina permanente en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, con los apoyos institucionales requeridos,

9. Véase Lira, Elizabeth y Loveman, Brian (1999). *Las suaves cenizas del olvido: vía chilena de reconciliación política, 1814-1932*. Lom Ediciones: Santiago de Chile.

10. La Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos fue una convocatoria del gobierno que reunió a representantes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y del orden con abogados de derechos humanos, representantes de las iglesias y fuerzas morales del país y académicos en un esfuerzo de esclarecer la situación de los detenidos desaparecidos en Chile. La mesa sesionó entre agosto de 1999 y junio del 2000. El 13 de junio de ese último año el presidente Ricardo Lagos hizo público el acuerdo alcanzado: se estableció un plazo de seis meses para reunir antecedentes para dar con el paradero de las víctimas, solicitando la colaboración conjunta de las Fuerzas Armadas, representantes del poder civil y religioso y se consensuó una condena al uso de la violencia política.

11. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el obispo Sergio Valech, fue creada por el decreto 1.040, publicado en el boletín oficial el 11 de noviembre de 2003, bajo el mando del presidente Ricardo Lagos Escobar, para esclarecer la verdad sobre las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos y confeccionar un listado riguroso a partir de su reconocimiento. Comenzó a funcionar en noviembre de 2003 y recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.



Fotografía: Andrés Aguirre

que permitiese obtener la información necesaria y dar seguimiento a muchos de los casos que quedaron pendientes, justamente por falta de información.

C. A.: ¿Cuál fue específicamente tu trabajo en la Comisión Valech?

E. L.: Fue bien difícil. Yo no trabajé en la entrevista a los declarantes, aunque en algunas regiones los comisionados lo hicimos, pero sí recibí a algunas personas por distintos problemas y expectativas en relación con su declaración. La Comisión calificaba finalmente revisando los antecedentes y tratando de ser lo más ponderados, lo más justos posible, analizando los casos dudosos para asegurarse de que los datos fueran genuinos. Aunque quienes declararon ante la Comisión, la primera vez durante la presidencia de Ricardo Lagos, no sabían en qué iba a consistir

la reparación, hubo situaciones complicadas. Por distintos motivos, algunas personas exageraron o inventaron circunstancias que no eran plausibles o, al revés, los relatos eran muy limitados y acotados cuando las experiencias habían sido mucho peores. Evaluar la información es un trabajo difícil. Es una responsabilidad enorme y uno se puede equivocar, por eso se hizo entre varios. Cada uno tiene sus límites, por el tipo de profesiones, por el tipo de experiencia, por las ideas políticas, por distintas cosas.

C. A.: ¿Y ustedes trataron de ampliar el tiempo disponible?

E. L.: Las limitaciones de los tiempos para lograr una calificación justa se pudieron compensar cuando el gobierno dispuso en 2004 un período de revisión de casos, que se hizo durante seis meses. Es importante

La discusión sobre reconciliación durante la transición tenía muchas ambigüedades.

Entre ellas, subyacían las apelaciones al perdón, a dar vuelta la página. Eso me perturbaba. ¿Cómo les vas a pedir a las víctimas que perdonen? ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces consideré que era necesario analizar históricamente cómo se habían dado estos procesos.

considerar que no hubo financiamiento suficiente para poder tener una campaña de televisión durante el tiempo necesario, que permitiera que la gente supiera bien de qué se trataba y pudiera concurrir. Hubo muy poca prensa considerando lo que se necesitaba; las campañas de televisión fueron mínimas. Entonces, eso generó grandes limitaciones. La Comisión fue creada por un decreto del gobierno para recibir asesoría en esta materia, pero las decisiones políticas las tomaba el gobierno. La función de la Comisión era solo recomendar. Su existencia duró mientras duraba el mandato del Decreto y se disolvió al término del período establecido. En este marco, la decisión de embargar por cincuenta años los archivos de la Comisión fue una decisión de gobierno que se materializó en la ley 19.992. El presidente Lagos señaló que se hizo en nombre de las víctimas, considerando la petición de algunas de ellas para asegurar que sus declaraciones no fueran conocidas por sus hijos y familiares. Pero algunos de los y las declarantes solicitaron que se modifique la ley para que el Poder Judicial tuviese acceso a esa información y pudiese ser utilizada en los procesos judiciales. Actualmente (noviembre de 2017), se encuentra en el Congreso un proyecto de ley del Ejecutivo que permitiría al Poder Judicial acceder a las declaraciones de expresos políticos, previo consentimiento expreso de ellos, para

que sus declaraciones sean conocidas por los jueces que están investigando sobre casos de violaciones a los derechos humanos.

Cómo aprender del pasado

C. A.: ¿Cómo fue que llegaste a involucrarte en los proyectos de investigación histórica?

E. L.: Yo creo que fue resultado, precisamente, del trabajo que estaba haciendo, que me llevó a pensar que hay que entender mucho mejor cómo ha funcionado esta sociedad, qué nos pasó, por qué hemos llegado a esto. La discusión sobre la reconciliación durante la transición tenía muchas ambigüedades. Entre ellas, subyacían las apelaciones al perdón, a dar vuelta la página. Eso me perturbaba. ¿Cómo les vas a pedir a las víctimas que perdonen? ¿Qué implicaciones tiene esto? Entonces consideré que era necesario analizar históricamente cómo se habían dado estos procesos, cuáles son las distintas concepciones subyacentes a los discursos políticos existentes y cómo identificar los dilemas que tiene una sociedad democrática hoy. No podía ser que la estabilidad política y la paz social se basaran en la impunidad de todos. Eso fue lo que ocurrió en el pasado, ese fue el modelo histórico de este país.

Nos demoramos cerca de seis años en estudiarlo. Para abordar estas investigaciones busqué a Brian Loveman, un amigo historiador y cientista político que investigaba sobre Chile, con quien había colaborado en algunas ponencias, y lo invité a investigar sobre este tema. Quería entender el pasado, cuáles fueron los conflictos, por qué llegamos a estos conflictos y cuál fue el desenlace. Especialmente, cómo el tema de las amnistías –que parece ser hoy una mala solución– tenía mucho prestigio hasta los años setenta en todo el mundo, no solo aquí. Todas las transiciones partieron con amnistías que después se impugnaron, pero se impugnaron después de que el tema de la imprescriptibilidad de los crímenes de la desaparición forzada y de la tortura empezó a tener visibilidad y a prevalecer. Antiguamente no tenía ninguna visibilidad. El tipo de estudios que hemos hecho empezó con la reconciliación política en Chile en perspectiva

histórica; seguimos con las políticas de verdad y las exigencias de rendición de cuentas (las acusaciones constitucionales); las políticas de reparación y, ahora, estamos investigando sobre la justicia y el poder judicial. Nos parecía necesario para entender el proceso en este país, cómo llegamos a la crisis que terminó con un golpe de estado, cómo se implementaron las soluciones que alcanzamos y qué limitaciones tenemos. A mí me parecía que eso era algo que no estaba escrito ni estaba respondido y que era interesante investigarlo.

C. A.: ¿Cómo abordar desde esta perspectiva el pacto de silencio entre los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos?

E. L.: Como siempre que se comete un crimen, las personas se confabulan para que no las identifiquen. ¿Cómo no se iban a confabular los agentes del Estado en este período? A mí me parece que es obvio que eso sea así. Trataron de cometer crímenes perfectos, borrar las huellas, cerrar las bocas. La investigación y la denuncia de mucha gente fue lo que hizo ineficaz este método. No hay muchos arrepentidos, son pocos, contados con los dedos de las manos. Las políticas que se trataron de implementar de delación compensada no resultaron como se esperaba. Muchos de los que participaron como torturadores y verdugos estaban convencidos ideológicamente de que salvaron a la patria, aunque una parte importante del país, entre quienes me incluyo, crea que no es así. Entonces son dos creencias igualmente potentes, de uno y otro lado. Frente a eso lo único que puedes hacer son investigaciones acuciosas, finas, lograr más y mejor información. Quizás –por exagerar– solo en cien años más alguien va a encontrar un archivo escondido no sé dónde. Pero en la actualidad, eso no va a ser posible. Creo que las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial son endogámicos: se cruzan relaciones de parentesco entre tíos, abuelos y tatarabuelos. No hay argumentos suficientes y no es fácil cooperar para que el tío o el abuelo figuren como criminales o responsables de acciones que en su momento se consideraron legítimas dentro de esas instituciones. Me parece que esta situación no debería leerse solo desde la indignación moral por las violaciones a los derechos humanos. Creo que

es importante tratar de entender cuáles son las categorías que explican las declaraciones, como por ejemplo la reacción de las Fuerzas Armadas ante el informe Rettig o cómo la defensa de Pinochet en Londres fue tan fuerte en su momento (lo que cambió después de las denuncias sobre las cuentas en el banco Riggs). Pienso que tal vez, cambiadas las circunstancias, la otra mitad de los chilenos podría haber defendido la actuación de las Fuerzas Armadas con la misma fuerza. Pero eso no justifica en nada los atropellos cometidos. Por eso mismo, entendiendo las emociones y los argumentos en juego, se debe valorar que las Fuerzas Armadas reconocieron que lanzaron gente al mar, que violaron los Convenios de Ginebra que estaban vigentes en Chile desde 1951. No podían alegar que no lo sabían. Entonces, si se cree que había una guerra, existían los Convenios de Ginebra. Y a mí me parece que eso es mucho más potente. Y por supuesto que hubo pactos de silencio y va a seguir habiéndolos, y muchos se van a morir con los secretos. Pero también hay que relativizar esta afirmación sobre “tanto secreto”. En los procesos judiciales se ha terminado probando que en muchos casos hubo órdenes institucionales.

Yo no espero que haya algún arrepentido que en el último minuto diga algún secreto que no sabemos. Pienso que sabemos lo más importante que tiene que saber una sociedad y es que estos hechos ocurrieron en nombre de valores que aquellos que los cometieron creían legítimos, en el marco de una enorme polarización en la sociedad. Entonces, eso nos da una tarea muy importante para el futuro. Tú no puedes construir las formas de relación política sobre la base del exterminio de unos por otros. No puedes. Hay muchos todavía que creen que esa es la manera.

C. A.: Eso me hace pensar hasta qué punto sirven hoy las políticas de memoria y cuánto pueden realmente aprender las sociedades de su pasado.

E. L.: Bueno, pero hay países donde hay una situación de mucha resistencia a que se reinstale la estigmatización de unos y se justifique su exterminio. En Alemania no se encuentran justificaciones culturales al nazismo y hay una alerta muy fuerte al resurgimiento de políticas en ese sentido. Pero en los Es-

tados Unidos no. Allí han pasado más de cincuenta años de la lucha por los derechos civiles y políticos. Hasta hace cincuenta años los negros eran considerados como de otra categoría: no podían entrar a los restaurantes, ni a los baños de los blancos, ni a las Universidades, ni cruzar tales o cuales barrios. Funcionaba como el Apartheid en Sudáfrica. La cultura de integración, de respeto de los derechos de las personas, de la dignidad de las personas, no es nada prevalente y es una lucha con avances y retrocesos en diversos lugares del mundo. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es que esto tenga un lugar importante aquí. Considero que lo que se ha hecho es muy importante y de gran valor educativo. No se ha hecho todo lo que una quisiera, pero sí mucho. Tenemos el Museo de la Memoria que, aun con sus limitaciones, es un lugar de diálogo para hablar sobre estas cosas. También los monumentos, los sitios de memoria, los cursos y las investigaciones realizadas o en proceso son importantes en este sentido.

C. A.: ¿Qué aprendizajes tenemos pendientes?

E. L.: Siempre he pensado que el riesgo de la memoria es la falta de juicio crítico y autocrítico, es decir, suplantarse el juicio moral por el valor de dar la vida por las creencias y los proyectos. Yo creo que es parte de la historia de la izquierda, pero es parte de la historia de la humanidad también. El hecho de que una persona esté dispuesta a dar la vida por algo, le da un valor y una connotación a sus acciones que es considerada de por sí de mucho mayor frente a quienes no están dispuestos a darla. Pero me parece que en la vida política no basta con dar la vida, hay que tomar en cuenta las vidas de los otros. Tienes que ver el impacto de las propias acciones sobre las vidas de los demás para tomar la responsabilidad y el riesgo conscientemente. O sea, si yo quiero hacer un sitio de memoria, tengo que saber –que es la discusión que ha habido en Providencia ahora–, que hay gente a la que le va a molestar, que para alguna gente va a ser un problema, así como para otros eso va a ser lo mejor que pudo haber ocurrido. ¿Cómo compatibilizo todo eso? Habrá que considerar todas las alternativas. Entonces eso me parece que es un aprendizaje muy importante, porque la memoria



Fotografía: Andrés Aguirre

Elizabeth Lira y Carolina Aguilera. Octubre de 2015

no se puede hacer para implantar mi memoria sobre la tuya o mis valores sobre los tuyos. Es como si fuéramos a reemplazar la discusión política de los 1970 con esta otra. Tenemos que hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Yo creo que la psicología aporta herramientas, en el sentido de que es un tipo de enfoque muy centrado en la persona, la familia, la comunidad, las personas en su contexto. Y esas son cuestiones que tenemos que considerar para hacer habitable el planeta. ✕

Crónica de una trayectoria

NADIA TAHIR*

Acerca de *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social* de Elizabeth Jelin, Buenos Aires, Siglo XXI, 2017, 285 páginas.



Elizabeth Jelin es sin lugar a dudas una de las investigadoras más significativas en los campos de los estudios sobre la memoria y los movimientos sociales. Sus investigaciones, sus publicaciones y la red de especialistas que formó a finales de la década del noventa y principios de la del 2000 ya integran parte de un campo de investigación bien asentado tanto en la Argentina como a nivel continental. En este sentido, podemos pensar que este libro es una suerte de recopilación, en la que la autora retoma ocho de sus trabajos. En cierta medida lo es, ya que permite acceder a artículos que fueron publicados en distintos medios y a veces en distintos países. Eligiendo ocho ejes, ocho capítulos, que permiten tener una visión de conjunto

sobre su carrera y los estudios sobre la memoria, Jelin crea una obra que sin duda servirá a numerosos docentes y jóvenes investigadores. En efecto, este libro tiene una clara impronta pedagógica al reunir artículos y ponencias que, si bien tratan temas específicos, siempre fueron publicados o presentados dentro de un marco más amplio sobre transiciones, democracia, violencia o memoria. Si este aspecto es fundamental y permite acceder a un material esencial para la comprensión de los procesos memoriales y del avance de los estudios sobre la memoria en América Latina, hay otros aspectos de *La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social* que son todavía más interesantes.

Como bien lo señala la propia investigadora en su introducción el libro parte de una propuesta suya a la editorial, y esto es, probablemente, lo que le da una inflexión tan personal. En efecto, a pesar de que se publican trabajos empíricos y analíticos fruto de sus investigaciones, nos adentramos en el recorrido académico de Jelin con “un tono más biográfico, íntimo y autoreflexivo” (p. 13). De ahí que, como bien lo dice la autora, “el resultado es un modo de escritura híbrido, entre lo académico, el compromiso cívico-político y mi propia subjetividad” (p. 13). Aunque no es la primera vez que Jelin asume la parte de subjetividad de su labor, es, seguramente, la primera vez que este aspecto está tan presente y que de hecho es el protagonista de la obra. Se trata, sin duda, del mayor aporte de este libro que nos adentra en la carrera de una investigadora con una honestidad intelectual no siempre presente en las publicaciones de Ciencias Sociales.


Señalados en bastardilla, estos apuntes suelen estar al inicio de cada capítulo y permiten, en un primer momento, conocer el punto de partida del trabajo, el marco y el contexto en los cuales se han realizado. También se refiere a las diferentes reescrituras del trabajo publicado, convertido, aquí, en capítulo. En este sentido, el libro se transforma, quizás involuntariamente, en un elogio de la reescritura en un ámbito, la investigación académica, en el que a menudo este ejercicio es percibido como algo negativo —un “acto de pereza”, una “acumulación de pu-

*Maître de Conférences de la Universidad de Caen Normandía (Francia) y Doctora en Estudios Romanos de la Universidad de París-Sorbonne.

blicaciones” para alimentar una carrera—. Sin embargo, lo que claramente demuestran los ocho capítulos es que reescribir y repensar un trabajo forma parte del oficio y de la contribución al avance de una investigación. Y es que el libro da a veces la sensación de haber sido un laboratorio para Elizabeth Jelin: retomando el hilo de investigaciones que fueron iniciadas hace más de treinta años, permite señalar sus propios límites y dificultades como investigadora. Para entender mejor esta “experiencia”, vamos a dar dos ejemplos.

En el tercer capítulo del libro “Certezas, incertidumbres y búsquedas. El movimiento de derechos humanos y la construcción de la democracia en la Argentina” la autora multiplica las intervenciones en bastardilla. Al inicio señala que se trata de un artículo publicado en 1995 y retomado en 2001. Es, sin duda, uno de los trabajos más importantes de Jelin ya que es la primera investigación desde el libro de Ricardo Leis en 1987 que se centra en “el movimiento de derechos humanos”. Además, es en el marco de este artículo cuando emergen las categorías de “afectados” y “no afectados” para subrayar diferencias sustanciales dentro de este “movimiento”. Ahora bien, al inicio se señala que este artículo ha sido reescrito en 2016 para la publicación en este libro: se incluyen entrevistas que no fueron publicadas en el artículo original y referencias a trabajos posteriores a 1995. En medio del capítulo, en bastardilla, la autora interviene para señalar que fue durante esta investigación cuando “cho[có] con la memoria”, insistiendo sobre esta no elección de un campo de investigación al cual le dedicará gran parte de su carrera. A pesar de que es asumido por la autora en la introducción del libro, el recurso genera la sensación de que la impronta personal se superpone con la investigación y de que quizás hubiera sido útil incluir en la reescritura una discusión más acabada de ciertas categorías —movimiento de derechos humanos, afectados, no afectados, víctimas, víctimas directas— que son centrales en otros capítulos del libro. En definitiva, la superposición de escrituras (la de 1995, la de 2001 y la de 2016) con los elementos biográficos en bastardilla genera múltiples sentidos, que corren el riesgo —salvo una lectura especialmente atenta— de complicar la lectura de un trabajo que en su momento representó un abordaje pionero y que ahora se hubiera beneficiado de una mayor contextualización.

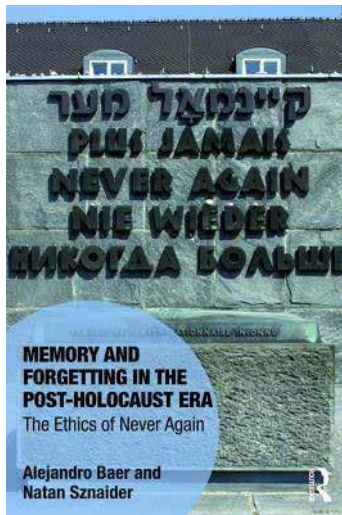
El segundo ejemplo proviene de una afirmación de la propia autora sobre el enlace que establece entre dos objetos de estudios: memoria y cuestiones de género. Con la honestidad intelectual que la caracteriza, Jelin señala en el sexto capítulo que las cuestiones de género y más específicamente las reflexiones sobre “el papel social de las mujeres” (p. 193) son un campo de investigación que siempre le ha atraído por razones más personales que profesionales. De hecho, ha publicado recientemente trabajos sobre la familia que ha intentado cruzar en algunas ocasiones con sus investigaciones sobre la memoria. Partiendo de una investigación que se centró en los “emprendedores de la memoria” —dentro de los cuales los lazos familiares desempeñan un papel estructural—, esta relación resulta, sin duda, una opción razonable: al leer el quinto capítulo del libro en el cual Jelin insiste sobre el componente del “familismo” en las disputas por la memoria de la última dictadura en la Argentina, tenemos la sensación de que se ha logrado la conjunción. Sin embargo, lo que ella misma admite es que no ha podido hacer dialogar del todo sus investigaciones sobre estos dos campos, lo que a veces lleva a dejar de lado algunos ejes de investigación en el campo de la memoria. Por ejemplo, al insistir sobre el “familismo” o la preeminencia de madres, abuelas, conyugues y mujeres en general en las luchas por el pasado, se deja de lado la presencia, quizás muy puntual, pero que está presente en los reclamos que surgen de las cuestiones ligadas al pasado dictatorial y que se refieren más a la labor de los organismos de “no afectados”. ¿Cómo se puede interpretar, tras varias décadas, la correlación entre pasado dictatorial y derechos humanos? Las breves referencias en el libro al gobierno que asumió el poder a finales de 2015 dan quizás algunas pautas para ello.

La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social es una gran contribución a los estudios sobre la memoria porque permite acceder a un material fundamental para toda persona interesada por el pasado reciente argentino y latinoamericano y porque permite entender el marco y la historia en los cuales emergieron estos estudios. En este sentido, los dos ejemplos mencionados demuestran que esta investigación y este recorrido siguen abriendo perspectivas para un campo que, como dice la propia Elizabeth Jelin, no se cierra nunca. 

La construcción de una ética del “Nunca más”. Un análisis de las memorias transnacionales de Argentina, España y Europa del Este

WANDA WESCHLER*

Acerca de Memory and forgetting in the post-Holocaust era. The ethics of Never Again de Alejandro Baer y Natan Sznajder. Oxford, Routledge, 2017, 173 páginas.



Luego de analizar en diversos trabajos la memoria del Holocausto y su representación, Alejandro Baer y Natan Sznajder se preguntan en *Memory and forgetting in the post-Holocaust era. The ethics of Never Again* cómo las sociedades se relacionan con su pasado violento en el contexto actual de una cultura globalizada del Holocausto. Al indagar la memoria social y las identidades colectivas, y en particu-

lar las conmemoraciones y la transnacionalización del recuerdo, el trabajo analiza tres casos —el argentino, el español y el del Este europeo— y observa el potencial de la memoria y la denominada “ética del Nunca más”, convertida en un imperativo que hace que los derechos humanos, la tolerancia y la pluralidad política sean relevantes para quienes recuerdan.

Desde un enfoque sociológico, los autores realizan un interesante aporte para poder pensar las memorias de la historia reciente desde la particularidad nacional pero en una perspectiva transnacional. Según los autores, fue la memoria del Holocausto la que proveyó un modelo para poder elaborar otros genocidios y violaciones de derechos humanos. Al trabajar en un mismo estudio tres casos diferentes, se evidencia cómo una memoria pudo volverse cosmopolita, itinerante, multidireccional y desterritorializada y potenciar las memorias locales. Su universalización influyó en los debates y funcionó como un prisma inspirador para otras víctimas de violencia.

A partir del caso argentino se analizan los tiempos diversos de la justicia y el trabajo conmemorativo allí donde el Holocausto y el término “genocidio” se han convertido en poderosos prismas para los artistas, eruditos y activistas de derechos humanos. Como caso de estudio no europeo, se recuperan las formas diversas de representación y manifestación pública de la memoria sobre el Terrorismo de Estado y los diversos actores que las llevaron a cabo. Retomando algunos trabajos realizados por académicos argentinos, el estudio repasa los aspectos centrales de la política de derechos humanos llevada a cabo por diversas organizaciones. Su principal aporte es realizar una genealogía de las políticas de la memoria llevadas a cabo y poder vincularlas con el caso español rescatando el lugar que ocupan las nuevas generaciones.

A partir del caso español, se aborda la revisión en la historia reciente del franquismo desde la exhumación de las fosas comunes de las víctimas de la Guerra Civil. Este hecho cuestionó el éxito de la transición a la democracia basado en la suposición de que el silencio era clave para la democratización. Esto generó un

* Magister en Investigación Histórica (UdeSA), profesora de Historia (UBA) y docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche.


cambio de paradigma en la reflexión sobre el pasado y un replanteamiento de la discusión en términos de un lenguaje transnacional. Como en el caso argentino, “Verdad, Memoria y Justicia” también se convirtió en un grito para muchos españoles en el nuevo milenio.

Al analizar la memoria española, los autores evidencian que fue la experiencia de Argentina y el proceso de europeización de España los que introdujeron la memoria del Holocausto como modelo para sus iniciativas políticas y memoriales. Una vez más, el trabajo esclarece el modo en el que se produjo un proceso de “memorias solidarias”: fue la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina la que iluminó a las nuevas generaciones españolas, nietos de las víctimas. Estos actores repreguntan al pasado, buscan memoria y justicia, y reclaman a sus padres su silencio.

Un aporte fundamental del trabajo es el cruce entre las memorias, especialmente el trazado de las similitudes y diferencias. Tanto el rol de las nuevas generaciones como el haber tomado prestado el concepto de “desaparición forzada” de Argentina son aspectos que entrelazan los casos estudiados. Este es otro aporte del trabajo: poder evidenciar la incorporación de ciertos símbolos procedentes de otras luchas y de otros países, y su transformación en un sistema de significados locales.

En el último estudio de caso, se aborda la presencia del Holocausto y su memoria en la Europa *post* estalinista que, a diferencia de España, está atravesada por la memoria de los crímenes comunistas además de los fascistas. A pesar de constituir el territorio más cercano al Holocausto, es el caso que menos atención ha recibido en el campo académico y en el que se observa un desarrollo más tardío de las políticas de la memoria. En el Este europeo, después de 1989, el Holocausto se vuelve relevante y se superpone con los crímenes del régimen comunista. En este caso, como en el español, se encuentran diversas capas narrativas de la memoria y de conflictos dentro de un marco nacional de victimizaciones y sufrimientos que compiten. Las propias prácticas conmemorativas impuestas por el Estado fueron debatidas tras el comunismo, contribuyendo a la renacionalización de las memorias y planteando un desafío a la narrativa centrada en el Holocausto del Occidente.

A través de un minucioso trabajo que incluye imágenes (algunas incluso cedidas por los mismos autores) y un permanente diálogo con los estudios locales, la investigación de Baer y Sznajder realiza un aporte para pensar la relación tiempo-espacio de las memorias locales en una perspectiva transnacional. A lo largo de todo el libro, el vínculo entre lo universal y lo particular aparece como de mutua constitución y no de oposición y se evidencia la capacidad que tienen las experiencias de lucha de viajar a través del tiempo y el espacio. En los tres casos se afirma que el Holocausto y el concepto de genocidio han tenido importantes implicancias en sus políticas de la memoria. Sin embargo, como ilustra el análisis de las conmemoraciones, el Holocausto no aparece como un significante totalizador, que contiene los mismos significados para todos, sino que en cada proceso y en cada generación sirvió para redefinir, negociar y legitimar las imágenes de las partes locales e invertirlas con un nuevo significado, posicionándose a través de las fronteras nacionales como un símbolo global del mal último. El “Nunca Más” se volvió así un imperativo moral omnipresente. El trabajo demuestra, además, que esta conmemoración transnacional del Holocausto llevó al reconocimiento de una demanda apolítica de la víctima y del perpetrador y evitó procesos de olvido progresivo, convirtiéndose en un poder unificador y transformador. De esta manera, mientras que la soberanía de los Estados permanece intacta, su autonomía para determinar el alcance de las solidaridades en términos nacionales se ha ido reduciendo progresivamente.

En conclusión, *Memory and forgetting in the post-Holocaust era. The ethics of Never Again* es un libro compleja y reflexiva y una lectura recomendable (aunque aún no se cuenta con su versión en español) para quienes busquen comprender el desarrollo de las luchas por la memoria y el olvido en la era *post* Holocausto. Más específicamente, invita a pensar los usos políticos del pasado reciente en el contexto de una Argentina en la cual se alzan discursos contra las luchas por la Justicia, la Verdad y la Memoria y el negacionismo se encuentra en el centro de la escena. 

Defensa de la historia comparada para la reinterpretación de los exilios políticos del Cono Sur

JORGE DE HOYOS PUENTE*

Acerca de *Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción de las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989)* de María Soledad Lastra, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2016, 300 páginas.



Los estudios de los exilios políticos gozan de buena salud. En los últimos años diferentes foros internacionales han puesto de manifiesto la existencia de una profunda renovación en torno a las

agendas, metodologías y perspectivas de análisis de un fenómeno complejo y transversal como son los exilios políticos contemporáneos. Espacios de discusión donde sobresalen aquellos trabajos que aportan nuevas preguntas y nuevos acercamientos, como es el caso de los trabajos de María Soledad Lastra, investigadora argentina con una sólida formación internacional interdisciplinaria. *Volver del exilio. Historia comparada de las políticas de recepción de las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989)* es una monografía que está llamada a perdurar, en la medida en que aborda, con rigor y solvencia, una investigación compleja tanto en fondo como en forma. El trabajo de Lastra es un estudio bien armado y fundamentado que propone una nueva mirada sobre los exilios provocados por las últimas dictaduras de Argentina y Uruguay. Son varias las novedades que presenta.

En primer lugar, la apuesta clara por la aplicación de una perspectiva comparada. A diferencia de muchos trabajos que aspiran con poco acierto a desarrollar esta difícil técnica de análisis, Lastra consigue con maestría sacar todo el partido a la comparación. Su éxito radica en dos hechos fundamentales. Por un lado, un exhaustivo conocimiento de ambas experiencias, la Argentina y Uruguay, lo que permite a Lastra desenvolverse con soltura a la hora de realizar la comparación, presentando un relato sólido y solvente de los hechos. Por otro lado, la renuncia a establecer una comparación artificial que fuerce los procesos para conseguir un resultado óptimo. Lastra, en un ejercicio de honestidad y profesionalidad, muestra todos los elementos para que el lector interesado pueda formar su propio juicio crítico, sin sentirse obligado ni forzado a asumir una interpretación reduccionista.

En segundo lugar, Lastra opta por circunscribir su análisis al fenómeno del retorno, del regreso, del desexilio, lo cual en sí es una importante novedad por varias razones. La primera de ellas es que Lastra elige centrar su investigación en las políticas de recepción desplegadas en ambos procesos transicionales. De esta manera, el foco de interés principal del libro se sitúa


*Doctor en Historia, Investigador de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Secretario General del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED.

no tanto en las comunidades exiliadas o en los países de acogida, sino en sus países de origen y retorno. Esta elección nos lleva a la segunda de las novedades que podemos encontrar como es analizar estas políticas como parte importante de las transiciones, lo que a su vez nos permite situar nuevamente a los exilios dentro de sus historias nacionales. El trabajo de Lastra consigue precisamente de forma muy satisfactoria abrir un camino que permite insertar las experiencias exiliares dentro de la historia reciente de Argentina y Uruguay, una vieja reclamación que permite salir del gueto de la “exiliología”, altamente demandada no solo para los exilios del Cono Sur, sino también para otros casos, como el exilio republicano de 1939, resultado de la Guerra Civil española.

En tercer lugar, Lastra aborda de forma valiente el estudio de la imagen de los exiliados retornados ante las sociedades de origen y su posición marginal dentro de una noción general de víctimas. Este es un fenómeno que se da en muchos otros procesos transicionales donde los exiliados son relegados a los últimos puestos como víctimas de segunda frente a desaparecidos, asesinados o torturados. Si miramos hacia las largas dictaduras de la Península Ibérica en el siglo XX y sus diferentes procesos de reinstauración democrática podemos comprobar cómo los exiliados también viven experiencias similares a la hora de afrontar el retorno, no exentos de la estigmatización del “exilio dorado” asociada a la idea de privilegio, donde los exiliados tienen que luchar para adquirir su propia condición de víctimas de violaciones de derechos humanos básicos.

En cuarto lugar, encontramos como un acierto del libro el diálogo que se establece entre el papel de la sociedad civil y las autoridades estatales a la hora de implementar acciones y políticas encaminadas a favorecer el retorno. En este sentido, la comparación de ambos procesos y ambos modelos de transición son relevantes, porque permiten señalar de forma nítida los marcados contrastes existentes entre la experiencia argentina y uruguaya. Dos estrategias diferentes a la hora de jerarquizar las prioridades de justicia y reconciliación que sin duda pueden ser debatidas de forma procelosa.

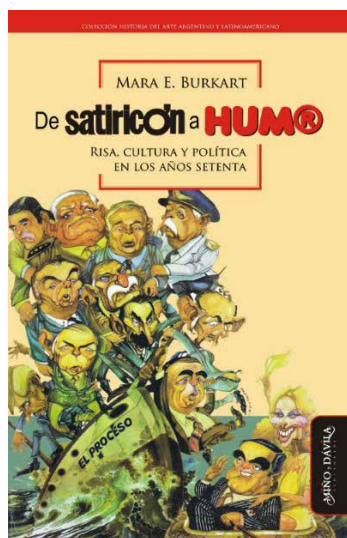
Finalmente, el modo de presentar los resultados de la investigación es plenamente satisfactorio. Lastra consigue, tanto con la estructura del libro como con los modos de afrontar las diversas y ricas problematizaciones, un equilibrio muy solvente. Como con toda buena investigación, el lector finaliza su tarea con algunas demandas derivadas de las incógnitas que se generan. En mi caso, entre ellas están una cierta curiosidad por obtener un mayor nivel de detalle en los modos en que los exiliados interactúan con esas políticas de recepción, el grado de satisfacción y eficacia alcanzada, aunque Lastra ya nos anunciaba en la introducción que no era ese precisamente su objetivo prioritario.

Sin duda, los objetivos de Soledad Lastra se cumplieron ampliamente en esta investigación. Gracias a *Volver al exilio. Historia comparada de las políticas de recepción de las posdictaduras de la Argentina y Uruguay (1983-1989)* hoy tenemos un mejor conocimiento de cuales fueron los papeles de los exiliados retornados en las nuevas democracias y con qué estrategias fueron abordados por parte de Argentina y Uruguay esos procesos de retorno. De sus futuras investigaciones, con toda seguridad, encontraremos nuevas preguntas y nuevos retos para problematizar y debatir no solo los estudios sobre los exilios, sino también los procesos de definición de espacios democráticos contemporáneos. 

Límites y transgresiones del humor gráfico durante la dictadura militar

MARIELA ACEVEDO*

Acerca de *De Satiricón a HUM®. Risa, cultura y política en los años setenta* de Mara Burkart, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2017, 388 páginas.



En *De Satiricón a HUM®. Risa, cultura y política en los años setenta*, Mara Burkart reconstruye el campo de las revistas de humor gráfico y su vinculación con el contexto socio-político en el período más violento de la historia argentina. Mapear los proyectos editoriales en el marco de la creciente violencia política y represión estatal lleva a la investigadora a plantear una periodización que no se ajusta estrictamente a los

tiempos políticos, sino que —a partir de ciertas fechas que operan como parteaguas de la historia— teje las retracciones y recomposiciones del campo cultural. Así, Burkart encuentra más continuidades que rupturas en el incremento de la violencia entre 1974 y 1978, momento en el que señala una primera distinción que permite la emergencia de *HUM®*, revista a la que dedicará una mayor extensión en su análisis por su relevante rol cultural.

El análisis se inicia en 1972 con la risa irreverente de *Satiricón*, una revista que se propuso profundizar en la revolución sexual y cultural de los sesenta, y concluye con los números de *HUM®* que se publican al momento de la recuperación democrática en 1983. Alrededor de estos dos polos, Burkart repone el arco de revistas de humor gráfico tales como la cordobesa *Hortensia*, las propuestas de *Mengano*, *Chaupinela*, *El Ratón de Occidente* y *Tía Vicenta*, a las que suma aquellos proyectos que no lograron consolidarse tales como *María Bizca* y *Feriado Nacional* y las propuestas que se desprendieron de *HUM®*: *HUM®* y *Juegos*, *SuperHumor*, *El Péndulo*, *HURRA* y *HUMI*.

La autora propone además una postal de época en la que la cultura masiva, el cine, el teatro, la televisión y la prensa gráfica dialogan, confrontan, ponen en circulación ciertas voces e imágenes o silencian a figuras que incomodan por su posición política en el campo cultural. En ese contexto, la investigación avanza sobre la actuación de la Editorial de La Urraca como canalizadora de propuestas de un espacio alternativo a la cultura oficial inserto en el corazón mismo de la cultura masiva. A partir del análisis discursivo de las editoriales, artículos, historietas y *cartoons* se componen una serie de estrategias de avance, repliegue, rodeo y tanteo que la publicación realizaba frente a los temas que era posible poner a circular.

En el primer capítulo, dedicado a *Satiricón*, además de un análisis de las notas de opinión y las viñetas de humor gráfico e historietas que plasman la creciente violencia, Burkart ensaya una interesante aproximación desde la perspectiva de género y, a pesar que “en

*Profesora y Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Integra el Grupo de Trabajo Géneros y Feminismos en el IEALC.


Satiricón el deseo sexual propio de la vida cotidiana no tenía género, edad, bandera política ni ideológica, aunque sí clase social ya que sus protagonistas eran principalmente de clase media”, unos párrafos más adelante se dedica a señalar varios ejemplos que entiende como parte de un “machismo que aun permeaba la sociedad argentina” (p. 55). Así explica que aunque la publicación impugnaba el modelo de mujer tradicional representado por Doña Petrona, celebraba el modelo de mujer objeto encarnado por la Coca Sarli e invisibilizaba otro modelo posible de mujer como la representada por las intelectuales. Esta aproximación desde una perspectiva de género no se repite en las otras revistas analizadas, tal vez porque esta primera publicación hace de la sexualidad un tema explícito, que se pretende silenciar durante la dictadura en revistas como *HUM*[®] pero que hubiese sido interesante de explorar.

Entre los capítulos dos y tres Burkart plantea un excursus sobre el proyecto cultural de la dictadura militar señalando una dimensión destructiva (la de la aniquilación) y otra productiva (de sustitución de una cultura popular moderna por otra conservadora). En este proyecto de reconfiguración de la cultura identifica dos vertientes conservadoras en conflicto: una de sesgo moralista y otra de sesgo comercial que es la que se impone a partir de 1978. Será ahí justamente donde *HUM*[®] encuentre un espacio en la cultura masiva y se abra paso para desarrollar una propuesta alternativa que terminará consolidando una emergente posición progresista.

Los capítulos tres y cuatro analizan dos períodos de *HUM*[®] que marcan distintas estrategias de interpelación al lector. Entre 1978 y 1981, Burkart destaca la preminencia de la imagen por sobre la palabra, una crítica que se centra en la economía y un uso de la sátira que apunta a los integrantes civiles del gobierno de facto. Quienes hacen la revista se definen en este momento como “ni oficialistas ni antioficialistas, humoristas”. A partir de 1981, Burkart señala un proceso de creciente politización, que acompaña y canaliza las demandas de un sector de la población, que hoy podría denominarse como una “minoría intensa”. En este período la imagen cede espacio a la palabra y una renovación del *staff* y de los temas

marca una posición que se hace eco de la presión por la apertura democrática.

La investigadora dedica un apartado importante a la guerra de Malvinas y la posición de la publicación que celebró la maniobra militar y explicitó su posición de apoyo. La derrota de la guerra marca un cambio en la propuesta editorial. El apoyo a la “gesta patriótica” mutó entonces a la denuncia de lo que la revista presentó como un pacto entre la sociedad (que había aceptado sin opciones el silencio sobre la represión ilegal) y los militares (que a razón de restaurar el orden habrían roto el acuerdo y exacerbado los métodos violentos). Burkart señala que “la revista de Cascioli fue un espacio donde reconocer y redimirse de las culpas” (p. 288). Asimismo, estudia el rol de la publicación durante la posguerra a través de una entrevista de Osvaldo Soriano al sociólogo Alain Rouquié que instaló la idea de “desmilitarización” de la política, concepto que marcaría el pulso en las siguientes décadas. El capítulo quinto expone la diversidad de propuestas culturales que la Editorial de La Urraca exploró: expandió el público lector de su revista “madre” a través de otros emprendimientos editoriales, pero también exploró la producción teatral, la edición de música popular y la organización de eventos masivos entre otros emprendimientos que imprimieron a *HUM*[®] la imagen de ser un “faro de un frente antidictatorial heterogéneo y polifónico” (280).

Para concluir, es necesario subrayar la importancia del análisis de Burkart, de carácter transdisciplinario, que vincula el contexto sociopolítico con el consumo cultural de las clases medias y la historia de los medios. En estos cruces la investigadora apela a los estudios de la memoria y el pasado reciente, lo que permite leer en las revistas de humor gráfico los miedos y expectativas de diferentes actores. El abordaje de las imágenes recupera aportes de la semiótica y los estudios visuales que se integran con el análisis discursivo de columnas y entrevistas. Los hallazgos se complementan con la palabra de protagonistas entrevistados —dibujantes, editores, colaboradores— que sumado a los datos y las interpretaciones de Burkart convierten la rigurosa investigación de *De Satiricón a HUM*[®]. *Risa, cultura y política en los años setenta* en un apasionante viaje por el pasado reciente. 



Clepsidra.
Revista Interdisciplinaria de
Estudios sobre Memoria.
ISSN 2362-2075
Volumen 5, Número 9
marzo 2018